CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN

Sesión del Pleno

celebrada el lunes, 18 de junio de 1990

ORDEN DEL DIA

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 5 y 6 de junio de 1990.

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

- De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (número de expediente S. 621/000005) (número de expediente C. D. 121/000017).
- De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley de medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria (número de expediente S. 621/000006) (número de expediente C. D. 121/000008).

SUMARIO

Se abre la sesión a las doce horas y doce minutos.

	Página
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 5 y 6 de junio de 1990	855

Es aprobada por asentimiento.

	Página
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados	855

	Página
De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990	855

El señor Presidente hace uso de la palabra para exponer los criterios establecidos por la Mesa, oída la Junta de Portavoces, para el debate de los votos presentados, y concede

- la palabra al señor Jerez Herrera para la presentación del dictamen. A continuación del señor Jerez hace uso de la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solchaga Catalán) para la presentación del proyecto de ley en nombre del Gobierno.
- Comienza el debate de las propuestas de veto e interviene para la defensa del presentado por el Grupo Popular el señor Ortí Bordás. Interviene en turno en contra el señor García Sánchez.
- Se suspende la sesión a las trece horas y cincuenta y cinco minutos.
- Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
- Para la defensa de la propuesta de veto del Grupo parlamentario de Convergència i Unió, interviene el señor Cardona i Vila. En turno en contra hace uso de la palabra el señor García Sánchez. El señor Quetglas Rosanes defiende el veto del Grupo del Centro Democrático y Social. En turno en contra hace uso de la palabra el señor García Sánchez. El señor Aguirre Barañano defiende el veto del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. En turno en contra interviene el señor García Sánchez. El señor Pujana Arza defiende su propuesta de veto. En turno en contra, hace uso de la palabra el señor García Sánchez.
- Se abre turno de portavoces. Intervienen los señores Pujana, Aguirre Quetglas, Cardona, Ortí y Barreiro. Por el artículo 87 interviene los señores Quetglas y Ortí. Interviene el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solchaga Catalán).
- Comienzan las votaciones de los vetos, y se rechaza el del Grupo Popular por 101 votos a favor y 125 en contra.
- Se rechaza el veto del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 100 votos a favor y 124 en contra.
- Se rechaza el del Grupo del Centro Democrático y Social por 99 votos a favor y 125 en contra.
- Se rechaza el del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 103 votos a favor y 124 en contra.
- Se rechaza el del señor Pujana Arza, del Grupo Mixto, por 99 votos a favor y 123 en contra.
- El señor Presidente expone la forma en que se debatirán las enmiendas, según acuerdo de la Mesa y de conformidad con la Junta de Portavoces.
- Se inicia el debate del Título I, artículos uno a once, y de los anexos unos, dos y siete. Para la defensa de sus enmiendas interviene los siguientes señores: Fuentes Navarro, enmiendas números 812, 813 y 814; García Royo, todas las enmiendas del Grupo Popular y las dos suyas; Aguirre Barañano, enmiendas números 927, 928 y 929, de SNV; Cardona y Vila (las seis enmiendas de Convergència i Unió). Hace uso de la palabra, en turno en contra de las enmiendas defendidas por los anteriores intervinientes, el señor García Sánchez. En turno de portavoces interviene los señores Fuentes Navarro, Aguirre Barañano, Cardona i Vila, García Royo y García Sánchez.
- Se entra en el debate del Título II, artículos doce a dieciocho y anexos V y VI. Hacen uso de la palabra, para la defensa de las distintas enmiendas, los siguientes señores: Fuentes Navarro, números 815, 816, 817, 818 y 819; García Royo, número 1.177; Aguirre Barañano, 930 y 931, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Quetglas Rosanes, números 530 a 532, del Grupo del Centro Democrático y Social; Cardona i Vila, números 643 y 717, 718 y 719, del Grupo de Convergència i Unió, y Martínez Randulfe, números 32 a 45 y 156, del Grupo Popular. En turno en contra hace uso de la palabra el señor García Sánchez. En turno de portavoces interviene los señores Fuentes Navarro, Quetglas Rosanes, Martínez Randulfe y García Sánchez.
- En el debate del Título III, artículos 19 a 36, disposiciones transitorias primera a tercera y disposición final quinta, defienden sus enmiendas los siguientes señores: Fuentes Navarro, números 820 a 858; Aguirre Barañano, número 932; Quetglas Rosanes, números 533 a 550, del Grupo del CDS. Se suspende el debate.
- Se procede a la votación de las enmiendas y del articulado correspondientes al Título I.
- Se rechazan las enmiendas del señor Fuentes Navarro, por 98 votos a favor, 124 en contra y una abstención.
- Se rechazan las enmiendas del señor García Royo, números 1.174 y 1.175, por 98 votos a favor y 127 en contra.
- Se rechazan las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, números 927, 928 y 929, por 99 votos a favor y 129 en contra.
- Se rechazan las enmiendas 637 y 638 de Convergència i Unió, por 99 votos a favor y 126 en contra.
- Se rechazan las restantes enmiendas de Convergència i Unió, números 639, 640, 641, 642, 717, 718 y 719, por 92 votos a favor, 127 en contra y seis abstenciones.
- Se rechazan las enmiendas 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 153, 154, 155, 501 y la enmienda en la que se pretende la vuelta al texto del proyecto de ley (modificado por la enmienda socialista número 1.246), todas ellas del Grupo Popular, por 96 votos a favor, 126 en contra y una abstención.
- Se rechazan las enmiendas 27, 28 y 29, del Grupo Popular, por 91 votos a favor, 132 en contra y dos abstenciones.
- Se aprueba el texto del dictamen correspondiente al Título I, excepto los artículos uno, dos, tres, cuatro y once, que se votarán al final del proyecto de ley; y los Anexos I, II y VII, asimismo del texto del dictamen, por 132 votos a favor, 91 en contra y una abstención.
- Votaciones de las enmiendas y dictamen del Título II y Anexos V y VI.
- Se rechazan las enmiendas del señor Fuentes Navarro, números 815, 816, 817, 818 y 819, por 98 votos a favor y 127 en contra.
- Se rechaza la enmienda 1.177, del señor García Royo, por 99 votos a favor y 127 en contra.
- Se rechazan las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, números 930 y 931, por 91 votos a favor, 127 en contra y siete abstenciones.
- El señor García Sánchez propone en nombre del Grupo So-

cialista una enmienda transaccional a la enmienda 532 del CDS. El señor Dorrego González manifiesta en nombre del Grupo del CDS que acepta la enmienda transaccional. El señor Bris Gallego, del Grupo Popular, manifiesta su deseo de que la enmienda 532 se vote aparte. El señor Presidente manifiesta que la propuesta de enmienda transaccional se votará al final.

Se rechazan las enmiendas 530 y 531, del Grupo del CDS, por 92 votos a favor, 128 en contra y cuatro abstenciones.

Se rechaza la enmienda 643 de Convergència i Unió, por 96 votos a favor, 126 en contra y dos abstenciones.

Se rechazan las enmiendas del Grupo Popular números 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 156, por 91 votos a favor, 125 en contra y siete abstenciones.

Se rechazan las enmiendas 32, 33, 34 y 36, del Grupo Popular, por 96 votos a favor, 124 en contra y una abstención.

El señor García Sánchez hace uso de la palabra para exponer la enmienda transaccional propuesta anteriormente y que ha sido firmada por el Grupo Socialista, el Grupo Mixto y los de Convergència i Unió, PNV y Centro Democrático y Social. Sin turno en contra, intervienen en el de portavoces los señores Dorrego González y Bris Gallego. El señor Secretario (Oliveras i Terradas) procede a la lectura de la enmienda transaccional.

Se aprueba la enmienda transaccional a la enmienda 532, por 222 votos a favor, dos en contra y una abstención.

Se aprueba el texto del dictamen correspondiente al Título II y Anexos V y VI, por 126 votos a favor, 90 en contra y siete abstenciones.

Se suspende la sesión a las veintidós horas y diez minutos.

Se abre la sesión a las doce horas y doce minutos.

LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 1990

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

El punto primero del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 5 y 6 de junio de 1990.

¿Alguna observación al acta? (Pausa.)

Se aprueba por asentimiento.

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1990

El señor PRESIDENTE: El segundo punto orden del día es el relativo a los dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.

El primer dictamen corresponde al de la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie II, número 5, de fecha 15 de junio de 1990).

De acuerdo con los criterios establecidos por la Mesa, oída la Junta de Portavoces, y en tanto se han formulado diversos votos particulares a este proyecto de ley, corresponde, en primer lugar, la presentación del dictamen por parte de un representante designado por la Comisión, por tiempo no superior a diez minutos.

Ruego al señor Presidente de la Comisión que me manifieste el criterio de la misma.

Tiene la palabra el señor Fernández Fernández-Madrid.

El señor FERNANDEZ FERNANDEZ-MADRID: Gracias, señoría.

La Comisión ha designado para este trámite al Secretario de la misma, el excelentísimo señor don Ramón Jerez Herrera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor Jerez tiene la palabra.

El señor JEREZ HERRERA: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, vamos a dar cumplimiento al artículo 120 del Reglamento de la Cámara, dando cuenta de la tramitación que ha seguido el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 desde su entrada en esta Cámara.

Como es costumbre, esta presentación se limitará exclusivamente a enumerar el proceso seguido por el proyecto de ley hasta hoy.

Tuvo su entrada en la Cámara el 30 de mayo, procedente del Congreso, estimándose su tramitación por el procedimiento normal. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 5 de junio, habiéndose presentado cinco votos a la totalidad que, por orden de presentación, corresponden al Grupo parlamentario Popular, al senador Pujana Arza, al Grupo parlamentario del Centro Democrático y Social, al Grupo parlamentario de Convergència i Unió, y al Grupo parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se han formulado 1.288 enmiendas que corresponde 73 al Grupo parlamentario Socialista, 509 al Grupo parlamentario Popular, 173 a Convergència i Unió, 98 al Grupo parlamentario del Centro Democrático y Social, 32 al Grupo parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 8 al Grupo Mixto. Las restantes enmiendas presentadas

pertenecen a grupo de senadores de los distintos grupos de la Cámara.

La Ponencia se reunió el 8 de junio, habiéndose incorporado 73 enmiendas al informe que se publicó el 11 de junio. La Comisión se reunió el 11 de junio, habiéndose publicado el 15 de junio.

Después de toda esta tramitación, quedan pendientes para su discusión en Pleno 36 votos particulares presentados por los distintos grupos de la Cámara.

Esto es todo cuanto tenía que informar. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda para la presentación del proyecto.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solchaga Catalán): Señor Presidente, señoras y señores Senadores, como es bien conocido, la disolución de las Cámaras con ocasión de la convocatoria de las anteriores elecciones de 29 de octubre de 1989 impidió al Gobierno cumplir con las previsiones constitucionales y parlamentarias —como hubiera sido su deseo— y presentar en la fecha debida, es decir, el 30 de septiembre de 1989, los Presupuestos para este año de 1990. El Gobierno salvó la cuestión siguiendo también los trámites que la propia Constitución preveía mediante la prórroga de los Presupuestos y quiso, además, mandar un mensaje tranquilizador al contribuyente, previendo en dicha prórroga —Decreto-Ley, inicialmente, Ley que se está en estos momentos discutiendo en trámite posterior— el marco normativo para 1990 en todos los aspectos tributarios. En particular, el Gobierno deseaba que el contribuyente supiera, en aquellos impuestos que tienen devengo anual, que no se iban a producir modificaciones en la ulterior Ley de Presupuestos.

Ahora ya, transcurrido casi medio año, estamos entrando en la fase final de la aprobación de los Presupuestos de 1990. Han pasado estos por el Congreso de los Diputados, donde ha habido un interesante debate, un debate que no ha cubierto tan sólo —nunca es así, a decir verdad— las características o peculiaridades de la propia estructura de los Presupuestos o de la política presupuestaria, sino que ha ido más allá y ha hecho una consideración importante sobre la situación económica de nuestro país, sobre la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal y sobre las perspectivas de futuro de un país como España que, habiéndose integrado en una área más amplia de carácter económico, como es la Comunidad, está experimentando cambios fundamentales en los parámetros estructurales en los que se desenvuelve su economía, cambios que no habrán de detenerse en los próximos años sino que, al contrario, como consecuencia del proceso de integración económica, monetaria e imprevisiblemente política en el seno de la CEE, habrá de acelerarse en años sucesivos.

Vengo, pues, señor Presidente, al Senado perfectamente consciente de que sus señorías han estudiado con detalle aquel debate, en el que intervinieron todos los Grupos

Parlamentarios, y que, en particular, habrán anotado las cosas que quien les habla hoy tuvo que decir en aquel momento, y trato, por ello, señoras y señores Senadores, de evitar repeticiones innecesarias. En algunos puntos inevitablemente tendré que volver a reiterar la posición del Gobierno y la mía propia, en aquellos que, en mi opinión, merecen particular énfasis y atención por parte de las Cámaras. Pero, en todo caso, trataré de evitar a sus señorías una reiteración continuada, prolongada, de lo que fue la presentación de los Presupuestos en la Cámara de los Diputados hace ahora aproximadamente tres meses.

En aquella ocasión y al preguntarnos sobre las características que la política fiscal y presupuestaria debería tener para el año 1990 me hacía la reflexión sobre cuál había sido la evolución económica de los últimos años para dejar a un lado los aspectos positivos que puedan satisfacer al Gobierno y, sin duda, a todas sus señorías, y centrarme en aquellos que constituían la principal preocupación, creo que no tan sólo del Ministro de Economía y Hacienda o del Gobierno de la nación, sino también de todas las opiniones responsables de nuestro país, y decía con claridad que a lo largo del quinquenio transcurrido entre 1985 y 1990 nuestro país, al asistir a un importante auge de crecimiento económico, había puesto especial énfasis en el aumento de la inversión material y, en particular, en todo lo que se refería a la modernización de nuestro aparato productivo.

Nadie en esta Cámara ni fuera de ella puede tener reticencias de un proceso modernizador que significa una mejora clara en la productividad de nuestro sistema, en la eficiencia de nuestras empresas y en la competitividad de nuestros mercados.

Pero es verdad que si dicho proceso de modernización supone que en el transcurso de un quinquenio la inversión bruta aumente prácticamente al doble en términos reales, y supone que en ese período corto de tiempo la tasa que representa la inversión sobre el producto interior bruto pase desde el 18,5 por ciento hasta el 26,5 por ciento —que esperamos que sea en este año—, ello puede plantear problemas, porque es difícil prever que la tasa de ahorro de la economía, que constituye un parámetro estructural que sólo lentamente puede cambiar en lo que es su cuantía, pudiera adaptarse con la misma rapidez con la que las decisiones empresariales habían llevado a aumentar la inversión productiva para financiar niveles tan altos de gastos de capital. Y, en efecto, el ahorro no ha podido acompañar al aumento de la inversión, por más que hemos observado en España un comportamiento distinto de los tres grandes agentes que contribuyen a formar el ahorro nacional. Así, en los años 1985 y 1986 el ahorro de las empresas, como consecuencia de una reconstitución de beneficios, y como consecuencia también de una eliminación de las deudas y de los costes financieros que pesaban sobre su cuenta de pérdidas y ganancias, fue aumentando para consolidarse en los años sucesivos. Fuimos observando, sobre todo a partir de 1987, una caída muy significativa del ahorro de las familias y un aumento muy importante de la deuda de las mismas frente al resto del sistema, en la que habían incurrido con el fin

de materializar altos niveles de consumo como consecuencia del cambio de las expectativas y de las previsiones de crecimiento económico de nuestro país.

El ahorro de las familias ha venido cayendo en los últimos años en España. No se trata de un fenómeno aislado; es un fenómeno que, por desgracia, compartimos como experiencia con otros países de la Comunidad Económica Europea y de fuera de la Comunidad, de este lado del Atlántico y del otro; pero, desde luego, en un momento en el cual España estaba creciendo muy rápidamente en su inversión y requería, por tanto, importantes fondos financieros para hacer frente a la misma desde el ahorro, las unidades domésticas, las unidades familiares, no han podido contribuir a ello.

Muy importante, sin embargo, y positiva, ha sido, como consecuencia de la lucha contra el déficit público, la contribución del Estado a la financiación de la inversión.

Si en 1986 las administraciones públicas no solamente no ahorran, sino que detraían del ahorro nacional el equivalente al 2,4 por ciento del producto interior bruto, en 1990 esperamos que tenga un ahorro positivo equivalente aproximadamente a la misma cantidad, o a la misma «ratio»: el 2,4 por ciento del producto interior bruto.

Esta es la razón por la cual sigue siendo fundamental en nuestro país seguir luchando contra el déficit y es importante que colaboren en ello la Administración pública, o el conjunto de las administraciones públicas, tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales, que deben hacer un esfuerzo importante de ahorro público, un esfuerzo que permita financiar, sin necesidad de apelar al mercado, las crecientes necesidades de inversión pública en materia de infraestructuras que nuestro país todavía padece, y que tiene que llevar a efecto en los próximos años si no queremos que nuestras empresas en el mercado único, en la hora de la competitividad, dispongan de peores economías externas, servicios públicos, e infraestructuras de transportes que las condenen en última instancia a fracasar en dicha batalla.

Era evidente, pues, que si el ahorro familiar sólo se podía modificar lentamente, y en el empresarial, aunque estaba alto, no podían esperarse subidas ulteriores, teníamos que hacer lo posible por eliminar en cierta medida el bache existente entre el crecimiento de la inversión interna y el del ahorro conjunto de la economía nacional capaz de financiar. Era evidente que teníamos que reducir la demanda efectiva de nuestra economía, la demanda interna, y aunque cuando todos los que estamos en esta sala —y muchos de los que están fuera— hubiéramos deseado hacer esto afectando fundamentalmente al consumo y preservando totalmente la situación de la inversión, sabíamos —y sabemos—, cuando analizamos esto desprovistos de apasionamiento o de apriorismos, que no era posible.

Pero diré una cosa más: no solamente no era posible, sino que tampoco era conveniente. La tasa de inversión que hemos mantenido en España, señoras y señores Senadores, no podemos seguir manteniéndola tanto tiempo. Tenemos que seguir en el proceso modernizador, estoy de acuerdo con ustedes, pero el ritmo al cual tenemos que se-

guir es aquél que nuestra economía nos permite, no aquél que nuestra voluntad, nuestro deseo de modernización, nuestro deseo de mejora en la eficiencia nos dicta, sino aquél al que los límites de nuestra capacidad potencial de crecimiento nos pueden aconsejar o permitir.

España en 1992 ó 1993 tendrá una tasa de inversión sobre el Producto Interior Bruto no inferior al 28 por ciento, una tasa que es 6 ó 7 puntos por encima de la que se da como media en la Comunidad Económica Europea, mucho más alta que la que se da en los Estados Unidos de América y sólo comparable a la que se produce en Japón, Corea o algún otro país del este asiático. Por tanto, esa tasa es una demostración de que a lo largo de una década, la que se inicia en 1985, España ha hecho un esfuerzo inversor muy importante. Nadie debe temer por la falta de inversión: lo que sí debe ser objeto de preocupación es nuestra capacidad para financiarla.

Estas son las razones que movieron al Gobierno a lo largo de 1989, primero, y luego a la hora de elaborar este Presupuesto y la política monetaria que le acompaña, con las restricciones al crecimiento del crédito situadas en el 10 por ciento de los saldos de crédito existentes el año pasado, a disminuir la tasa de crecimiento del conjunto de la demanda, afectando a la tasa de crecimiento de la inversión.

Los resultados, señorías, como los de todas las políticas que no pretenden producir un cambio abrupto en la situación sino que tienen la pretensión, quizá infundada, de gradualmente llevar la economía a una situación de crecimiento consolidado, precisamente consolidado porque es compatible con el mantenimiento de los equilibrios, se producen suavemente. No se producen cambios en la situación de la inflación o de la balanza de pagos que sean dramáticos de un día para otro, porque precisamente se ha diseñado una política económica que lo que pretende es un cambio gradual.

Sin embargo, los datos que conocemos hasta ahora, aquellos datos de los que disponen el Gobierno y la opinión pública, son alentadores, en el sentido de que estamos consiguiendo nuestro propósito de enfriar suavemente la economía, sin producir, como atestiguan los datos de creación de empleo o de la marcha del paro registrado, una detención total de la actividad, de la inversión y de la creación de trabajo, que sería gravemente perjudicial para los intereses de los españoles.

Y digo que son positivos porque hoy sabemos que la inflación anual en el mes de mayo está situada en el 6,8 por ciento, dato que es, desde el punto de vista de los objetivos que el propio Gobierno se plantea, insuficiente, pero que demuestra que, a lo largo de los últimos doce meses —después de haber asistido año y medio antes de los mismos a un crecimiento continuo de la tasa de inflación, que pasó desde el 4 por ciento aproximadamente en la primavera de 1988 hasta el 7,5 por ciento casi en el verano de 1989— hemos conseguido detener la tendencia hacia la inflación y estamos ya sentando las bases para producir una desaceleración de la misma. A lo largo de este tiempo también hemos podido comprobar que a pesar de que los resultados, yo soy el primero en decir que no son plena-

mente satisfactorios la inflación diferencial no se ha perjudicado o no se ha deteriorado y la situación económica de competitividad, aunque difícil, no es peor que hace algunos meses.

Otro tanto puede decirse de los datos de que con carácter fragmentario disponemos hoy, tanto sobre la evolución de exportaciones e importaciones de mercancías como en lo que se refiere a la marcha de la balanza de pagos por cuenta corriente. En exportaciones e importaciones de mercancías por primera vez y consideradas en volumen, es decir, en términos reales, no en valor, las exportaciones muestran a lo largo de los cuatro primeros meses de 1990 una tasa de crecimiento ligeramente mayor que la de las importaciones. Ciertamente que esto no basta, dado que la diferencia que existe en volumen entre el total de importaciones y exportaciones requiere un diferencial de crecimiento a favor de las últimas muy considerable si queremos reducir el déficit comercial. Pero es verdad que esto ya está empezando a representar una detención del proceso de deterioro de dicho déficit que habíamos vivido en los últimos años. Los datos —todavía provisionales— de la balanza de caja presentados por el Banco de España, también hasta el mismo mes, muestran una repetición, en líneas generales, con un ligero deterioro —muy por debajo del que algunos habrán especulado cuando comenzó 1990— de nuestro saldo, también por cuenta corriente. La fortaleza de la peseta, la estabilidad de los cambios, el flujo, todavía extraordinariamente importante de entradas de capital de largo plazo, de corto plazo, de cartera, en inmuebles, o las inversiones directas, siguen asegurando a nuestro país la posibilidad de seguir manteniendo un déficit, siempre que éste no se deteriore y produzca sospechas sobre la perspectiva de mantenerlo en el futuro con una financiación adecuada y sin peligro para la economía española. Estamos, pues, señorías —déjenme que lo diga—, atendiendo más a los aspectos diferenciales que al fondo del asunto, en una situación ligeramente mejor que la que estábamos hace algunos meses y, ciertamente, con las perspectivas abiertas a corregir los principales problemas de nuestra economía que, como ya he dicho, nacen, fundamentalmente, de un crecimiento excesivo de la demanda interna, tanto de consumo como de inversión, y se manifiestan a través de una tasa de crecimiento de los precios muy superior a la que se registra en los países más competitivos de la Comunidad Económica Europea, aquéllos, precisamente, que deberíamos tener como referencia obligada para tener éxito en el desafío que representa 1993 y la implantación del mercado único y, también, en un déficit comercial y de balanza de pagos que, por fortuna, va poco a poco corrigiendo el signo de deterioro que había sido la clave de su interpretación en los últimos meses de 1988 y 1989.

Como ya he mencionado, el Gobierno ha considerado dos instrumentos, aquellos que están fundamentalmente a su disposición, para ir obteniendo estos resultados. El primero —ya lo he dicho— es la política monetaria, que continúa siendo restrictiva. Pero debemos decirlo con honestidad: sólo moderadamente restrictiva. El crecimiento del crédito en torno al 10 por ciento, que es una tasa

quizá un punto menor de lo que vaya a crecer el producto interior bruto en términos monetarios, no significa la ausencia de financiación para el crecimiento económico. Significa, sencillamente, que no va a haber márgenes de holgura, pero que lo que sea un crecimiento económico razonable, como el que prevé el Gobierno para este año con una tasa real en torno al 4 por ciento y un deflactor en torno al 6 ó 6 y medio por ciento, puede, perfectamente, hacerse con el crédito que hemos dispuesto, en la política monetaria, que tenga la economía para 1990. Lo que no queremos es incurrir en los errores de otras épocas. No deseamos que las posibilidades de expandir el crédito, en un momento en que las economías domésticas tienen una tendencia importante al consumo y al endeudamiento, o en un momento en el cual las tasas de rendimiento de nuestras inversiones —de las que se hacen en el país— son muy elevadas, nos lleve a mantener, como en los últimos tres años, un crecimiento de la demanda interna dos o tres puntos por encima del crecimiento de nuestra producción. Y coordinada con esta política monetaria, está la política fiscal y presupuestaria que se refleja en el documento que sus señorías han estado estudiando en los últimos tiempos, cuyo debate de totalidad o de vetos al mismo hoy estamos iniciando, y aquel que, en los próximos días, a través de la aprobación de las posibles enmiendas que se hagan, podrá ser perfeccionado y mejorado antes de que entre en vigor.

Estos Presupuestos, señorías, coordinados con la política monetaria, tienen algunos aspectos clave. Primero, desde el punto de vista de los ingresos, son unos Presupuestos caracterizados por la estabilidad. Estabilidad normativa porque, como ya dije antes, no se contemplan en la Ley de Presupuestos modificaciones significativas de la normativa tributaria, sino que las que hubo que hacer —y fueron bien pocas— se introdujeron en la Ley de Prórroga de los Presupuestos para que, ya el primero de enero de 1990, pudieran los contribuyentes, defendiendo su seguridad, saber a qué atenerse en esta materia. Y estabilidad también en términos del impacto de la recaudación sobre el producto interior bruto. De hecho, si se cumplen las previsiones presupuestarias en materia de ingresos, observarán sus señorías que la prestación fiscal total, medida ésta como el conjunto de la recaudación del Estado sobre el Producto Interior Bruto, permanecerá constante al nivel del 23,75 por ciento del PIB que alcanzó el año pasado; y que la presión tributaria, medida ésta no como el conjunto de los ingresos fiscales del Estado, sino de aquellos que teniendo carácter coactivo tienen naturaleza tributaria, incluso baja una décima.

Dentro de esta estabilidad en los ingresos, y ya no haré más referencias a ellos, observarán sus señorías este año un comportamiento bien distinto entre los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos van a tener un aumento que no llega al 5 por ciento en su recaudación, en tanto que los impuestos indirectos tendrán un crecimiento en torno al 16 por ciento. La razón es sencilla: no esperamos que haya un aumento, sino que, incluso, pudiera haber una ligera reducción en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las personas Físi-

cas; no como consecuencia de una reducción en la tarifa, que no se ha producido, ni como consecuencia de modificación en normativas importantes producidas en este año, sino como consecuencia del hecho de que la adaptación del impuesto a la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 1989, obligó a la Administración tributaria a retrasar el pago de la cuota diferencial hasta noviembre; y solamente en este año de 1990 se están produciendo las devoluciones de las declaraciones negativas que en el penúltimo mes del año anterior fueron a Hacienda. Hoy están concluidas, pero ciertamente, si el año pasado esto tendió a exagerar el aumento de los ingresos de manera artificial, porque no se descontaron las devoluciones que eran debidas al propio ejercicio, este año estas devoluciones, que se añaden a las que habrán de producirse una vez que se acabe el plazo de presentación de 1989 el próximo día 20 de junio, supondrán una reducción significativa de la recaudación por este impuesto.

En lo que se refiere a los gastos, la coordinación con la política monetaria era también importante. Por eso, el Gobierno se propuso desde el primer momento, que el crecimiento del gasto público, no el del Estado, sino el del conjunto de las administraciones centrales consolidadas, es decir, el Estado más la Seguridad Social, cuyo presupuesto cobra cada día mayor importancia en el conjunto de las administraciones públicas, más los organismos autónomos de carácter comercial y financiero, más los organismos autónomos de carácter administrativo; todos en su conjunto que representa la suma de 17 billones de pesetas largos, en términos reales, pudiera crecer a un ritmo ligeramente inferior al que crecía la economía.

El Gobierno ha cumplido este propósito, mostrando una tasa de crecimiento del 10,3 por ciento, pero dentro de este compromiso y como interés secundario, pero también importante, preveía y deseaba el Gobierno establecer un trato discrecional y diferenciado entre la evolución por un lado, del gasto público corriente y, por otro lado, del gasto público de capital. Consciente como era el Gobierno de la doble necesidad, por un lado del comprimiendo en la medida de lo posible el gasto corriente, aumentar el ahorro del sector público y, de otro lado, conceder de la necesaria complementariedad entre las inversiones públicas y las inversiones privadas, preservar tanto como fuera posible, el incremento de las primeras dentro de ese contexto de moderado crecimiento del gasto público en los Presupuestos del Estado.

Observarán sus señorías que los resultados son significativos e importantes porque hay que destacar que en el subsector Estado, frente a un crecimiento general del 8 por ciento, los gastos corrientes crecen tan sólo un 7,9; los del capital, es decir, capítulo sexto y séptimo crecen el 13,6; y dentro de ellos, los que son gastos de inversión real inmediatamente en infraestructuras, ya sean carreteras, ya sean obras hidráulicas, ya sea infraestructura ferroviaria, ya sea infraestructura de comunicaciones aéreas, ya sean puertos, ya sean obras de reforma en la agricultura, todos crecen nada menos que a un ritmo del 29,8 por ciento en 1990.

Lo que digo del subsector Estado se aplica «mutatis

mutandis» al conjunto de la administración pública donde, frente al crecimiento del 10,3 por ciento del total del gasto, el gasto corriente crece al 9,5 y la inversión consolidada del capítulo sexto crece al 29,4 por ciento.

Dos cosas me gustaría destacar sobre el gasto público particularmente en esta Cámara. Haré, por tanto, gracia a ustedes de todas las consideraciones de los diversos programas que constituyen el gasto público y que de alguna manera, muestran la prioridad que el Gobierno, al reflejar los Presupuestos, da a cada uno de los objetivos de política económica y social. Del mismo modo haré gracia a ustedes de una descripción detallada por capítulos, de todos y cada uno de ellos, de los diferentes gastos, ya sean del Estado, ya sean de los organismos autónomos, de la Seguridad Social o del conjunto de las administraciones públicas centrales. Me centraré en tres aspectos importantes. El primero, la aportación del Estado, a través de los esquemas, hoy por hoy, pactados con las comunidades autónomas sobre financiación de las mismas y vigentes hasta el ejercicio de 1991 incluido, a los presupuestos de las comunidades autónomas.

Esta aportación es de 966.000 millones de pesetas en el presupuesto de 1990, si bien es verdad que lo que figura en el mismo es tan sólo un 95 por ciento de esta cantidad, que es la que se paga cada uno de los años de acuerdo con las previsiones presupuestarias, por valor de 918.400 millones.

En segundo lugar, quiero señalar a sus señorías que, por primera vez y después del acuerdo alcanzado de manera prácticamente unánime —debo decir que hubo una excepción— en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera figura tanto en las partidas que contempla el presupuesto del Estado como en la letra concreta del articulado, el nuevo esquema de funcionamiento de dicho Fondo de Compensación Interterritorial, distinguiendo ya lo que son las aportaciones del propio Fondo, con vocación de mantenerse una vez que éste se reduzca a aquellas regiones y nacionalidades españolas cuya «renta per cápita» sea inferior a la renta nacional y figura también, como compensación transitoria, aquélla que se contempla hasta el momento en el que se reconduzca el sistema conjunto de financiación de las comunidades autónomas como derechos reconocidos por parte de aquellas comunidades en materia de financiación de inversiones, pero que ya no van a formar parte en el futuro del Fondo de Compensación Interterritorial.

Las cantidades correspondientes —prácticamente iguales, por cierto— son de 120.000 millones de pesetas en lo que se refiere al Fondo estricto de Compensación Interterritorial y de 119.800 en lo que se refiere a la suma de las aportaciones transitorias a las diversas comunidades.

Finalmente, los ayuntamientos —tema también de gran interés para esta Cámara territorial— perciben, por las disposiciones de este Presupuesto, 480.000 millones de pesetas y las diputaciones, 310.000 millones.

Observarán sus señorías que estamos hablando ya de cifras que, acercándose a los dos billones de pesetas, representan una importante cantidad en conjunto de los programas del Estado y en lo que se refiere a las transferen-

cias a administraciones territoriales, sean éstas comunidades autónomas o se trate de corporaciones locales, diputaciones o ayuntamientos.

De hecho, en 1988 podemos decir que, descontando las pensiones y algunos otros gastos que, sencillamente por su naturaleza, no son localizables a nivel regional, el riesgo del gasto público está hoy descentralizado hasta el punto en el cual tan sólo el 65 por ciento de las partidas correspondientes de los programas que estoy considerando se gastan desde el sector público y el 35 por ciento restante ya está siendo objeto de la competencia y el gasto de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.

Cuando el Gobierno socialista se hizo cargo de esta situación en 1982, las proporciones eran entre 80 y 85 por ciento Gobierno central y entre el 15 y el 20 por ciento las comunidades autónomas. El desarrollo de los estatutos de autonomía, la transferencia de competencias, pero al mismo tiempo un sentido generoso de cómo se pueden distribuir las responsabilidades políticas en materia de elaboración de gasto público, así como una buena experiencia, en general, de coordinación de las Haciendas autonómicas y de las Haciendas locales con el Gobierno y los pactos normativos de gran importancia, porque también han tenido su traducción presupuestaria, con las comunidades autónomas en materia de sistema de financiación vigente hasta 1991, o ahora en materia de Fondo de Compensación Interterritorial, y con las corporaciones locales al hilo de la implantación de la nueva Ley de Haciendas Locales, han permitido un desarrollo del que el Gobierno se felicita; desarrollo que no deja de tener un punto oscuro en los últimos meses y al cual no puedo dejar de referirme en esta Cámara, señor Presidente, como son los primeros síntomas de falta de coordinación en lo que se refiere a la cooperación entre el Gobierno y estas entidades territoriales, entidades políticas y administrativas de carácter territorial, en la reconducción de la disciplina del gasto público y en el déficit fiscal.

Porque si el año pasado, 1989, hubo una reducción importante del déficit de Caja, que pasó desde el 3 por ciento hasta el 1,7 por ciento en producto interior bruto en lo que se refiere al conjunto de las administraciones públicas centrales, hemos sabido, cuando ya hemos podido disponer de las primeras estimaciones en las liquidaciones presupuestarias de corporaciones locales y de comunidades autónomas, que éstas han pasado desde una situación de 0,1 ó 0,2 de déficit público sobre el PIB a una situación próxima al 0,7 ó 0,8. Y estamos constatando a lo largo de este año que una gran parte de los Gobiernos de las comunidades autónomas —y debo decir que cualquiera que sea su ideología— están enviando a las asambleas regionales y a los Parlamentos regionales correspondientes presupuestos con tasas de crecimiento del gasto público muy por encima del 10,3 que contempla el Estado, y con frecuencia bastante por encima del 20 por ciento, que ya parecería una cifra inalcanzable.

Es verdad que el Estado puede, en cierta medida, de acuerdo con la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y atendiendo a la necesidad de or-

denar a la apelación de los mercados interiores por parte de los organismos financieros de las administraciones públicas, el Tesoro y los organismos correspondientes de comunidades y corporaciones locales, limitar y encauzar la capacidad de endeudamiento de éstas, pero es verdad que esto no podremos hacerlo si no tenemos un acuerdo en el cual prevalezca el buen sentido. Y sepan todos que ninguna comunidad autónoma es pequeña a efectos de mantener disciplina del gasto y a efectos de lucha contra el déficit fiscal y que todas juntas no solamente no son pequeñas, sino que puedan llegar a tener un déficit fiscal superior al del Estado central. Por tanto, no cabe caer en la falacia de composición según la cual se puede pedir al Gobierno de Madrid, y se debe pedir, que sea riguroso en materia de gasto público y que no sea generoso en lo que se refiere al déficit fiscal, pero el Gobierno de tal o cual región o nacionalidad, como tiene que modernizar muy rápidamente sus infraestructuras, puede incurrir en déficit fiscal importante.

Esto no es posible, señorías. El Gobierno está reflexionando seriamente sobre este tema; en el día de hoy existe una reunión con las comunidades autónomas en la que se planteará esta cuestión, y, desde luego, desearíamos reconducir esta situación en los próximos meses para que por una vez no siguiéramos en este país el precepto bíblico según el cual lo que hiciéramos con la mano derecha de las administraciones centrales, en materia de gasto público y lucha contra el déficit fiscal, lo desconociera la izquierda y lo deshiciera a través del gasto público y el déficit de las comunidades autónomas o las corporaciones locales.

Señor Presidente, concluyo ya esta presentación de los presupuestos de 1990. Y concluyo haciendo referencia a un tema que, sin duda, está en la mente de todos y que ya fue objeto de debate y discusión en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. Si hemos de constatar que tanto el déficit de balanza de pagos por cuenta corriente como la tasa de inflación no están deteriorándose al ritmo que experimentaron estos dos indicadores de nuestra economía a lo largo de 1988 y de una gran parte de 1989, hemos también de añadir a esta reflexión la de la insatisfacción que el Gobierno le produce, y que sin duda le debería producir a esta Cámara y a la opinión pública, el hecho de que en ambas materias estamos lejos de alcanzar las posición que deberíamos alcanzar si queremos hacer frente con ciertas posibilidades a los retos que se derivan de la implantación del Mercado Único en Europa, del levantamiento de las barreras técnica al comercio entre las naciones que componen la Comunidad, de las barreras fiscales y, ciertamente, los procesos ulteriores de unificación económica y monetaria a cuyos primeros pasos estamos ya asistiendo prácticamente desde que en la cumbre de Madrid de la Comunidad Económica Europea se dio luz verde como documento de trabajo al informe de Jacques Delors, y se puso en marcha la idea de convocar una conferencia intergubernamental que tendrá en esta materia de la unión económica y monetaria su primera o su convocatoria exacta a finales del año actual.

El tiempo, señoras y señores Senadores, juega en con-

tra de los perezosos, juega en contra de todos aquellos que desearían que los problemas de este país se fueran resolviendo simplemente por su transcurso. El tiempo nos obliga a todos, al Gobierno al que más, al Gobierno el primero, no les quepa a ustedes la menor duda, pero a todos desde nuestra responsabilidad política nos obliga a hacer una seria reflexión sobre lo que podemos y debemos hacer con nuestro país en un marco de mayor competencia y en un marco donde la competitividad es absolutamente indispensable para sobrevivir. No podemos dejar que el tiempo transcurra y ver cuáles son sus resultados. En otros países hay muchas cosas que se están poniendo en marcha, pero en otros países, además, tienen ya ventajas adquiridas, o tienen un sistema de infraestructura mejor que el nuestro, o no tienen la presión que los gastos sociales de este país —retrasado y muchos años gobernado con falta de sensibilidad social antes de la llegada de la democracia— nos imponen ahora a nosotros con un aumento mayor en el gasto público dedicado a todas estas cosas, o tienen sin duda un sistema productivo más eficiente, o ante los desafíos de un mercado más amplio tienen con frecuencia en todos y cada uno de los sectores de actividad unidades productivas, empresas que han alcanzado el tamaño mínimo como para asegurarse ciertas ventajas en lo que va a ser un mundo caracterizado por el aumento de la competencia. Por tanto, nosotros no podemos sino reaccionar positivamente; no es cuestión de tener miedo a los desafíos —los países crecen en la medida en que son capaces de implantarse objetivos importantes y exigentes y resolverlos—: es cuestión de hacerlos frente cuanto antes.

Nada hay en la historia de España, nada hay en la idiosincrasia de nuestro pueblo, nada en las estructuras existentes en nuestro país, que nos obligue a ser históricamente un país inflacionista, un país competitivo, un país ineficiente. Habrá quienes mantengan esa especie de escepticismo histórico sobre las posibilidades de España, pero los resultados de nuestro país en materia de evolución política y económica en los últimos tres quinquenios y también en otros períodos de la historia acreditan, por el contrario, que no existe un destino histórico negativo para nuestro país del cual no podemos escapar. Podemos y debemos hacer esfuerzos en esta materia y el Gobierno ha querido hacerlos proponiendo un doble debate, o si quieren ustedes, proponiendo la constitución de un doble foro en el que puedan venir a convergir las ideas que todas las fuerzas políticas, pero también la propia sociedad civil vertebrada a través de sus órganos de vertebración, ya sean patronales, ya sean sindicales, ya sean grupos profesionales, puedan darnos sobre este tema. Por un lado, y sus señorías lo conocen, puesto que están presentes en sus trabajos, el Gobierno ha querido constituir la Comisión Mixta Congreso-Senado. Dicha Comisión debe ser el foro de debate de todas las implicaciones que para nuestra economía tiene la implantación del Mercado Único, o todo lo que nos puede deparar —aunque no habremos de adivinar totalmente el futuro— el proceso de integración económica y monetaria hoy en marcha.

De dicho foro de debate debe salir también un consen-

so mínimo sobre cuáles son los problemas que debemos afrontar y cuáles son las soluciones. No es que el Gobierno piense que si no hubiera este debate o no se alcanzara ese consenso pudiera dimitir de sus responsabilidades y no hacer frente a los desafíos que tiene. El Gobierno está convencido de que estamos hablando de una enorme tarea histórica, aunque quizá esos aspectos más prosaicos de la economía no son los que atraen con más frecuencia la atención de los historiadores o a veces de la opinión pública, pero es una gran tarea de Estado y en esa gran tarea de Estado en principio nadie puede quedar excluido. La búsqueda del consenso, de las posiciones comunes, la eliminación de la discrepancia política allí donde no sea necesaria y pueda redundar su inexistencia en favor de los beneficios de España, es una tarea que al Gobierno le merece la pena, y que hoy por hoy ha encontrado también una respuesta positiva por parte de sus señorías, de los grupos parlamentarios y las fuerzas políticas que sus señorías representan.

Queremos seguir trabajando seriamente en esa Comisión Mixta Congreso-Senado. Si me preguntan a mí, yo les diría que el fruto de los debates de esa Comisión Mixta en este momento es uno de los aspectos más importantes de toda la tarea parlamentaria y de Gobierno a la que haremos frente a lo largo de 1990 y quizá en años sucesivos. Junto a esto, el Gobierno ha creído que es conveniente iniciar una profundización de la concertación social. Es público y notorio que los años 1987, 1988 y una gran parte de 1989, fueron testigos de una situación de enorme dificultad para poner en marcha o continuar los procesos de concertación social que, con mayor o menor asiduidad, habían venido caracterizando el desarrollo de nuestra política económica desde los Pactos de la Moncloa en 1977 hasta aproximadamente 1986-1987 cuando concluyó el último pacto o Acuerdo Económico y Social.

El Gobierno cree que merece la pena hacer ese esfuerzo de concertación, por un lado con las centrales sindicales y por otro lado con la patronal. Fruto de ese esfuerzo de concertación debería ser la corresponsabilización por parte de todos —en la que les corresponde exclusivamente— para hacer frente a este reto de la competencia del año 1993.

El Gobierno es consciente de que obtener los mejores resultados, en materia de competitividad, y por tanto de inflación y la balanza de pagos, que sean compatibles con el mantenimiento del crecimiento con una creación de empleo suficiente en un país que todavía tiene tasas de desempleo demasiado elevadas, sólo es posible si, además de una política monetaria rigurosa, si además de una política fiscal que, como la que presentan los presupuestos de este año, también es exigente, se puede alcanzar algún acuerdo en materia de política de rentas con patronal y sindicatos.

No entiendan mal la posición del Gobierno sus señorías y no la entienda mal tampoco la opinión pública, porque si, como el Gobierno intuye —creo que con buen fundamento—, la competitividad es una cuestión de supervivencia, no les quepa duda a ninguna de sus señorías de que, en ausencia de acuerdos, también el Gobierno habría

de tomar las medidas necesarias para luchar contra la inflación. Pero el Gobierno es consciente de que hacer esto así podría tener un efecto sobre el crecimiento y el empleo mucho peor que el que podríamos obtener de una mezcla razonable de las tres políticas económicas, las dos que están en gran medida en manos de estas Cámaras —la política monetaria y la política fiscal—, pero, al mismo tiempo, aquélla en la cual en una democracia industrial libre, el Gobierno no puede seriamente interferir, que es la que depende de la distribución de salarios y beneficios en las empresas.

El Gobierno puede guiar esto, aconsejar, persuadir, incluso puede crear, a través de la atmósfera política y de una serie de disposiciones monetarias y fiscales, el marco adecuado para que puedan convenir en la necesidad del acuerdo y en la ventaja del mismo los agentes económicos y sociales. No puede, de ninguna de las maneras, excepto saliéndose de su papel, en una economía de mercado y en una democracia industrial, sustituir a una u otra de las partes en la responsabilidad que a las mismas les compete. Y ésta es la razón por la cual el Gobierno viene asistiendo, a través del proceso de concertación, primero en la constitución, tan rápido como sea posible, del Consejo Económico y Social, no aquel que a algunos les gustaría pero que no es el proyecto del Gobierno que se previene en el artículo 131.2 de la Constitución, sino el que, acogido al sistema de participación previsto en el artículo 105, puede dar frutos y ser útil en la actual coyuntura y puede también formar parte de la trama institucional de un país como el nuestro, donde, junto a los intereses de los ciudadanos representados por la soberanía de las Cámaras, podría también considerarse los intereses vertebrados por agrupaciones representadas en el Consejo Económico y Social.

Dicho Consejo, señoras y señores Senadores, debe servir de foro de debate para hablar de los intereses de unas y otras partes y de los intereses conjuntos de España. El Consejo no es un lugar de negociación, pero sí el foro del debate, el lugar donde cada cual puede exponer sus puntos de vista y puede, tanto la Comisión Mixta Congreso-Senado, que tratará también de estos temas en su día, como el Gobierno y la opinión pública exponer cuáles son las conclusiones que, por consenso, allí se alcancen o cuáles son los puntos de vista particulares que cada uno de los componentes de dicho Consejo sigue manteniendo.

España, señoras y señores senadores, está viviendo un período de su historia importante. Todos lo son, sin duda, pero quizá éste es más importante que otros porque cuando ya parecía que podía haberse terminado la dinámica que nació de la preparación para la consolidación de la democracia de unas estructuras que eran políticamente arcaicas y anacrónicas, cuando parecía que a mediados de 1985 la mayor parte del trabajo de institucionalización del país en materia de creación y desarrollo de las comunidades autónomas —descentralización política, descentralización administrativa y descentralización fiscal— se había concluido, España ha podido entrar en la Comunidad Económica Europea, y esto nos está obligando a revisar muchos, como decía antes, de nuestros parámetros

institucionales, normativos y de otra naturaleza, pero también a revisar nuestras actitudes mentales y nuestra visión del mundo o nuestra disposición hacia los problemas que hoy existen.

En este nuevo contexto, España está teniendo una importancia mayor que la que, a lo largo, seguramente, de la historia del siglo XX, ha podido tener en la configuración del destino colectivo de Europa; no mayor que la que tenemos somos lo que somos en la Comunidad Económica Europea, uno más de los doce países pero ciertamente mayor de la que en otros tiempos en que estábamos excluidos de los foros donde se decidía la configuración política tuvimos.

Yo creo que los españoles son perfectamente conscientes de estas nuevas oportunidades que se abren en nuestro país, están convencidos de que es el deber de los políticos, el deber de los partidos que constituyen el arco parlamentario, y presentan alternativas diversas a la opinión pública española sobre cómo resolver los problemas de nuestro país, buscar y garantizar un consenso que nos ayude a salir adelante dignamente, mejorando la situación política, económica y social de España.

Creo que en esa línea, estos presupuestos que van a discutir ustedes son un modesto eslabón, pero un eslabón significativo. No constituyen un paso atrás, sino un paso adelante en la configuración gradual, pero cada vez más segura, más consolidada y con mayor respaldo del conjunto de la opinión pública, de una política monetaria y fiscal, de una política macroeconómica y de un esquema de distribución de prioridades en los gastos, que nos permitan aumentar las infraestructuras y avanzar en los programas sociales que nos proponemos, que puedan hacer de este país en el contexto en el que vive no solo un país más eficiente sino, sobre todo, un país más humano, más solidario y más justo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Están formuladas cinco propuestas de veto, que se van a debatir a continuación.

De conformidad con lo establecido por la Mesa, oída la Junta de Portavoces, el orden de la defensa iría en esta ocasión de Grupo Parlamentario mayor a menor, comenzando por la propuesta de veto formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Saben sus señorías los tiempos, tanto si se utilizan los turnos en contra de cada uno de los vetos como si se va a la fórmula de respuesta agrupada a los mismos.

Vamos a comenzar por el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa del veto tiene la palabra su portavoz, Senador Ortí Bordás.

El señor ORTI BORDAS: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, el Grupo Popular, al que me honro en representar aquí hoy en esta tribuna, entiende que los Presupuestos generales del Estado para 1990, que ahora se presentan a discusión de la Cámara, no son adecuados ni para la sociedad española ni para la economía de nuestro país. Y no son adecuados, a nuestro entender, para la so-

ciudad española ni para la economía de nuestro país porque se inscriben en una estrategia a medio plazo que compatibilice los instrumentos monetarios y fiscales de nuestra política económica, porque no garantizan la corrección de los desequilibrios básicos de nuestra economía y, por tanto, la incorporación sin traumas y ni siquiera sobresaltos en el gran mercado europeo de 1993, que tan legítimamente preocupa al señor Ministro y a todos los Senadores aquí presentes. Y no lo son porque estimamos que no se cumplirán o, al menos, no se cumplirán en los mismos términos en que van a ser aprobados por el Parlamento nacional.

La experiencia de los años precedentes y, sobre todo, la excesiva flexibilidad en materia de transferencias y ampliaciones de crédito que se han ido incorporando en nuestro ordenamiento nos hacen pensar —y fundamentalmente— que la ejecución de estos Presupuestos seguramente no respetará ni la forma ni, a lo mejor, el fondo de la ley que aquí se aprueba. No avanzan, además, un ápice en materia tributaria, consagrando el desorden y el desconcierto fiscal en que el Gobierno no nos ha sumido, un Gobierno que ha instalado la inseguridad jurídica en el centro mismo del sistema fiscal, del sistema impositivo español.

Se ha calificado acertadamente a 1989 como un año perdido en la adecuación de nuestro sistema fiscal a las normas y prácticas que imperan en los países occidentales. En realidad, no avanzar, dada la celeridad con que se están produciendo los acontecimientos, significa ya retroceder. Y 1990, al igual que 1989, es ya un año de envilecimiento y de retroceso en nuestra tributación.

Por último, somos de la opinión de que el Presupuesto que se nos presenta llega tarde, pasado el ecuador del mes de junio, agravando con ello sus insuficiencias.

Por las razones apuntadas: la falta de coordinación de la política económica en la que se inscriben estos presupuestos, su falta de adecuación a las necesidades inmediatas y a medio plazo de nuestra economía, la ausencia de mecanismos que garanticen su cumplimiento y que controlen el uso correcto y eficiente de los fondos públicos y, por último —pero no por ello menos importante—, por la situación de desconcierto fiscal en que nos mantienen estos presupuestos, el Grupo Parlamentario Popular solicita la devolución del proyecto.

Estos Presupuestos son un ejemplo más de la improvisación con que se comporta el Ejecutivo en materia económica. La falta de moderación de la política presupuestaria ha sido —y así se me tendrá que reconocer— una constante durante estos últimos ejercicios económicos. En los informes del Banco de España se han hecho continuas alusiones a este hecho, que complica enormemente el diseño de una política económica coherente y eficaz frente a los problemas que de verdad aquejan a la economía española. Baste citar, por ejemplo, que en la presentación del último informe del Banco de España su Gobernador enfatizó la insuficiencia de la respuesta procedente del ámbito presupuestario. La descoordinación, pues, entre los instrumentos monetarios y presupuestarios ha sido excesiva, con lo que cuestiona la propia validez de los citados instrumentos.

Hasta el presente, esta descoordinación ha obligado a los responsables de la política económica a introducir medidas inesperadas como, por ejemplo, todas las de carácter monetario que desde principios de 1989 han sumido a la situación económica de nuestro país en la incertidumbre. Es decir, la inexistencia de un esquema realista de la política presupuestaria ha colocado a la política monetaria en una situación auténticamente extrema, cargándola con toda la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos marcados por el Gobierno. La entrada de la peseta en el sistema monetario europeo tuvo como principal objetivo estabilizar el tipo de cambio y acercar la tasa de inflación española a la media de los países comunitarios. Sin embargo, después de transcurrido más de un año, este objetivo no se ha cumplido, y el problema que se plantea es importante, pues, como bien ha visto el propio informe del Banco emisor, en este sistema de estabilidad cambiaria el hecho de que nuestros precios vayan muy por delante de los de la mayoría de los países de la Comunidad puede llegar a significar un empeoramiento de nuestra competitividad por la vía de una apreciación de nuestro tipo de cambio real y una pronta disminución del nivel de actividad y del empleo.

La realidad refleja que en los últimos ejercicios económicos del diferencial de inflación en promedio de España con la Comunidad se ha situado en torno al punto y medio y muestra una gran resistencia a la baja, lo que cuestiona, desde luego, el papel estabilizador que se puede legítimamente esperar de una política presupuestaria correctamente concebida.

Los responsables del Banco emisor reconocen un agotamiento de los instrumentos monetarios y coinciden en sus opiniones con las de organismos internacionales —como el Fondo Monetario— en reclamar una mayor colaboración de la política fiscal y presupuestaria que hasta ahora no ha existido, o se ha dado en grado muy insuficiente.

En el proyecto de presupuestos que el Gobierno nos envía observamos, por otra parte, que el recurso al Banco de España será cero, lo que sin duda es —y me complace poder manifestarlo— algo verdaderamente positivo, pero hemos de objetar que la financiación mediante Deuda tampoco soluciona todos los problemas, ya que el déficit español es de carácter estructural y del mismo tan sólo ha podido ser disminuido el componente cíclico, por lo que tan pronto como el nivel de actividad se vea reducido, bien por una coyuntura económica no tan favorable, o como consecuencia del anunciado aterrizaje suave, nuevamente asistiremos a un repunte del volumen del déficit público. No ha habido verdadero esfuerzo en la reducción del déficit y los resultados alcanzados por la actividad económica en estos últimos cuatro años bien pudieran haber permitido hacerlo desaparecer si el Gobierno hubiera respetado, por ejemplo, los límites presupuestarios del gasto. En todo caso, su disminución en el porcentaje en el que ha existido se ha debido fundamentalmente a aumentos de la presión fiscal.

A falta, pues, de 30 meses para el gran mercado de 1993, la economía soporta importantes desequilibrios que ame-

nazan el futuro bienestar de los españoles. No es suficiente la disminución de la tasa de paro desde el 21,5 por ciento de la población activa, en 1985, al 17,2, de 1989. Todavía destaca España, por desgracia, por tener que soportar una tasa de paro equivalente al doble de la tasa comunitaria. Para poder rebajar esta diferencia, que todos lamentamos, la economía tiene que crecer a tasas reales de entre el 4 y el 4,5 por ciento y si esto no es posible, habremos fracasado en el objetivo de solucionar el primer problema que tiene planteado la sociedad española. Este crecimiento es absolutamente imprescindible, pero hay que mantenerlo sin que se reaviven los desequilibrios tradicionales de nuestra economía, como son la inflación y el déficit exterior, al que extensamente se ha referido el señor Ministro en su intervención.

Los resultados en estos últimos años están, sin embargo, muy lejos de ser alentadores. Desde hace bastante tiempo los precios no han hecho otra cosa que aumentar y sus previsiones iniciales, contenidas en los presupuestos de años anteriores, han sido dobladas en algunos casos, sin ir más lejos el pasado año. El panorama para este año tampoco se presenta excesivamente favorable y transcurridos cinco meses del mismo la tasa de inflación interanual se encuentra en unas cotas muy alejadas de las previsiones del Gobierno, que fijan, como sus señorías saben, un objetivo del 5,7 por ciento.

En cuanto al déficit comercial, hay que afirmar que sólo Estados Unidos y Gran Bretaña superan el déficit comercial español. El año pasado este déficit se deterioró en un 33,6 por ciento y mucho nos tememos que tal y como van las cosas este año el déficit comercial alcance cotas semejantes. Pero lo que más me preocupa en este aspecto es, en contra de lo manifestado en la tribuna por el señor Ministro, la marcha de nuestras exportaciones, pues si bien las compras al exterior parece que se están desacelerando, los resultados de nuestras ventas reflejan también una moderación. En el primer trimestre de este año aumentaron un 8,8 por ciento frente al 11,3 por ciento del año anterior. Así, la tasa de cobertura muestra fuertes descensos: hemos pasado de casi el 70 por ciento, en 1987, al 62,2 por ciento, en 1989. En estos últimos años, en consecuencia, hemos perdido, y conviene que se sepa, 7,4 puntos porcentuales, de los cuales 4,4 corresponde al último año, lo cual es ciertamente desalentador.

Todo ello se traduce en un déficit por cuenta corriente que puede llegar a rebasar el 3,4 por ciento del PIB, lo que requiere acudir al auxilio del ahorro exterior. Hasta el presente las inversiones extranjeras han financiado, como es bien sabido y con cierta holgura, este desequilibrio, pero en estos primeros meses de 1990 han sonado las primeras señales de alarma, ya que los flujos inversiones extranjeros se están retrayendo —un 40 por ciento menos en el primer trimestre— lo que pone en duda su continuidad a medio y largo plazo. Al no poder contar con el ahorro exterior, debemos potenciar el ahorro interno como única manera de asegurar la inversión. Y ésta es otra de las principales carencias de estos presupuestos, porque no contemplan una potenciación el ahorro interno. No es que nosotros pretendamos afirmar que el ahorro

es sensible a estímulos fiscales, pero sí estamos en condiciones de asegurar que la política fiscal ha maltratado las posibilidades de ahorrar de los españoles. El ahorro nacional ha pasado de representar, en el período 1978/1980, el 25 por ciento del PIB, a representar el 20 por ciento en el período comprendido entre 1981 y 1988, apreciándose, sobre todo, una caída en el ahorro de las familias. En definitiva, mientras no se dé solución a los desequilibrios mencionados, no estaremos en condiciones de afrontar el reto de 1993 con éxito, y la sombra de un ajuste duro, con altos costes sociales y económicos, estará presente.

Por otra parte, es desalentador para quienes tenemos la obligación de aprobar los Presupuestos Generales del Estado que, año tras año, el Gobierno incumpla, sistemáticamente, el mandato legislativo. Este incumplimiento se produce, tanto en el nivel absoluto de gasto ejecutado, como en el destino final de los créditos aprobados. De los más de 800.000 millones de gasto en exceso que se produjeron en 1989, sólo el 10 por ciento, aproximadamente, tuvo su origen en créditos extraordinarios y suplementarios, que requieren ser tramitados como proyectos de ley y, por tanto, necesitan el consentimiento expreso y concreto de las Cámaras. El resto, es decir, algo más del 90 por ciento de la cifra antes mencionada, 800.000 millones de pesetas, se debió a ampliaciones e incorporaciones de créditos, que corresponden más a la voluntad del poder Ejecutivo, que a la voluntad del poder Legislativo. Lo más grave de todo lo anterior es que el déficit público medido por la necesidad de financiación apenas se ha reducido cuatro décimas durante 1989, y ello a pesar del brutal —repito, brutal— aumento de la recaudación por impuestos directos y cotizaciones sociales, que proporcionaron nada más y nada menos que un billón de pesetas por encima de lo inicialmente previsto.

Sin entrar a considerar la conveniencia y la oportunidad de un drenaje tan fuerte de recursos por vía fiscal, es un hecho que no debemos olvidar que, de cumplirse los Presupuestos para 1989, el déficit público hubiese desaparecido en nuestro país, aliviando de esta forma la carga de intereses sobre los presupuestos futuros y la actual tensión de los mercados financieros. Habrá que preguntarse: ¿Acaso no se ha podido eliminar el déficit público porque había que atender gastos extraordinarios de inversión en infraestructuras, de las que tan necesitada está nuestra economía? La respuesta es, lamentablemente, negativa, pues además de poder rebasar los niveles absolutos de gasto, el Gobierno tiene a su disposición la posibilidad añadida de transferir de unas partidas a otras y de unos programas a otros, casi a voluntad, los créditos presupuestarios aprobados en el Parlamento. Esa facilidad para transferir créditos contribuye a que en 1989 se reduzcan los gastos en inversiones reales en más del 11 por ciento respecto a lo inicialmente previsto y así, lo que era un deslumbrante crecimiento previsto de la inversión real de más del 37 por ciento entre 1988 y 1989, se ha convertido en un crecimiento mucho más corriente —aunque muy importante— del 21 por ciento, por debajo del crecimiento registrado por los gastos financieros, la compra de bienes y servicios y las transferencias corrientes.

Una novedad del proyecto de ley de Presupuestos para 1990 que no deseo pasar por alto es la inclusión de un artículo —el décimo— que interpretamos de autodisciplina y de propósito de enmienda. En este artículo se dice, en lo esencial, que el gasto comprometido a final de ejercicio no puede superar el aprobado por el Parlamento, ya sea en estos presupuestos o en las sucesivas leyes de concesión de créditos extraordinarios o suplementarios. Esta iniciativa nos parece muy positiva, pero en todo caso resulta incompleta y posiblemente dé lugar a resultados perversos. Esto es así, y me explico, porque al quedar fijo el tope absoluto de gastos y dadas las inercias del gasto corriente, la variable de ajuste son los gastos de capital y, específicamente, las inversiones reales.

En el proyecto de ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, que procede del real decreto ley del mismo nombre y que es complementario al proyecto de ley de Presupuestos; se incluyen, por otra parte, las modificaciones tributarias para 1990.

No es exagerado decir que nuestro sistema tributario está, en la actualidad, cogido con alfileres e hipotecado de cara al futuro. Las principales figuras impositivas, como son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, están heridas de muerte; la primera como consecuencia de la conocida sentencia del Tribunal Constitucional, referida a la acumulación de rentas en el seno de la unidad familiar; la segunda, por el incremento de los costes laborales y la pérdida de competitividad exterior a que da lugar, que no admite, por cierto, comparación con la mayoría de los países de la OCDE o de la CEE.

La política tributaria seguida por el Gobierno se caracteriza por el continuismo y la principal finalidad de recaudar más. Buena prueba de ello es que se prorroga por un año el actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, basado en una interpretación, como mínimo poco satisfactoria, de la sentencia del Tribunal Constitucional. Buena prueba de ello es también que durante 1989 la presión fiscal en nuestro país aumentase en más de dos puntos del PIB; algo realmente insólito en conjunto de los países occidentales, que llevan casi una década practicando políticas de contención e incluso de reducción de la presión tributaria.

Este formidable incremento recaudatorio de 1989, que superó las previsiones iniciales contenidas en el presupuesto en un billón de pesetas, procede, no lo olvidemos, de un sistema tributario caduco, en el que se han difuminado gran parte de los argumentos tradicionales de equidad y en el que se producen importantes faltas de estímulo a ahorrar, a invertir, a asumir riesgos y, en definitiva, a utilizar eficientemente los recursos.

Durante 1989 se han anticipado en nuestro país muchos impuestos. Este no es un tema precisamente baladí. Los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades se han duplicado, pasando del 30 al 60 por ciento, y las retenciones practicadas a las rentas de capital mobiliario han pasado del 20 al 25 por ciento. Todo ello configura un inmenso anticipo de impuestos, sin remuneración ninguna, que hipoteca la recaudación de los ejercicios siguientes. Así, por

ejemplo —y de alguna forma el señor Ministro lo ha reconocido en la tribuna hoy—, los ingresos estimados por IRPF en 1990 se reducen en un 1,6 por ciento. ¿Ha servido esta recaudación extraordinaria, que es en gran parte un simple anticipo, para enfriar la coyuntura económica, reduciendo las posibilidades de gastos de los particulares? La respuesta, una vez más, es negativa. Para lo que de verdad ha servido este aumento de presión fiscal es para financiar más gasto corriente, de tal forma que lo que dejan de gastar los particulares, tanto en consumo como en inversión, lo gasta el sector público, contribuyendo por su parte a recalentar la coyuntura económica y a agravar los desequilibrios de la economía española a los que hemos hecho referencia. Consideramos que los actuales presupuestos y su anexo, la ley de Medidas en su vertiente fiscal, adolecen de pasividad; no plantean modificación sustancial alguna que sirva de tránsito a la inminente reforma fiscal; no atenúan los principales defectos actuales del sistema tributario y, muy particularmente, restan estímulo al ahorro de los particulares.

El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya terminando, señor Ortí Bordás.

El señor ORTI BORDAS: Sí, señor Presidente.

En definitiva, señor Presidente, señor Ministro, señorías, estos Presupuestos Generales del Estado para 1990 no constituyen una respuesta suficiente para intentar superar los desequilibrios que sufre la economía española en cuanto a inflación y a déficit exterior, ni constituyen una respuesta suficiente para despejar de nuestro horizonte económico posibles situaciones críticas, como ha advertido el propio informe del banco emisor, ni constituyen tampoco una respuesta suficiente para asegurar la reacción del conjunto de nuestra economía.

Para que estos presupuestos en concreto y para que la política presupuestaria del Gobierno en general constituyesen una respuesta suficiente, sería necesario que previamente nuestro país saliera de la situación de crisis en la que se encuentra nuestro sistema fiscal; que el Gobierno consiguiese moderar de verdad el consumo público y redujese el gasto asimismo público, y que su política económica dejara de una vez por todas de penalizar el ahorro.

En consecuencia, solicito en nombre del Grupo Popular la devolución del proyecto de ley, no sin antes anunciar nuestro voto favorable al resto de las propuestas de veto presentadas por los demás grupos parlamentarios.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortí Bordás.

¿Turno en contra? (*Pausa.*) El Senador García Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra por tiempo de 15 minutos.

El señor GARCIA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, subo a la tribuna para anunciar desde este mismo momento que el Grupo Socialista está en contra

del veto interpuesto por el Grupo Popular y que votará en consecuencia.

Soy consciente de que si lo que ha dicho el señor Ministro en la presentación no les ha convencido a ustedes para retirar el veto, lo que diga este portavoz que les habla tampoco va a servir de mucho. En cualquier caso, señorías, en el libre ejercicio democrático, la oposición está en su perfecto derecho de presentar los vetos. Y, en este caso, el Grupo Socialista, que hace suyos los presupuestos, que los apoya y que los defiende —como decía—, va a votar en consecuencia.

Señorías, yo no creo en absoluto que el retraso en la aprobación de estos presupuestos haya incidido para nada en la evolución de las distintas macromagnitudes económicas, y a tenor de los últimos datos que tenemos, si ha incidido de alguna manera habrá sido favorablemente. Ahí está la evolución del empleo, ahí está la evolución de la producción, ahí está la evolución de la inversión, etcétera, y por supuesto también de la inflación.

De todas formas, antes de continuar en este análisis, quisiera dejar clara alguna idea que pueda suscitarse tanto en el debate de esta tarde como en los próximos días. Señorías, el Gobierno cumple escrupulosamente la Ley de Presupuestos; es incierto lo que se está diciendo respecto a las desviaciones de gasto, absolutamente incierto. Hay que tener muy claro que una cosa son las modificaciones de crédito —una cosa son los gastos extraordinarios financiados con los créditos que luego se aprueban en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados— y otra muy diferente las desviaciones que puedan producirse en estos presupuestos que ahora aprobamos. En este sentido, señorías, las desviaciones presupuestarias «stricto sensu» —que yo sepa— son muy inferiores ahora a lo que lo eran antes de 1982. Lo dijo el señor Ministro en el Congreso y lo repito yo aquí ahora. De 1977 a 1982, las desviaciones, señorías, eran del 16 por ciento, y desde 1982 a la fecha sólo son del 10 por ciento. Por consiguiente, aun en ese sentido, se está mejorando.

Por cierto, el señor Aznar dijo en el Congreso que en el año 1989 se había invertido un 11 por ciento menos de lo previsto. A mí me parece legítimo que el señor Aznar diga eso. Pero tengan en cuenta, señorías, que quien hizo esa afirmación tuvo la responsabilidad del gobierno de la Comunidad de Castilla y León en el año 1989 —o al menos en buena parte de él— y de un presupuesto de 106.000 millones de pesetas, como sin duda algunos de sus señorías, que son a la vez Procuradores de Castilla y León, conocen...

El señor PRESIDENTE: Señor García Sánchez, céntrese en la cuestión que estamos debatiendo, que son los Presupuestos del Estado.

El señor GARCIA SANCHEZ: ... hubo una desviación del 50 por ciento. Gracias, señor Presidente.

Otro de sus razonamientos es que esperan que el Gobierno limite el crecimiento del gasto público. Señorías, yo soy un Senador nuevo, es la primera vez que subo a esta tribuna, pero he tenido el buen cuidado de revisar

los «Diarios de Sesiones», y todos los aumentos de gasto que se han planteado en la Cámara han contado con el apoyo de sus señorías. Si ustedes, además, suman el coste y aumento de gasto que suponen sus enmiendas parciales a estos presupuestos —sería un ejercicio curioso—, verán lo que va a aumentar el déficit presupuestario.

Me parece perfecto que ustedes consideren que hay que aumentar la inversión para situarnos en la mejor posición posible de cara a la Europa de 1993. De todas formas, señorías, no entiendo las críticas que se puedan hacer en este sentido, no lo entiendo en absoluto. Desde el año 1986 hasta la fecha la inversión en España se ha duplicado. Estos Presupuestos contemplan 1,5 billones de inversiones, un 30 por ciento más que el Presupuesto liquidado para 1989. Sinceramente no lo entiendo, máxime cuando la formación bruta de capital en España en el año 1989 creció un 13,5 por ciento, muy por encima, por supuesto, de lo que creció la tasa de consumo privado, que lo hizo el 5,6 por ciento. Y todo ello, señorías, con independencia de la subida de las tasas de interés y de la política monetaria restrictiva que se comentaba por el interviniente que me ha precedido en el uso de la palabra. Por cierto, evolución de la tasa de interés o tasas de interés altas que en absoluto están limitando el crecimiento de la inversión privada. Y ello es así porque, dadas las circunstancias favorables que concurren y dadas las favorables expectativas económicas de los empresarios, está aumentando la tasa de inversión privada y la formación bruta de capital, señorías. Desde Keynes para acá todos sabemos que la clave en las inversiones son las expectativas de los empresarios en un contexto económico y social estable, y esto es válido incluso para las inversiones extranjeras. Se ha demostrado en nuestro país que en determinados momentos los inversores extranjeros, incluso ahora, han demostrado más confianza en nuestro propio futuro que nosotros mismos.

Nos acusan también, señorías, y acusan al Gobierno socialista de excesiva presión fiscal. Yo quisiera dejar claro algo que no sé si se ha dicho, pero que desde luego está en la idea de nuestro partido: para los socialistas es mucho más progresista financiar las necesidades que tiene este país en infraestructuras, con décadas y décadas de retraso, en gastos sociales y en toda la serie de medidas que se requieren, en aras de una política de equidad y de justicia distributiva, con impuestos progresivos que con cargo a déficit. Sin embargo, señorías, convendrán ustedes con nosotros en que se mantiene en el año 1990 el «statu quo» tributario; la presión fiscal no aumenta un ápice, señorías. Si ustedes suman los impuestos directos y los indirectos verán que, con respecto al PIB previsto para 1990, representan el 18,8 por ciento, y en el año 1989 esa suma representó el 18,9 por ciento. No aumenta la presión fiscal, eso es lo curioso, se rebaja incluso. Y si ustedes suman los capítulos primero a séptimo, que son los ingresos de naturaleza no financiera del Estado, verán que crecen un 10,8 por ciento, en línea más o menos con lo que crece la actividad económica. Por consiguiente, pueden aumentar los ingresos, pero no por presión fiscal; en todo caso podrán aumentar por la lucha contra el frau-

de o por la mejora de los procedimientos de gestión y de recaudación tributaria.

Creo, señorías, que con independencia de ideologías, podríamos ponernos de acuerdo en algo: Estoy convencido de que todos los grupos políticos de esta Cámara asumirían sin ninguna reserva que en este país se siguiera creciendo al ritmo del 5 por ciento de la producción interior bruta. Estoy seguro de que lo asumiríamos si, además, nos dijeran que la inflación con respecto a la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, se iba a rebajar. Qué duda cabe que aceptaríamos eso, que aceptaríamos también que siguiera aumentando la formación bruta de capital por encima del 10 por ciento anual y, por supuesto, que se fueran creando 1.500 empleos por día, como está ocurriendo en la actualidad; sin duda creo, señorías, que eso lo aceptaríamos todos. Y digo esto, porque el 19 de diciembre de 1988 desde esta misma tribuna se dijo lo siguiente: «Se ha agotado ya y no puede dar más resultado el modelo económico que ustedes han estado manejando, y se ha agotado también el modelo presupuestario que han venido ejercitando. Hay que ir a otro modelo presupuestario como hay que ir a otro modelo económico y social, porque el de ustedes ya no puede dar más resultado». Señorías, los modelos económicos no son como las recetas de cocina, de todas formas, quien dijo estas palabras el 19 de diciembre de 1988 fue el señor Ortí Bordás, y desde esa fecha en este país se han creado 1.552 empleos por día, ha aumentado el nivel de empleo en 864.400 personas, en el año 1989 aumentó la producción el 5,2 por ciento y, además, aunque haya que seguir luchando en esa dirección en materia de precios —como apuntó el señor Ministro en su intervención anterior— y sea necesaria la colaboración de todo el mundo, hay que decir claramente que, al menos en términos relativos, se ha rebajado la inflación con respecto a los países de la Comunidad Económica en el año 1989. Dense ustedes cuenta de que en el año 1988 los países de la Comunidad Económica Europea tuvieron un índice medio de precios del 3,7 por ciento, y terminaron el año 1989 en el 5,3 por ciento; tomando como base 100, eso supone que en el año 1988 se pasó del 143 por ciento, luego hubo un aumento del 43 por ciento, mientras que España finalizó el año 1988 en el 4,8 por ciento, y 1989 con el 6,8, que es un aumento del 41 por ciento. Por consiguiente, al menos en términos relativos, se ha rebajado el índice de inflación, lo cual no quiere decir que no haya que seguir en esa dirección, ¡faltaría más!; no quiere decir que subidas de precios, como apuntaba el señor Ministro en el Congreso, del 3 por ciento y de salarios nominales del 5 por ciento sean preferibles, sin duda de ninguna clase, a subidas de precios del 28 por ciento y de salarios nominales del 30. ¡Qué duda cabe que aumentar los salarios nominales en un 50 por ciento no va a enriquecer a la clase trabajadora, y que a lo único a que eso daría lugar sería a la quiebra económica de todo el sistema! Ese es el grado de responsabilidad que tiene que tener todo el mundo, especialmente los que inciden directamente en el lado de la oferta o de la demanda de mano de obra.

Sí, señorías, incluso en la inflación se ha mejorado li-

geramente en términos relativos, y hay que seguir en esa dirección. Podríamos poner el ejemplo del Reino Unido, que partiendo de un 4,8 por ciento en 1988 como España, terminó en un 7,8 frente al 6,8 de España en 1989. Lógicamente, convendrán ustedes con nosotros en que el Gobierno socialista debe seguir apostando por su propia política, por la política que, en definitiva, está consiguiendo estos resultados, y hay que seguir avanzando en la línea de situar a nuestro país en las mejores condiciones posibles de cara al año 1993. Y los últimos indicadores están dando la razón a esta política de alguna manera: ¿qué decir de las 53.000 personas en que disminuyó el paro el pasado mes de mayo, situándose la tasa de desempleo en la cota más baja desde el año 1983, en el 15,5 por ciento? O ¿qué decir del crecimiento cero en materia de precios, situándose la tasa interanual, como ha apuntado el señor Ministro, en el 6,8 por ciento? Pero ¡qué duda cabe que hay que seguir haciendo esfuerzos en este sentido y que es necesaria e imprescindible la colaboración de todos!

Señorías, cuando se hacen valoraciones económicas hay que tener mucho cuidado. En economía ocurre como en matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto está mal, y desde esta tribuna el año pasado se han hecho afirmaciones que luego la propia evolución de los acontecimientos ha demostrado que eran falsas, y probablemente otras que se han hecho este año veremos dentro de un año cómo tampoco se han cumplido. Por ejemplo, el año pasado se hizo la afirmación desde esta tribuna de que el déficit público de 1989 superaría el 43 por ciento del PIB, y si mis datos son correctos —y creo que lo son—, se sitúa en torno al 40 por ciento del PIB en el año 1989.

Por tanto, no se puede hablar de modelos económicos que sirvan o que dejen de servir. Si se pudiera hablar de alguno, ya hace tiempo que se sabe, señorías, que el modelo que está en regresión es el modelo de «Laissez faire, laissez passer» y del liberalismo puro y duro que está detrás de su intervención hoy aquí, de la del señor Aznar en el Congreso y de todas y cada una de las manifestaciones que hacen ustedes en los medios de difusión en materia económica. Los economistas que defendían estas ideas ya se sentían en un programa de investigación degenerativo, en un sentido lakatosiano, cuando ese modelo no explicaba la persistencia de desempleo en los años 30 a raíz del «crack» del 29. El hecho de que se produjesen inflación y paro simultáneamente, debido a la crisis de la energía en el año 1973, no les autoriza, al menos con razón teórica, a volver la vista atrás al siglo XIX, en la defensa de esas ideas, ya que han sido los propios economistas neoclásicos, como la señora Robinson y Chamberlain, al exponer los títulos de sus obras «La competencia imperfecta» y «El monopolio», los que han demostrado claramente que los mercados no están equilibrados y que se requiere el mecanismo corrector del sector público, de ese cuarto sector. Habrá que discutir si esa participación del sector público es del 30, del 40 o del 50 por ciento, pero evidentemente es de extraordinaria importancia que corrija esos desequilibrios que generan injusticias sociales a los más desprotegidos. En definitiva, un sector público que vaya atendiendo a los que más lo necesitan.

Señorías, es necesario seguir manteniendo unas tasas altas de crecimiento del PIB para seguir recortando el diferencial que nos separa de los países más adelantados de Occidente, pero es preciso crecer sin desequilibrios, controlando la inflación a ritmo del 4 por ciento, procurando reducir el exceso de demanda y el «gap» inflacionista por ese concepto, para evitar de esta manera los problemas que afectan al sector exterior. Señorías, qué duda cabe que está el déficit por cuenta corriente —que se ha citado aquí antes—, pero después de pasar a una reconversión como la de 1986, una quiebra económica y financiera que se produce a partir de 1982, dado que no se habían podido adoptar las medidas oportunas en los años anteriores, es necesaria la importación de bienes de equipo, de muchos «inputs» o productos intermedios que demanda una economía en desarrollo. Estaba previsto que esta situación se iba a producir, pero con la colaboración de todos y el compromiso de todo el mundo la lucha por controlar la inflación va a situar a la España de 1993 en una situación mucho más competitiva.

Señor Ministro, señorías, hacemos nuestros estos presupuestos y estamos orgullosos de ellos. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de unos presupuestos que, sin aumentar la presión fiscal y controlando la reducción del déficit público, atienden a las prioridades de gasto que demandamos los socialistas? ¿Cómo no vamos a estar orgullosos, señor Ministro, si controlando eso las inversiones crecen un 30 por ciento, las inversiones en infraestructura, que se han cuadruplicado desde el año 1982, aumentan en estos presupuestos un 28,6 por ciento y los gastos de educación, sin incluir aquellas competencias cedidas a las comunidades autónomas, suben hasta los 900.000 millones de pesetas, casi el 16 por ciento de incremento? Fíjense ustedes que desde el año 1982 hasta la fecha el gasto global del Estado en educación se ha triplicado, pasando de 542.000 millones a un billón, y los gastos en sanidad han experimentado aumentos más o menos de la misma índole, y un presupuesto en torno a los dos billones. ¡Qué duda cabe que hay que seguir mejorando en todos estos sentidos!, pero no podrán negarme sus señorías que con la situación de la que partíamos, con la reconversión económica, industrial y financiera que se produjo en los primeros años, hasta 1986, del Gobierno socialista, evidentemente el esfuerzo ha sido importante y creo que se han conseguido cosas también trascendentes.

En definitiva, señorías, de acuerdo con la ley de la gravedad, el abejorro no puede volar, pero vuela, de acuerdo con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la economía española no podría funcionar, pero funciona, y afortunadamente goza de una aceptable salud, lo cual no quiere decir que no haya que corregir esos desequilibrios básicos con la ayuda y con la colaboración de todos, como decía antes, para situarnos de la mejor manera posible en la Europa de 1993. Es necesario seguir adelante, trabajando entre todos, para que la España de 1993 esté al nivel que todos deseamos. Es un compromiso de todos y, sin ninguna duda, si lo asumimos, acabaremos estando orgullosos de nosotros mismos, pues habrá merecido la pena.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador García Sánchez.

Cabe ahora que haya un turno de portavoces, o si no, se puede acumular al final de la discusión de todos los votos (*Pausa.*) ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (*Pausa.*)

Terminada la discusión del primer veto, y por dar unidad al debate, vamos a suspender la sesión hasta esta tarde a las cuatro.

Se suspende la sesión.

Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Pasamos al debate de la propuesta de veto número cuatro, suscrita por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.

El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, me atrevería a decir que el debate de los dos proyectos de ley que hoy iniciamos es realmente atípico, y esa atipicidad viene dada por varios motivos y circunstancias que intentaremos razonar.

En primer lugar, está fuera de su momento —por decirlo de alguna manera—, se ha hecho a destiempo, y está fuera de su momento oportuno y normal, ya que lo lógico es que a finales de año se debatan las medidas presupuestarias para el próximo ejercicio. No ha sido así, porque el Presidente del Gobierno, en uso legítimo de sus facultades, disolvió las cortes del 1.º de septiembre con la justificación de que era necesario acometer una serie de reformas urgentes y profundas en la política económica para superar los retos importantes que representaba nuestra plena integración en la Comunidad Económica Europea.

Es también un debate devaluado por su poca perspectiva, porque dentro de unos meses —relativamente pocos— volveremos a debatir los presupuestos para el año 1991, y el propio interés de todos los grupos políticos no está tanto en debatir unos presupuestos que reflejan una política económica ya superada, sino en debatir cuáles deben ser las medidas urgentes necesarias que se deben introducir con la mirada puesta en el 1.º de enero de 1993.

Por ello, no es extraño que en el ánimo de muchas de sus señorías esté la sensación de que se ha perdido un año, siendo este debate poco útil para la reorientación de la política económica española. Por lo menos ésta es la opinión de nuestro grupo. Pero con ser ello grave, supone mayor gravedad si tenemos presente que los demás países europeos ya nos llevan mucha ventaja, por lo que era necesario acometer las medidas que justificaban la disolución de Las Cortes.

Pero hay que tener presente también otras circunstan-

cias. En el trámite de debate a la totalidad de la Ley de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, el señor Ministro de Economía ofreció un pacto para la competitividad.

Poco después, en el trámite de discusión, salió a la luz pública la voluntad y la intención del Gobierno de afrontar una reforma fiscal en profundidad antes del nuevo año, y parece ser que para el próximo mes de julio se quiere presentar un borrador, y de hecho este fin de semana se ha presentado ya el libro blanco para la reforma fiscal.

Casi simultáneamente el Presidente del Gobierno convoca a los representantes de todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos, sustentados por una amplia mayoría, y abordar a fondo los retos de la integración de España en la Comunidad Económica Europea. Realmente podríamos decir que es el 22 de mayo cuando empieza de verdad y políticamente esta cuarta legislatura, ya que no lo fue después de las elecciones generales por los motivos de todos conocidos, y tampoco creemos que lo fuera en el mes de abril, con ocasión de la cuestión de confianza a la que se sometió voluntariamente el Presidente, ya que así lo había prometido en el debate de investidura. De ahí nuestra sensación de un año más o menos perdido y de la relativa utilidad de este debate. Una conclusión sí hemos podido sacar y es lo poco conveniente que puede resultar la convocatoria de elecciones generales en el último trimestre del año.

Por dos tipos de motivos hemos de presentar este veto a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Por una parte, porque no contiene las medias necesarias de política económica para afrontar los retos de mayor competitividad que exige nuestra plena integración en la Comunidad Económica Europea. Por otra, porque tampoco prevé las actuaciones presupuestarias suficientes ante los problemas sociales que afectan a amplios sectores de nuestra sociedad. Intentaremos explicar cuáles son unos y otros.

No vamos a negar que nuestra economía va creciendo, pero también que presenta desequilibrios importantes y muy superiores a los demás países europeos, o sus economías más concretamente. Sería absurdo negar que se han alcanzado algunos objetivos como crecimiento interno de la producción; aumento de la base de inversión interna y exterior; contención del déficit público y una pequeña reducción de los niveles del paro. La cuestión más bien está en si ello es suficiente para contrarrestar la evolución negativa de otras magnitudes y sobre todo si la diferencia con el resto de los países comunitarios continúa siéndonos o no altamente desfavorable.

Uno de los problemas que tenemos en nuestra economía es que no se ha encontrado una política antiinflacionaria eficaz. El año pasado, con un objetivo de inflación de un 3 por ciento. Se alcanza una cifra muy superior del 6,9 por ciento. Para el año actual, con el objetivo fijado en un 5,7 por ciento, las cosas no parece que vayan a ir mejor, a pesar de que la baja en el sector alimenticio ha hecho mejorar el índice de precios al consumo en los últimos meses. A pesar de esta coyuntura favorable, estamos por encima de lo previsto, ya que la tasa interanual

está aún en el 6,8 por ciento y convendría no echar las campanas al vuelo por unas mejores que pueden ser puramente coyunturales, porque en el fondo de las dificultades para que la inflación siga bajando continúan estando presentes.

No vemos incorporadas novedades en este proyecto de ley para pensar que habrá una rectificación en la tendencia inflacionista, porque la lucha antiinflacionista sigue basándose en una política monetaria que se ha mostrado insuficiente. Lo malo es que la sociedad no cree que en este año la inflación pueda descender, y ahí está lo peor. También continúan aumentando los diferenciales de inflación con nuestros principales países competidores.

Tampoco encontramos, señor Presidente, señorías, medidas tendentes a frenar el abultado déficit comercial exterior, que viene aumentando año tras año. Estos días se han hecho públicas las previsiones de la Comisión Europea para la economía española en el presente y próximo año. Para el ejercicio actual de las previsiones alcanzan un déficit comercial de 28.300 millones de ECU, es decir, unos 3,6 billones de pesetas, lo que supone un aumento del 20 por ciento respecto del déficit del comercio exterior de 1989, es decir, el año pasado, que alcanzó los 3 billones de pesetas. Las previsiones para 1991, según la Comisión Europea, suponen un déficit en la balanza comercial de 4,1 billones, que según anunció el señor Ministro de Economía en Luxemburgo el pasado día 11 no son muy diferentes de las que prepara o presupone el Gobierno español.

Si esto es así, creemos que este sector de la economía merecería más atención que la prestada por estos Presupuestos que hoy debatimos y, en general, por la que le dedica el Gobierno. Durante el pasado ejercicio nuestra diferencial de inflación con respecto a la Comunidad Económica Europea fue de un punto y medio. De otra parte, la competitividad de los productos españoles sufrió una fuerte caída frente a los productos del resto de los países comunitarios en su conjunto, concretamente, en un 7,8 por ciento. Ello fue debido, en gran parte, a la fortaleza de la peseta en su tipo de cambio. Estos dos factores son los que más están influyendo en el deterioro de nuestra balanza comercial. Con esta peseta que —no nos engañemos— está fuertemente sobrevalorada de manera artificial debido a la presión ejercida por las fuertes entradas de capital especulativo atraído por los altos tipos de interés españoles, y la devolución de la cual hay que descartar, puesto que sus efectos recaerían por completo sobre la inflación más que en mejorar el saldo de la balanza comercial, se impone buscar otras vías para mejorar la competitividad de nuestros productos. Entre estas medidas cabría poner el acento, por ejemplo, en aquellas tendentes a rebajar los costes unitarios mediante la reducción de las cargas sociales. Un cambio en la oferta de productos españoles, con especial atención al diseño, la presentación y la técnica como principales atractivos y, también, un decidido apoyo institucional al fomento de la presencia de empresas españolas en el exterior a través del Instituto Español de Comercio Exterior.

Por lo que respecta a esta última actuación no pode-

mos dejar de señalar que, mientras el Plan de fomento para la exportación, en 1987, señalaba la necesidad de destinar a la producción de nuestras exportaciones un uno por ciento del importe de las mismas, para este ejercicio de 1990, que estamos contemplando, tan sólo se alcanza el 0,5 por ciento. Pero, a continuación, también tenemos que decir y denunciar que la gestión de estos fondos se ha de modificar. En 1989 se han dejado de gastar 3.233 millones de pesetas del capítulo destinado a fomentar la exportación y, naturalmente, esto es incomprensible, habida cuenta de la situación tan precaria en la que nos encontramos en este sector con un déficit tan importante. Se impone, pues, una actuación decidida en este sector cuando, como decía anteriormente, las previsiones para este año y el que viene, son bastante pesimistas. Sabemos que el déficit va a aumentar, que va a seguir aumentando considerablemente. ¿Cómo no tomar medidas urgentes y decididas en apoyo de la exportación? Sin embargo, en estos Presupuestos, no vemos esta medida por ninguna parte.

Los elevados tipos de interés en nuestro país, como consecuencia de la política monetaria restrictiva, producen unos efectos negativos para nuestra economía interna. Las empresas españolas tienen que pagar el crédito más caro que las extranjeras y, además, tienen mayores dificultades para conseguirlo, ya que están restringidos. Hay entre seis y ocho puntos de diferencia en relación con las empresas extranjeras que compiten con las nuestras, lo cual dificulta, ya de por sí, la inversión privada. Por otro lado, estos elevados tipos de interés atraen capitales extranjeros presionando al alza el tipo de cambio de la peseta, lo cual perjudica la exportación e incrementa las cargas financieras exteriores. No vemos medidas en el proyecto de ley para pensar que los tipos de interés se vayan reduciendo.

La evolución del ahorro en los últimos años ha sido negativa, sobre todo en el ahorro privado. El ahorro familiar, a comienzos de los años ochenta, representaba un 12 por ciento del producto interior bruto. En el año 1988 sólo representa el 6 por ciento. Es decir, las familias españolas cada vez ahorran menos. Y ello es lógico, porque faltan medidas eficaces de promoción de este ahorro. Si tenemos en cuenta los impuestos, y si tenemos en cuenta la inflación, veremos que no es rentable ahorrar en nuestro país. En países desarrollados como Francia, Bélgica, Suecia, Gran Bretaña o Estados Unidos se toman medidas al respecto. En Estados Unidos, precisamente, acaban de tomarse unas medidas en política económica que estimula este ahorro. Por el contrario, nuestra política económica no invita demasiado al ahorro sino que, por el contrario, incita a consumir.

El problema del paro, señor Presidente, señorías, continúa siendo un grave problema para nuestra economía. Quizá estemos demasiado habituados a hablar de él y a tenerlo entre nosotros. Entendemos que hay que reaccionar con la energía necesaria para resolverlo y buscar soluciones con rapidez. Es cierto que se están creando puestos de trabajo y que se está creando empleo neto. Pero piénsese —y reflexionemos— si el ritmo de crecimiento es

suficiente para llegar a resolverlo y, si no a resolverlo, por lo menos, a llegar al nivel de la Comunidad Económica Europea.

No hay que olvidar que aún tenemos dos millones y medio de parados; es decir, una tasa del 17,3 por ciento de la población activa, mientras que en Europa es casi de la mitad, el 8,9 por ciento. Para recordar cifras también conviene tener en cuenta que en el año 1982 había 2.145.000 parados y ahora en 1990 tenemos 2.400.000 en cifras redondas.

Conviene tener presente que en los Presupuestos de 1989 para promoción de empleo estaba prevista una cantidad de 280.000 millones de pesetas y sólo se ejecutaron 209.000 millones. Es decir, hubo un superávit de 71.000 millones de pesetas; o dicho de otra forma, dejó de optimizarse el 25 por ciento de lo previsto. ¿Cómo es posible que en una cuestión tan importante como ésta, la promoción de empleo, haya superávit y no se utilizara al ciento por ciento? De aquí viene nuestra impresión de que hay que hacer más hasta el máximo posible, en un tema de tanta profundidad económica y social.

Finalmente, no vemos expectativas en estos Presupuestos para la mejora de la competitividad. La evolución de nuestra economía indica que estamos perdiendo competitividad en los mercados interiores y exteriores. El crecimiento de las importaciones dobla al de las exportaciones. Las inversiones extranjeras en España son diez veces superiores a las que efectúan las españolas en el extranjero. Ante un mercado europeo cada día más competitivo nuestros productos están perdiendo cuotas de mercado.

Nos hemos referido, también, a que echábamos en falta en el proyecto actuaciones presupuestarias ante los problemas sociales que afectan a amplios sectores de nuestra sociedad, los más desvalidos concretamente; y haremos mención sólo a dos temas que creemos que no se han tratado con la sensibilidad necesaria por decirlo de alguna forma: la sanidad y los asuntos sociales.

Faltan recursos y una mejor distribución en los presupuestos para la sanidad. Los recursos, el dinero destinado a sanidad representa un 4,8 por ciento del Producto Interior Bruto, muy por debajo de la media de los países de la Comunidad Económica Europea a los que hemos de hacer, forzosamente, referencia frecuentemente, pues en estos países la media es del 5,6 por ciento. Eso no es todo, hemos pasado de una población protegida del 83 por ciento al 93 por ciento. La insuficiencia ya va siendo tradicional por el constante desvío presupuestario año tras año del INSALUD: en el último ejercicio, nada más y nada menos, de un 14 por ciento. Si el año anterior hablábamos de un desvío presupuestario del diez por ciento, para este año último hablamos de un 14 por ciento. Su presupuesto era de un billón 574.000 millones y se gastó un billón 794.000 millones. Por tanto, el incremento previsto de un 17,57 por ciento queda reducido con las mismas previsiones, naturalmente, a un incremento escaso del 3,14 por ciento. Pero hay más inconvenientes, el desvío constante a este gasto crea dificultades, a veces insuperables, a las comunidades autónomas que tienen transferida la sanidad, porque este desvío del presupuesto lo va realizando

el INSALUD en todo el Estado, pero no así las transferencias de este desvío a las comunidades autónomas, que no se efectúa hasta que no se ha cerrado el ejercicio y, a veces, hasta bastante más tarde; ello hace que las comunidades autónomas no puedan atender debidamente a sus proveedores y, lo que es peor, no puedan atender debidamente a sus protegidos.

Entendemos que habría que hacer un esfuerzo y encontrar otro sistema de financiación sanitario.

Hemos de manifestar también, señor Presidente, señorías, que somos el penúltimo país de la Comunidad Económica Europea en gastos de protección social, ya que mientras los restantes países van a gastar un 25,6 por ciento de su producto interior bruto, nosotros dedicamos sólo un 18 por ciento.

Sin entrar en temas puntuales, como puede ser la protección de la familia, que ya se está en vías no de una solución ideal pero sí en vías de una solución no del todo satisfactoria, me referiré a los presupuestos del INSERSO.

El INSERSO dispone este año de un presupuesto de 166.524 millones, de los cuales el 70 por ciento, es decir 100.864 millones, va destinado a lo que se llama presupuesto centralizado. El presupuesto del año pasado estaba repartido aproximadamente en partes iguales entre el centralizado y el descentralizado, lo cual quiere decir que el incremento ha ido a parar en estos Presupuestos para 1990 casi exclusivamente a las atenciones del Ministerio de Asuntos Sociales en servicios centrales, descuidando las necesidades que tienen por su competencia y por sus transferencias las comunidades autónomas en esta materia.

Pero hay también desequilibrio en el presupuesto descentralizado, de manera que, para sus obligaciones, no todas las comunidades autónomas disponen de recursos similares, parecidos o igualatorios. Así un ciudadano de Cataluña recibe de este Presupuesto, por término medio, 1.587 pesetas; el mismo ciudadano en el País Vasco recibe 2.684 y el ciudadano de cualquier otra comunidad, 3.238 pesetas.

Nada tenemos en contra de los que reciben más, lo tenemos que remarcar y poner el acento en esta cuestión; sólo quisiéramos acentuar la reflexión en el sentido de demandar la solidaridad que tantas veces se nos pide a nosotros.

Voy terminando, señor Presidente, porque veo que se me enciende la luz roja.

No quisiera entrar en el Real Decreto 1517/81 por el que se hicieron las transferencias —y fueron aceptadas— por el sistema de costes efectivos, que suponía el 9,5 por ciento del presupuesto del INSERSO. Pero, el hecho es que en 1984 se modifica este sistema y se adopta el de población asistida con un período transitorio de diez años, por lo que tendremos que esperar hasta 1993 para recibir el 15,76 por ciento equivalente al 16 y pico por ciento que nos correspondería ya por población asistida. Es decir, estamos recibiendo en 1989 el 14 por ciento, en 1990 el 14,54 por ciento y seguiremos esperando hasta 1993 para corregir lo que para nosotros es un agravio comparativo. Otro

tanto cabría decir de la distribución que se está haciendo del 10,5 por ciento del impuesto del rendimiento de las personas físicas.

No estamos de acuerdo en que sólo se distribuya para aquellas organizaciones que geográficamente afectan a todo el Estado, ignorando que la sociedad civil de las comunidades autónomas así como la de todo el Estado durante muchos años ha creado organizaciones con el objetivo de atender colectivos marginales, supliendo muchas veces la obligación que tienen las administraciones públicas y de forma subsidiaria. Entendemos que habría que pensar en la búsqueda de otros sistemas más solidarios y menos injustos, por lo menos a nuestro entender.

Por todos estos motivos hemos presentado y mantene-mos este veto a la totalidad.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.

¿Turno en contra? (*Pausa.*) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador García Sánchez.

El señor GARCIA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Aunque sea brevemente no puedo por menos que subir a esta tribuna para aclarar algunas cosas y responder a otras de las que ha planteado su señoría.

Quiero empezar diciéndole que Cataluña en estos Presupuestos es una de las regiones más favorecidas de España. Señorías, Cataluña tiene casi el 10 por ciento de las inversiones provincializadas; en concreto 68.000 millones sobre los 737.000 millones de inversiones provincializadas, al margen de transferencias y al margen de otros aspectos. Hagan ustedes las cuentas y coincidirán conmigo.

También quiero agradecerle sus palabras. Ha reconocido usted que está aumentando la producción; ha reconocido que está aumentando el nivel de empleo y reduciéndose el desempleo; también creo que ha reconocido algo parecido en cuanto a la inversión. De todas formas, señoría, ha hecho usted estos reconocimientos aproximadamente en diez segundos, pero, convendrán sus señorías con nosotros en que para el Grupo Socialista no es una cuestión baladí que en 1989 se hayan creado 500.000 empleos, ni es una cuestión baladí que haya aumentado la producción un 5 por ciento, la formación bruta de capital un 13,5 por ciento. Son cosas muy importantes que tienen su fundamento tal y como ha quedado contrastado en mi intervención de esta mañana. De todos modos, muchas gracias por la forma de su discurso y también por el reconocimiento de algunas cuestiones.

Apenas ha hecho referencia en estos presupuestos en cuanto a los ingresos. Prácticamente toda su intervención se ha circunscrito a los gastos, a que se necesitan más gastos para sanidad, más pensiones y más gasto social en general. Estamos de acuerdo con usted en que se necesitan efectuar todos esos gastos que usted ha mencionado, pero convendrá con nosotros en que el esfuerzo que se hace en estos presupuestos —y luego me remitiré a las partidas

correspondientes de una forma mucho más explícita— es un esfuerzo importante, extraordinario. Además, el esfuerzo que se está haciendo después de haber realizado la reconversión económica e industrial en el año 1986 es un esfuerzo del Gobierno socialista ciertamente muy importante.

Señoría, yo no creo que el hecho de que estemos ahora aprobando los presupuestos para el ejercicio en curso —lo dije antes y lo repito ahora— esté afectando para nada a la evolución de las distintas macromagnitudes económicas, en absoluto. El que se aprueben estos presupuestos a tiempo o a destiempo, como apuntaba quien me ha precedido en el uso de la palabra, no supone absolutamente nada. No creo que eso se le pueda criticar al Gobierno socialista, porque este Gobierno y el Partido que lo sustenta, señoría, tiene el «record» de haber tomado medidas impopulares en solitario. La propia evolución del empleo, la propia evolución de la inflación y de la inversión están demostrando claramente que el hecho de que estemos ahora aprobando los presupuestos no afecta para nada a la evolución de esas macromagnitudes que, afortunadamente, van en buena dirección.

Su señoría ha venido a decirnos algo en que está de acuerdo el Grupo Socialista, que hay que aumentar las inversiones, que hay que acercarse a Europa. Efectivamente, eso lo decimos todos, pero, señoría, en estos presupuestos las inversiones ascienden a 1,5 billones de pesetas y aumentan un 30 por ciento respecto al presupuesto liquidado de 1989. La formación bruta de capital —lo he dicho antes y lo repito ahora— se ha elevado en 1989 a un 13,5 por ciento. El esfuerzo está ahí a pesar de la subida de las altas tasas de interés. Quiero aclararle algo que se ha dicho aquí: la subida de las tasas de interés no es consecuencia de las razones externas ni de la incorporación de la peseta al SME, en absoluto. Son razones exclusivamente internas. Si se quiere controlar la demanda hay que llevar a cabo una política monetaria restrictiva, y las tasas de interés tienen que ir al alza para que la demanda, en este caso de inversiones, gire ligeramente a la baja y se adecue a un crecimiento del PIB en torno al 4 por ciento. Eso es absolutamente razonable; está demostrado en los datos de 1989 que al haber subido las tasas de interés, la inversión ha aumentado precisamente porque las expectativas favorables de inversión hacen que los empresarios tengan proyectos inversionistas, a pesar de esas tasas altas de interés, por la política monetaria restrictiva. Se invierte y se aumenta la formación bruta de capital, y debido a ello también la producción y el empleo.

¿Que la política monetaria no es suficiente para contener la inflación? Efectivamente, nadie ha dicho lo contrario. Creo que estos presupuestos son moderadamente restrictivos. En la medida que unos presupuestos contribuyen a reducir el déficit, no se puede decir que sean unos presupuestos expansivos, hay que decir lo que es la realidad, son unos presupuestos moderadamente restrictivos, y lo son porque, evidentemente, ante el desempleo que todavía hay —y no es cierto el porcentaje que ha apuntado su señoría del diecisiete y pico, porque es del 15,5 por ciento, el mismo que teníamos en 1983—, que

duda cabe que hay que seguir generando empleo y que hay que seguir aumentando la producción a un ritmo del 4 por ciento. A pesar de eso, señoría, estos presupuestos no suponen un aumento del déficit público; al contrario, se reduce éste ligeramente.

Ha hecho referencia el portavoz de Convergència i Unió a la balanza de pagos. Efectivamente, la balanza por cuenta corriente ha seguido una evolución negativa —no lo voy a ocultar en esta tribuna— en el ejercicio 1989, pero que se nos diga al Grupo Socialista qué analista económico con rigor podría admitir, después de la reconversión económica de los años 1985 y 1986, que no iba a haber al menos cuatro años con dificultades en la balanza comercial y en la balanza por cuenta corriente. No estoy de acuerdo, sin embargo, en que en el ejercicio en curso se agudicen esas dificultades, porque creo que se limitan y, por lo menos, se observa y se aprecia que se camina hacia un cierto control. Pero su señoría sabe perfectamente que en estos momentos se necesita importar bienes de equipo, sabe que incluso, para no tirar al alza de la inflación en nuestro país y de la subida, en definitiva, del nivel de precios internos, se quiere importar «inputs» y productos intermedios que, de lo contrario, supondrían un germen y un mayor incremento de precios y, en definitiva, una mayor tasa de inflación. Todo eso es necesario hacerlo en una economía en desarrollo. Probablemente en el próximo año todavía se agudicen esas dificultades, pero no creo que a nadie le puedan sorprender.

Hay otro error en la intervención del portavoz de Convergència i Unió. Es cierto que tenemos una tasa de paro más alta que la de la Comunidad Económica Europea; yo nunca he dicho lo contrario. Pero es cierto también que se están reduciendo las diferencias, señoría. Fijense ustedes: en el año 1986 la tasa de paro comunitaria era del 10 por ciento y en la actualidad es del 8 por ciento, mientras que la española bajó del 22 por ciento al 15,5 por ciento. Luego las diferencias se están minorando, evidentemente que sí, y es justo reconocerlo.

Me gustaría que me dijera su señoría en qué está incrementando o potenciando el Gobierno socialista el aumento del consumo. No conozco ni una sola medida según la cual el Gobierno socialista potencie el consumo privado, ni una sola. Lo que ocurre —y esto a «sensu contrario» vale también para el ahorro— es que cuando el sector privado, y en concreto las economías domésticas tienen cubiertas sus necesidades sociales más perentorias por una política equitativa y redistributiva y mucho más justa, como la que está aplicando el Gobierno socialista, evidentemente es muy difícil alterar la relación entre la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro. Pero no hay, señoría, ni una sola medida según la cual el Gobierno socialista esté potenciando el consumo privado, ni una sola. Y habrá serias dificultades para aumentar el ahorro de las economías domésticas, y habrá que ir precisamente por el ahorro de las familias y reducir el déficit público, en definitiva, de los dos sectores; ahorro de las empresas vía autofinanciación; ahorro del sector público. Pero habrá dificultades, y las hay, como decía esta mañana el Ministro, al otro lado del Atlántico

y a este lado del Atlántico para alterar la relación entre la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar.

Ustedes dicen que hay que bajar la tasa de interés. Muy bien, pero habrá que bajarla tanto en las operaciones activas como pasivas, en el supuesto de que hubiera que bajarlas. Porque están ustedes haciendo referencia, por un lado, a que hay que rebajar la tasa de interés en las operaciones activas para que haya más inversiones y de esa forma nos acerquemos más en un crecimiento económico más prolongado, a los niveles de renta de la Europa occidental. Sin embargo, desde el lado del ahorro dicen que hay que aumentar la remuneración del ahorro. Visto este análisis desde el punto de vista de las entidades financieras, comprenderán que es difícil porque en economía todo está interrelacionado y habrá, en definitiva, que tomar las medidas más oportunas jugando con que no se produzcan esos desequilibrios.

Esta mañana se ha hablado algo de ello, y no quisiera finalizar mi intervención, señor Presidente, sin referirme de nuevo a este tema.

Algún día deberán debatirse en esta Cámara los efectos nocivos para la inflación que tienen determinadas medidas de política aplicadas en las comunidades. Quizás ahí encontraremos la explicación de por qué Cataluña está a la cabeza de la inflación española. No creo que esas medidas, señoría, vayan precisamente muy bien para favorecer la competitividad.

Ha hecho referencia el portavoz de Convergència i Unió a los gastos insuficientes de sanidad. Sepan sus señorías que el presupuesto destinado a sanidad en 1990 es de cerca de dos billones, con un incremento respecto del año anterior de cerca de 280.000 millones, lo que significa un aumento porcentual del 16,4 por ciento. Creo sinceramente que se ha hecho un esfuerzo extraordinario en materia sanitaria en España. Dense ustedes cuenta, señorías, que en el año 1982 el presupuesto de sanidad sólo alcanzó 695.000 millones, y ahora estamos hablando de dos billones. Se han triplicado casi los gastos de sanidad de los Presupuestos Generales del Estado. Qué duda cabe que al conseguirse la práctica universalización de la sanidad todavía siguen existiendo dificultades, máxime teniendo en cuenta de donde partíamos, pero no se nos diga que el esfuerzo realizado no es extraordinario. Nadie puede negar ese esfuerzo inversor y de gasto en los últimos años en materia sanitaria con el fin de evitar la descapitalización de las instituciones sanitarias a través de la ampliación y mejora de las mismas, mejorando en definitiva la calidad del servicio. Lo mismo que no se puede acusar al Gobierno socialista de no haber hecho un esfuerzo extraordinario en otra serie de partidas presupuestarias que afectan al gasto social, a la política de equidad y a la política redistributiva. Cómo se puede negar el esfuerzo hecho en materia de pensiones cuando se ha pasado de 4.400.000 pensionistas en el año 1980 a 6.000.000 en 1989, y el gasto en pensiones pasó de 1,2 billones en 1982 a 3,8 billones en 1989; o la remuneración media de la pensión, que pasó de 15.161 pesetas en 1980 a 39.791 pesetas en 1989. Realmente, señorías, el esfuerzo es extraordinario teniendo en

cuenta, como hacemos el Grupo Socialista, la situación de la que partíamos y las dificultades económicas que esperamos que estén definitivamente superadas. O qué decir de la acción social, que se ha multiplicado por 4,5 pasando de 23.000 millones de pesetas a 100.000; o qué decir de la asistencia al desempleo, con casi un billón de pesetas en el ejercicio en curso frente a 360.000 millones de pesetas en 1982. Sinceramente, señorías, quiero decirle al portavoz de Convergència i Unió que me parecen tremendamente injustas sus palabras hacia el Gobierno socialista. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Centro Democrático y Social tiene la palabra el señor Quetglas Rosanes.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, señor Ministro, dos son los órdenes de razones por las que nuestro Grupo Parlamentario solicita a la Cámara la devolución de los Presupuestos al Gobierno.

El primero se refiere a lo que nosotros entendemos que es la inadecuación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1990 a las necesidades y a los retos de la economía española frente a la plena integración de la economía europea. El segundo bloque de argumentos hace referencia a lo que nuestro Grupo considera que son defectos intrínsecos del proyecto en cuanto a la asignación de prioridades de gasto y en cuanto al control de gestión y ejecución.

Nuestro diagnóstico, señorías, es el siguiente: Los principales desequilibrios de la economía española a los que debe hacer frente la política del Gobierno y, por tanto, la política presupuestaria como expresión conspicua de la voluntad política de intervenir en la evolución de las variables económicas son: primero, la necesidad de crecer a un fuertes ritmo para tratar de alcanzar las cotas de renta per cápita del resto de países de la Comunidad Económica Europea y, segundo, la creación de más puestos de trabajo de manera más rápida. De una parte tenemos que la renta per cápita española es del orden del 75 por ciento de la renta per cápita de la media de los países de la Comunidad Económica Europea, exactamente el mismo porcentaje que hace quince años.

De otra, el nivel de desempleo que hemos alcanzado muy recientemente es el de 1982, bien es cierto que con la tendencia de signo opuesto, esto es, creciendo el nivel de empleo y no el de parados. O sea, después de un fuerte bache, la situación en términos comparativos es que estamos allí donde estábamos, hemos llegado al punto de partida. Hemos crecido, sí, pero menos de lo que podemos, y hemos crecido al mismo ritmo por lo menos que el resto de países de la Comunidad Económica Europea, por lo tanto no hemos absorbido el diferencial que teníamos respecto a ellos. Así pues, si uno de los objetivos de la política económica española es y debe ser, a nuestro juicio, equiparar nuestro nivel de bienestar con el europeo, debemos ir absorbiendo ese diferencial, debemos crecer a un ritmo más fuerte que el que hasta el momento lo ha-

ceмос. Esta cuestión señala una importante diferencia entre nuestro análisis y el que hace el Gobierno.

Los actuales responsables de la política económica siguen reiterando la necesidad de frenar el crecimiento de la economía española para evitar su recalentamiento, y el señor Ministro esta mañana nos insistía una vez más en este argumento. Se argumentaba que las economías modernas no crecen a ritmos tan fuertes, un crecimiento del PIB por encima del 4 por ciento pondría en peligro los logros conseguidos en materia de contención del crecimiento de los precios y de la estabilidad monetaria. Pues bien, estos argumentos no se contrastan con la realidad. Resulta que la economía europea ha ido creciendo a fuertes tasas, prácticamente a las mismas que la economía española, sino no se mantendría la misma diferencia porcentual en términos de renta per cápita. La brecha entre las zonas desarrolladas y subdesarrolladas de Europa no sólo tiende a cerrarse, sino que se va acentuando, y, sin embargo, las tensiones inflacionarias de los países que más han crecido han sido perfectamente asumibles y controlables. Pero además los datos de la evolución de las magnitudes del sistema económico español muestran que los esfuerzos de las autoridades económicas han resultado vanos para los objetivos planteados. Las proyecciones que el Gobierno hizo en 1988 para 1989 no se han cumplido, la renta no creció en un 4 por ciento, sino en un 5 por ciento; la inflación no fue del 3 por ciento, sino del 6,8 por ciento; y el déficit de la balanza por cuenta corriente no fue el 1,7 por ciento, sino el 2,7 por ciento.

Nuestro Grupo propone las siguientes alternativas a la política que encierra el presupuesto.

Primero, un mayor crecimiento del producto interior bruto, por lo menos al 5 por ciento de manera sostenida, sobre la base de incentivar los sectores de actividad con mayor potencial de crecimiento de la productividad, fundamentalmente sectores industriales innovadores y la agricultura.

Segundo, dar articulación práctica al reconocimiento gubernamental de que los salarios no son los responsables de los rebotes inflacionistas. Si es cierto que no lo son —y nuestro Grupo lo cree así desde hace mucho tiempo— no se puede continuar haciendo pagar a los asalariados, y especialmente a los del sector público, que son los directamente controlados por el presupuesto, una factura que no es suya. Si la productividad del trabajo ha ido subiendo a lo largo de los últimos diez años considerablemente por encima del crecimiento real de los salarios, no es posible mantener por más tiempo esta política en un clima de paz social. Y si, como es fácilmente comprobable, la productividad del sector público también ha crecido por encima de los incrementos reales de las remuneraciones, es necesario aumentar los sueldos públicos no un seis, sino un siete por ciento, con lo que sólo pretendemos un objetivo tan modesto y tan poco reivindicativo como absorber la inflación de 1989.

Tercero, el ahorro. El modelo adoptado por el Gobierno para llenar el vacío existente entre nuestra tasa de generación de ahorro interno y la de las necesidades de la inversión, consiste en confiar en el ahorro público y en

las entradas constantes de capitales procedentes del exterior, para lo cual hace falta mantener unos tipos de interés exageradamente altos.

El portavoz socialista, hace un momento justificaba estos altos tipos de interés como parte esencial de una política monetaria restrictiva para contener la demanda y la inflación y, al mismo tiempo, estimular el ahorro. Pero, señorías, eso no pasa, eso no está pasando. Es decir, es una política que no está adecuada a los objetivos que se plantean. Por tanto, algún replanteamiento habrá que hacer.

Nuestra alternativa consiste en potenciar decididamente el ahorro interno privado, no para mantener las actuales tasas de inversión —alrededor del 27 ó el 28 por ciento del producto interior bruto—, sino para llegar al 30 por ciento o más, de tal manera que nuestro potencial de crecimiento se haga realidad y vayamos creando empleo a un ritmo mayor y acortando la distancia entre nuestro nivel de vida y el de la media europea.

Para ello, evidentemente, no basta el ahorro público. Este ya ha hecho su aportación y de manera nada desdeñable, cinco puntos en tres años, pero, como recurso, ya está prácticamente agotado. Como máximo, y exigiendo un esfuerzo importante a la sociedad y al propio Gobierno, podría aportar, a lo sumo, un punto y medio o dos puntos del producto interior bruto, y eso exigiría, posiblemente, un déficit presupuestario cero.

Por otra parte, la economía española no puede depender indefinidamente de las crecientes aportaciones —el 3 o el 4 por ciento del producto interior bruto (PIB)— del ahorro exterior. En primer lugar, porque, a medio plazo, es inevitable que se produzca una reorientación del flujo de ahorro del sur al Este europeo; en segundo lugar, porque las consecuencias de una detención de ese flujo o, peor aún, de un movimiento de repatriación de capitales serían inasumibles para los ciudadanos españoles —recesión, paro, inflación—; y, en tercer lugar, porque, con la constante aportación de capitales procedentes del exterior, se aviva la llama inflacionaria.

Sin entrar en la discusión académica al fin y al cabo escasamente ilustradora sobre si son los flujos de capital exterior los que provocan inflación o es ésta y sus efectos la que atrae a los capitales foráneos, lo que podemos asegurar es que ambos van de la mano y, en cualquier caso, la inflación siempre necesita una alimentación que los capitales exteriores contribuyen a aumentar.

La única alternativa viable, y, por consiguiente, de una absoluta prioridad, consiste en hacer crecer nuestra tasa de ahorro interno. ¿Cómo? Pues, evidentemente, no hay otra respuesta que las medidas de orden fiscal.

El Ministro de Economía ha tenido varias ocasiones de ironizar en el Parlamento, con el rigor expositivo que le caracteriza, sobre su falta absoluta de fe en las medidas fiscales para estimular el ahorro y de su disciplinada actitud de asumirlas en nombre del concierto social y el consenso político. Con esa predisposición tan negativa va a ser difícil que el equipo económico del Gobierno ponga el entusiasmo necesario para acertar y, muy especialmente, si persiste en inspirarse en las medidas adoptadas por los

países anglosajones, y no por otros modelos, algunos más próximos, cuyos éxitos en materia de estimular el ahorro son mucho más apreciables.

Estimular la autofinanciación empresarial y los hábitos de ahorro en las economías familiares constituye no sólo una necesidad coyuntural, sino la introducción de elementos de solvencia empresarial y de solidez social que permitirán a la economía española afrontar el reto de 1993 en condiciones mucho mejores que los actuales.

Pero, para eso, es necesario introducir también confianza en las medidas fiscales, de tal manera que los ciudadanos sientan que los compromisos de que el Estado otorgará un tratamiento fiscal favorable a determinados comportamientos familiares se mantendrán en el tiempo, sin incertidumbre y con beneficios tangibles.

Es evidente que la variable del paro, como decía esta mañana el señor Ministro, es estructural de reacción lenta ante los estímulos, sean de cualquier tipo —fiscales o monetarios—, eso es cierto; pero no es menos cierto que sin una solidez y una confianza por parte de los ciudadanos en la persistencia de los estímulos fiscales, en la pérdida de coyunturabilidad y oportunismo, si se puede decir en estos términos, de las medidas fiscales que no garantizan una pervivencia en el tiempo como está pasando, con algunas de las actuales como, por ejemplo, las relativas a materia de vivienda, pero de eso ya tendremos ocasión de hablar en otro momento, no se generará el grado de confianza suficiente en éstas como para cambiar los hábitos de ahorro de los consumidores de las familias españolas.

Cuarto. El déficit de la balanza corriente. Sostenemos, señor Presidente, que la prueba de éxito de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea será la balanza comercial.

Si nuestra estructura económica habrá sido o no capaz de encajar y superar el reto europeo se verá ahí. La respuesta —ya lo hemos apuntado en otras ocasiones— vendrá dada por la política industrial y agrícola que sigamos. Eso ya está discutido y, además, tendremos ocasión de volver sobre ello al tratar de las Secciones correspondientes. Pero también influirá de manera decisiva nuestra anticipación para alcanzar posiciones ventajosas para nuestro sector exportador. El tratamiento que recibe la política comercial es en este sentido insuficiente e inadecuado. La pasividad con que el Gobierno está viendo transcurrir los acontecimientos de Europa del Este, de enorme transcendencia económica además de política, es sólo un signo más de lo que hemos dicho. Y sobre lo ya apuntado en torno a nuestro equilibrio económico exterior se cierne una amenaza adicional, la tendencia a la baja de los ingresos por turismo, que han visto decrecer su participación en el PIB de 1989 y, por consiguiente, su capacidad de equilibrar nuestra balanza de pagos; tendencia que se confirma, según todos los indicadores, en 1990. La apreciación de la peseta y las tasas de inflación socavan nuestra competitividad turística. Los aumentos interanuales de precios alcanzan unos niveles reales del 13 por ciento; un ocho por ciento por evolución del IPC de los servicios y un cinco por ciento por apreciación monetaria. Y

con estas subidas de precios, la pérdida de competitividad del sector turístico es muy fuerte. El sector, además, tiene una estructura obsoleta y descapitalizada. Por poner un ejemplo referido a la circunscripción electoral que represento, en Baleares el 80 por ciento de las plazas hoteleras tiene más de 20 años y es una situación que reclama una reconversión de la misma profundidad y alcance que la reconversión industrial y también con similares objetivos en relación a nuestra competitividad. Y, pese a todo ello, no existe respuesta presupuestaria alguna, ni en términos de reforma estructural ni siquiera en términos de medidas coyunturales, en el presente proyecto de Presupuestos.

En resumen y para terminar con este bloque de argumentos que se refieren a la inadecuación del Presupuesto para alcanzar unos objetivos satisfactorios de política económica y que nos llevan a solicitar la devolución del proyecto al Gobierno, nos encontramos, señorías, en definitiva, con un Presupuesto continuista, que constriñe la capacidad de crecimiento real de la economía española por debajo de sus posibilidades, que penaliza el ahorro y hace depender excesivamente la inversión de los capitales exteriores, que da un tratamiento injusto a los salarios y pensiones y no opera de manera decidida en nuestra competitividad comercial exterior.

Nuestro segundo bloque argumental contra el proyecto se refiere a su propia estructura; por un lado, en cuanto a las prioridades de gasto, por otro, en cuanto a la gestión y control del mismo.

Estamos de acuerdo con una apreciación del Gobierno que podríamos resumir del siguiente modo: alcanzado un determinado nivel de progresividad impositiva —que no estoy muy seguro de que España haya conseguido ya, pero, en cualquier caso, en cuanto a su estructura estamos ya cercanos—, la carga de la corrección de las desigualdades de renta, tanto personales como territoriales, y de los desequilibrios sectoriales debe pesar sobre el lado del gasto público. Pues bien, tanto nuestras carencias infraestructurales como nuestros desequilibrios en la distribución y reparto de la renta nos llevan a plantear la necesidad de incrementar los programas de gastos en infraestructura de transportes y comunicaciones, vivienda y, muy especialmente sanidad por encima de los incrementos que han sufrido, aumentos que reconocemos y valoramos. Al mismo tiempo, defendemos la extensión de las pensiones no contributivas a los jóvenes que no pueden alcanzar su primer empleo y la mejora de prestaciones a los parados de larga duración. ¿Y cuál es la financiación de esos aumentos que defendemos sin un aumento considerable del déficit público? La respuesta está en tres fuentes de ingresos y menores gastos que nuestra propuesta conlleva. Una, la propia capacidad de crecimiento de la economía, que, en cualquier caso, va a producir mayores ingresos que los presupuestados, que se han establecido con una hipótesis de crecimiento del cuatro por ciento, cuando creemos que ese crecimiento debe ser del cinco y que en la realidad va a ser más cercano al cinco que al cuatro —es nuestra opinión—; la segunda, la reducción de la carga por intereses, que supondría la adop-

ción de medidas de fomento del ahorro; y la tercera, una mejor gestión de las subvenciones, que supondría un mayor control de la eficacia de las mismas y, por consiguiente, menos gastos por esa vía, sin pérdida de los objetivos de política económica a los que responden.

Por lo que se refiere a la gestión y control del gasto, este es el capítulo en el que nuestro Grupo ha de reconocer sentirse más satisfecho por el paso del Presupuesto por el Congreso de los Diputados, donde se han incluido dos criterios, defendidos por nosotros, que mejoran las posibilidades de control y conocimiento de la gestión presupuestaria al introducir una oficina presupuestaria de carácter parlamentario, que esperamos que en el paso de los Presupuestos por el Senado haga extensivo a los miembros de esta Cámara Alta, así como el establecimiento de un límite máximo para la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, que queda señalado en el proyecto que viene del Congreso en un 2,5 por ciento del total de los créditos autorizados.

Hasta ahí hemos de expresar nuestra satisfacción por las medidas propuestas por nuestro Grupo y que han sido aceptadas por la mayoría. Sin embargo, creemos que al menos persisten dos aspectos fundamentales en los que el proyecto es todavía muy mejorable.

Por un lado, el control de las subvenciones; por otro, el control de la eficacia de los programas de gastos en términos de análisis coste-beneficio, en el que deberían introducirse magnitudes distintas a las del simple cumplimiento del gasto expresado en porcentaje de crédito autorizado. Pero estas cuestiones —importantes, por supuesto— tendremos tiempo de detallarlas al tratar el articulado y las secciones correspondientes.

En definitiva, y para resumir, señorías, mantenemos nuestro veto, pero debo reconocer, y quiero destacarlo, que con una intensidad más matizada que, por ejemplo, la del veto a los presupuestos generales del Estado el pasado año. Porque, por una parte, la estructura del presupuesto —justo es reconocerlo— se aproxima más a lo que hemos venido defendiendo los años anteriores; se han mejorado aspectos del control; se han incrementado de manera sustancial algunos de los gastos cuyo incremento veníamos reclamando, por ejemplo, en materia de infraestructuras; y se pone el acento en los incrementos fuertes de la inversión pública. Pero, sin embargo, nos vemos en la necesidad de mantenerlo por los dos argumentos básicos que he pretendido desarrollar en nuestra propuesta de veto; por un lado, por esa falta de adecuación a los objetivos de política económica fundamentalmente en cuanto que no permiten, o constriñen excesivamente, la capacidad de crecimiento de la economía española sin producir tensiones inflacionarias, cosa que, a nuestro juicio, es posible, y por la insatisfacción que todavía nos queda en algunas cuestiones relativas a las prioridades del gasto y a los modos y formas de su gestión y control.

Nada más. Señor Presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Quetglás.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador García Sánchez.

El señor GARCIA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser breve para no repetir los argumentos profusamente expuestos por el señor Ministro en la presentación de estos presupuestos.

He seguido con atención el discurso del portavoz del CDS y no he oído ninguna referencia sobre los ingresos en estos presupuestos. Tampoco lo hicieron ustedes en el Congreso, me imagino, por lo tanto, que al menos con esa parte, con ese cincuenta por ciento —digámoslo así—, están ustedes totalmente de acuerdo. Con respecto a los gastos he oído alguna referencia, tampoco muchas. Agradezco sus palabras y veo que, en general, están de acuerdo con los presupuestos, pero creo entrever de su discurso que con lo que no están de acuerdo es con la política económica. Quizá sea éste el momento de expresar si están o no de acuerdo. Tienen todo el derecho del mundo, pero, insisto, no he oído muchas precisiones sobre el objeto del debate, que son los presupuestos para 1990.

Quiero decir a su señoría que he apreciado algunas contradicciones en su discurso. El cuerpo económico y social es algo así como el cuerpo humano; todo está interrelacionado, absolutamente interrelacionado, y lo que afecta a una parte acaba afectando a la otra. Y en el cuerpo económico y social ocurre lo mismo. Le digo esto, señoría, porque ustedes están continuamente diciendo que hay que aumentar y potenciar las medidas fiscales y, en definitiva, el ahorro; que hay que aumentar la inversión y la demanda de inversión para acercarnos a Europa y que, por lo tanto, hay que bajar las tasas de interés. Sepa su señoría que todas esas medidas que anunciaba desde esta tribuna significan, lisa y llanamente, aumentar la inflación. Si ustedes son partidarios de una política monetaria expansiva —usted ha criticado aquí las tasas altas de interés, lo hemos oído todos—, sepan también que ese aumento de la oferta monetaria y esa caída de las tasas de interés vía política monetaria va a generar una inflación que este país, sin duda, no puede aguantar.

Otra contradicción de su señoría: ha dicho que hay que aumentar los salarios porque no son el motivo de la inflación. Me imagino que está hablando de los salarios nominales, no de los reales. Para el Grupo Socialista es mucho más progresista, lo dije esta mañana y se ha dicho en los debates del Congreso, que haya aumentos de salarios reales por encima de la productividad, pero a niveles bajos. No es bueno, señoría, que se pidan desde aquí, y que esto se traslade al exterior, aumentos de salarios nominales por las bravas, trigo para todos; vamos a aumentar los salarios nominales un 20 por ciento, porque a lo mejor algún voto en todo este follón nos cae. Eso no es bueno, señorías; hay que ser plenamente responsables de que ese discurso es negativo en estos momentos. De lo que se trata es de que aumenten los salarios reales por encima de la productividad y siempre serán preferibles subidas de salarios nominales a niveles bajos que a niveles altos, referido a la evolución de los precios.

Por consiguiente, la consecuencia que yo saco de su discurso y de las medidas de política económica que usted recomendaba es que situaría a este país con un índice de

inflación muy por encima de los dígitos y en torno al 20 por ciento.

Señoría, el Gobierno jamás ha estimulado el consumo en detrimento del ahorro. Dígame usted cuándo, por favor. Y jamás ha hecho nada por atraer la inversión extranjera, es ella la que viene, porque tiene confianza, repito, en nuestro propio futuro, a veces mucho más del que tenemos nosotros mismos.

Respecto a la evolución de las macromagnitudes económicas, ha dicho algo que no se ajusta a la realidad, que estamos donde estábamos. ¿Con respecto a qué? Evidentemente, señoría, no me dirá usted que con respecto a la evolución de la inflación estamos en lo que estábamos en 1982. No creo que pueda admitir su señoría con rigor que el índice de inflación en estos momentos se aproxima al 20 por ciento, como nos ocurría entonces. No creo que se pueda acusar al Gobierno socialista de haber recogido una herencia económica desastrosa, que quizás —y quiero justificar la etapa anterior— era necesaria, debido a que, por las circunstancias políticas que concurrían en aquellos momentos, no adoptaron las medidas de política económica adecuadas. A lo mejor desde 1975 a 1982, en esos 7 años, imbuidos en ese desarrollo político que demandaba nuestro país, dejamos de lado el desarrollo económico. Pero sepan sus señorías que desde que el Gobierno socialista en 1982 toma las riendas de este país, lo primero que tiene que hacer es sanear la economía y eso, qué duda cabe, ha generado paro, pero desde 1986 en este país se están creando 1.500 empleos por día, España está a la cabeza de la Comunidad Económica Europea y del mundo entero en crecimiento del producto interior bruto.

En mi primera intervención les he expuesto la evolución comparativa de la inflación entre el Reino Unido y España y de la producción interior bruta. Partiendo de los mismos niveles en 1987 y 1988, el Reino Unido supera a España en inflación en estos momentos y podíamos decir que la producción interior está aumentando más que la de España y, consecuentemente, la necesaria demanda para financiarla obliga a que suba la inflación. Pero eso no es así. Están en el 2,3 de crecimiento del PIB, mientras que nosotros estamos en el 5 por ciento. España está duplicando el crecimiento de la producción de Europa, pero qué duda cabe que para que eso ocurra, para que ocurra lo que está ocurriendo ahora, hubo que tomar las medidas de política económica que hubo que tomar en 1984, 1985 y 1986, señorías. Creo que es de justicia y de un mínimo rigor técnico admitirlo en este foro.

Se dice que hay desviaciones en la inflación y en la evolución de los precios. Vamos a ver si tenemos en cuenta entre todos que en una economía libre de mercado los precios se determinan en el mercado de trabajo, por la libre actuación de la oferta y la demanda de mano de obra, haya competencia u oligopolio bilateral, como se quiera, pero lo determina el mercado. El Gobierno, como mucho, puede recomendar que haya aumentos de salarios reales, pero que no haya aumentos de salarios nominales excesivamente altos; para que aumente el salario real, no se necesita que el salario nominal suba excesivamente y que

perjudique, de esa manera, el desarrollo económico de nuestro país.

Sobre la inflación, aun con ser una variable que necesita mucho control, que requiere, como decíamos esta mañana, el apoyo de todo el mundo, está claro que se están consiguiendo ventajas. Está claro que se está luchando por reducir ese diferencial y que, con respecto de la Comunidad, con respecto de los países con los que vamos a competir en 1993, se está reduciendo, señorías, no al ritmo que quisiéramos, pero se está reduciendo. Me gustaría que se me dijera si en el pasado año, desviaciones aparte, no se ha reducido el diferencial con respecto a la Comunidad Económica Europea. Me gustaría que se me demostrara porque, hasta ahora, no se me ha demostrado.

Respecto a la política monetaria que también se apuntaba, quiero decir —y que quede muy claro— que las tasas de interés en España están subiendo porque se necesita controlar la demanda. Es imprescindible controlar la demanda para controlar la inflación. Y no por razones externas, para atraer las inversiones extranjeras, como he creído entender.

La relación entre ahorro y consumo siempre forma parte del discurso del Centro Democrático y Social. Están ustedes en su legítimo derecho. Pero sigo diciendo lo mismo: va a ser muy difícil que se altere la relación entre la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar con medidas estrictamente fiscales. Cuando la sociedad tiene cubiertos los gastos sociales más prioritarios, tiende a mantener un nivel de consumo en términos relativos, una propensión marginal a consumir, y difícilmente se altera esa relación. El ahorro de la sociedad es la suma, en definitiva, del ahorro de las economías domésticas, del ahorro de las empresas y del ahorro del sector público. Agradezco a su señoría que haya reconocido los esfuerzos en cuanto al ahorro del sector público y en cuanto a la reducción del déficit pero, evidentemente, por donde hay que potenciar el crecimiento del ahorro nacional es por el ahorro de las empresas. También por el ahorro de las familias. En algún momento posterior, y tiempo tendremos para ello, podremos discutir de cómo se puede alterar, o si es que se va a alterar, la relación entre la propensión marginal al consumo y la relación entre la propensión marginal al ahorro, porque va a ser tremendamente difícil. Y esto es así porque estamos hablando de una economía privada; esto no es una economía teledirigida y la soberanía del consumidor es quien decide, señorías.

Usted y su Grupo están en su perfecto derecho de interponer un veto a estos presupuestos. Pero, sinceramente, a tenor del discurso que yo he oído en esta tribuna —más bien referido a la política económica que a los presupuestos que nos ocupan—, no he visto argumentos ni por el lado de los ingresos, ni por el lado de los gastos; de todas formas, repito que ustedes están en su perfecto derecho —faltaría más— la mismo que el Grupo Socialista, que hace suyos esos presupuestos, está en su perfecto derecho de votar en consecuencia.

Sí quiero decirle, y termino con ello mi intervención, unas palabras a las que ya me referí en Comisión y que

se dijeron en el Congreso. No son mías, son del señor Lasuén y a lo mejor sirven para que sus señorías mediten la conveniencia de retirar el veto que han interpuesto. Decía el señor Lasuén: la mayoría de los criterios del CDS han sido asumidos este año a fin de garantizar el mejor control financiero de todo el sistema presupuestario. En este sentido, afirmo que el Presupuesto de este año es mucho mejor que el del anterior. En primer lugar, por admitir la limitación de los gastos ordinarios. En segundo lugar, por admitir la propuesta del CDS de limitar los gastos extraordinarios. En tercer lugar, por incidir en que el déficit se debe financiar con Deuda. No cabe duda, pues, que son mucho mejores.

Si, a pesar de ello, señorías, estos presupuestos, sin un solo comentario ni del lado de los ingresos ni del de los gastos, siguen mereciendo su oposición, ya, evidentemente, no sabemos qué es lo que tendrá que hacer el Gobierno socialista. Pero tengan en cuenta, al menos, que estos presupuestos se merecen algo más que aquello que de sus palabras se ha aducido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García.

Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Aguirre Barañano.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, para nuestro Grupo, y lo hemos reiterado en ocasiones anteriores, el debate de los presupuestos generales, al igual que ocurre en los estados que tienen una gran tradición democrática, debería ser el más importante, puesto que en el mismo se trata, basándose en la situación actual o de partida, de proyectar el futuro, con el fin de conseguir el mayor bienestar de los ciudadanos.

Para nosotros, la economía es esencialmente social. Desde esta perspectiva, entendemos que, para actuar con realismo, es preciso conocer la auténtica situación de la sociedad para la que se gobierna y legisla. Por tanto, la instrumentación de las medidas económicas no es, como pretenden hacernos creer determinadas declaraciones y modelos, el resultado automático de un programa de ordenador para detectar fallos y ajustes instantáneos, sino que se precisa conocer la realidad social del país, así como la compleja red de mecanismos que se entrecruzan entre los ciudadanos, sean estos trabajadores, empresarios, políticos, funcionarios, etcétera.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la creciente internacionalización de la economía de todos los estados, lo cual, unido a los grandes cambios políticos acaecidos recientemente en Europa, obliga a tener presente toda esta problemática que, querámoslo o no, está afectando de forma inmediata en todo lo concerniente a cesiones de soberanía y seguirá influyendo todavía más en un próximo futuro.

Dicho esto, y antes de hablar de los presupuestos generales del Estado para 1990, creemos que es necesario realizar un análisis de lo que ha ocurrido en 1989. En 1989 se han producido importantes desviaciones, medidas en

tasas de variaciones reales, respecto de los supuestos contenidos en el escenario macroeconómico previsto para ese año. Así, por ejemplo, el consumo privado ha subido más del 50 por ciento; el consumo público, el 30 por ciento —estoy hablando en números redondos— entre lo previsto y lo ejecutado; la formación bruta de capital también ha crecido sobre lo previsto en un 45 por ciento. Así, el conjunto de la demanda interna ha subido más del 50 por ciento entre lo realizado en 1989 y lo previsto.

Por el lado del comercio exterior, las exportaciones han bajado en un 13 por ciento y las importaciones han subido en más del 60 por ciento, con lo cual el saldo exterior neto, es decir, la aportación al crecimiento del producto interior bruto ha sido mucho más negativa de lo previsto, prácticamente del cien por cien, en saldo exterior.

Si analizamos otros factores, el PIB, precios de mercado, el aumento del PIB nominal, el saldo exterior por cuenta corriente, el del factor del PIB, vemos que todo esto ha tenido unos grandes porcentajes de desviación entre lo que se previó en 1989 y lo que realmente ha ocurrido.

A la vista de estas desviaciones, cabe hacernos las siguientes preguntas: ¿Tanto han influido en 1989 las condiciones externas sobre las que apenas tenemos margen de maniobra? ¿Tanto ha evolucionado la situación interna para que se hayan producido estos hechos?

En 1989 la situación internacional, y así se ha reconocido públicamente, nos ha sido favorable en términos generales, ya que el petróleo, las materias primas que tenemos que importar, repito que en términos generales, han mantenido una tendencia moderada respecto de 1988. También se ha constatado un aumento del comercio internacional y una mayor presencia del Estado en los organismos internacionales. Al mismo tiempo, hemos tenido una aceptable cosecha agrícola. Por tanto, en principio, no han sido los factores exógenos los causantes principales de las desviaciones a que antes nos hemos referido. Si esto es así, y siendo consecuentes, hay que reconocer que los motivos principales de las desviaciones entre los objetivos previstos y los alcanzados, habrán sido debidas a causas internas.

A partir de estas premisas y siguiendo este método de análisis, hemos de convenir que el cuadro macroeconómico para 1989 se hizo para otra sociedad, es decir, para una sociedad teórica, no para la realmente existente. O dicho de otra manera, la sociedad civil ha reaccionado en 1989 de forma no prevista, lo cual indica que existe una importante disociación entre dicha sociedad y lo que piensan sobre la misma quienes ostentan el poder político.

Nuestro Grupo mantiene el criterio de que hay mucho de esta disociación, porque, como bien ha dicho antes el portavoz socialista, la economía es como un cuerpo y lo que afecta a un miembro le afecta a todo él. Nosotros pensamos que hay mucho de esta disociación, ya que las desviaciones no se han producido por razones meramente coyunturales, sino por consideraciones estructurales que siguen afectando a nuestros planteamientos económicos y, por ende, a las consecuencias sociales derivadas de las mismas.

Los informes de la OCDE vienen a avalar nuestras afirmaciones al reiterar que el déficit español tiene carácter estructural en su mayor parte, lo que no ocurre en otros países industrializados de nuestro entorno, de modo que, aunque la economía esté en una senda de crecimiento, nosotros tendremos graves problemas para bajar nuestros déficit. Este déficit de elevado grado estructural es el reflejo de las rigideces de los mercados, de problemas institucionales que todavía tenemos pendientes de resolver y de deficientes asignaciones de recursos sostenidos desde y con cargo a las cuentas públicas.

Hecha esta introducción, que nuestro Grupo estimaba necesaria para centrar el debate —¿qué pasó en 1989? ¿por qué hemos tenido estas desviaciones?—, se nos presentan unos presupuestos para 1990 basados, a nuestro entender, en un cuadro macroeconómico que contiene sensibles diferencias en relación a 1989. Se admite, y estamos de acuerdo, que es conveniente moderar el crecimiento ya que tenemos importantes batallas sin ganar, como es, fundamentalmente, conseguir una inflación comparable a los países industrializados de nuestro entorno, así como establecer las medidas necesarias para alcanzar la competitividad de nuestros agentes económicos y sociales respecto a los Estados más avanzados dentro del contexto internacional al que pertenecemos. Esto, unido a una contención del gasto, tanto público como privado, posibilitará la corrección de nuestros importantes déficit, tanto en la previsión presupuestaria como por balanza de cuenta corriente.

Ahora bien, estos presupuestos que, por las razones electorales que todos sabemos, estamos debatiendo ahora, dejan como un proyecto separado todo lo relativo a los temas financieros y tributarios, según el Real-Decreto de 29 de diciembre de 1989. Señorías del Partido Socialista, ésta es una de las razones por las que vamos a presentar el veto, porque en 1990 se va a seguir aplicando la misma política en materia fiscal, cuando se sabe desde hace tiempo que era preciso modificar gran parte de nuestra legislación tributaria.

La sentencia del Tribunal Constitucional que declaró que algunos artículos en el Impuesto sobre la Renta no eran procedentes era de 20 de febrero de 1989. Pues bien, a partir de ese momento, había dos caminos. Uno, el que se siguió, hacer unas modificaciones presentando un proyecto de ley urgente; pero se pudo haber seguido otro, puesto que había variables. Concretamente, aquí hubo un debate el 26 de julio de 1989 —repito la fecha, 26 de julio de 1989, último debate de la anterior legislatura— donde se nos aseguró por activa y por pasiva que lo que estábamos debatiendo era exclusivamente para el Impuesto de la Renta y del Patrimonio de los años 1988 y 1989. Tengo a disposición de sus señorías las hojas en las que todos los portavoces socialistas garantizaron esto.

No sé si recordarán que nosotros no presentamos veto, precisamente porque dijimos que no queríamos entrar en ese juego, ya que si para entonces no estaba hecha la reforma fiscal y puesto que los presupuestos había que presentarlos el 30 de septiembre, esto necesariamente se tendría que prorrogar, con elecciones o sin ellas, durante el

año 1990. Por tanto, el debate del 26 de julio de 1989 no era sólo para prorrogar los presupuestos de 1988 y de 1989 sino también para lo que se está dando ahora, para prorrogar toda la legislación tributaria para 1990.

Se nos dice que esto crea una estabilidad normativa y que es bueno. Será bueno si esta estabilidad normativa es la mejor, es decir, si las leyes fiscales que tenemos ahora no hubiera que cambiarlas, pero existe incluso un libro blanco de todo lo que hay que cambiar en el tema fiscal.

Consecuentemente, entendemos que en esta importante área, por todo lo que subyace de aplicación de principios de justicia y equidad, se ha perdido todo el año 1990, para haber solucionado de forma progresiva y real y, a ser posible por consenso, esto que afecta tan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Los ciudadanos no entienden mucho de propensión marginal al consumo ni de propensión marginal al ahorro, pero sí entienden que se les cambia el sistema fiscal, lo entienden bastante bien, sobre todo cuando les cambian determinados preceptos del Impuesto sobre la Renta.

Creemos que, en la situación económica actual —y sigo con el análisis que hacía esta mañana el señor Ministro cuando nos decía que no debemos perder tiempo, con lo que estamos absolutamente de acuerdo— no es admisible que se haya desaprovechado el año 1990, puesto que a nuestras dificultades internas —y me refiero exclusivamente al tema fiscal— hay que añadir que, según recientes artículos publicados en «The Financial Times» y en «The Economist», no sé si con razón o no, se dice lo siguiente: Los mejores momentos para la economía española, al menos a corto plazo, ya han pasado. De forma que este Estado, dentro de los que componen la Comunidad Económica Europea, es de los que pueden tener peores condiciones para afrontar el reto del Mercado Unico para 1993. Sobre este tema hay bastantes artículos escritos. Tendrán razón o no la tendrán, pero es algo que se está publicando. Seguramente, la reciente llamada del Gobierno para conseguir un consenso en orden a lograr unas condiciones óptimas que permitan obtener la competitividad de la economía para 1993 algo tendrá que ver con todo lo que estamos hablando.

Nosotros —y esperamos que todas sus señorías coincidirán en ello— entendemos que el consenso debe producirse en una doble dirección y que todas las partes implicadas tendrán que realizar esfuerzos para aproximar posiciones, ya que nos estamos jugando nuestro próximo futuro y, a nuestro entender, el de varias generaciones.

Con la exposición y desarrollo de la argumentación anterior creemos totalmente razonada y justificada la presentación de este veto. Reconocemos las mejoras que ha habido y no nos duelen prendas, pero, precisamente como no estamos en situación de perder tiempo, si estos presupuestos hubieran estado acompañados de las reformas fiscales pertinentes —que fue en lo que se quedó el 26 de julio de 1989— nosotros hubiéramos adoptado otra posición.

Sabemos que, habida cuenta la correlación de fuerzas existentes en esta Cámara, la aprobación de este veto será

inviabile. Sin embargo —y es algo que hemos hecho en otras ocasiones—, deseamos reforzar nuestros planteamientos con una serie de reflexiones fundamentalmente dirigidas al Gobierno y al Partido que lo sustenta, puesto que en temas económicos y sociales nadie tiene el privilegio de la verdad absoluta. Con este espíritu de colaboración, deseamos desarrollar diversas cuestiones de índole interna, aspectos que, a nuestro entender, es preciso considerar.

Volvemos a insistir en que, para nosotros, la economía es algo eminentemente social; la gente entiende mucho lo que quiere entender en las declaraciones. Entendemos que es impropio que por parte de las autoridades económicas se consideren positivos distintos topes salariales según que la cuestión se refiera a las administraciones públicas o a los entes privados.

La subida salarial para el sector público en 1990 ha sido del seis por ciento. Por otro lado, se transmite a la sociedad que todo convenio en el sector privado negociado entre patronales y sindicatos que supere el siete por ciento puede poner en peligro la inflación para 1990. En consecuencia, preguntamos, puesto que los funcionarios no han tenido necesariamente que pasar por una Facultad de Económicas: ¿no es lógico que exista una sensación de frustración por parte del colectivo público ya que se reconoce implícitamente que también ellos podrían haber alcanzado el siete por ciento, máxime cuando casi todos los convenios privados se han cerrado por encima de ese porcentaje?

Entendemos que también es conveniente que las autoridades económicas y monetarias mantengan una unidad de criterio en relación a las causas de los importantes incrementos de inflación habidos en los últimos años. No se puede estar diciendo unos meses que la culpa es del excedente empresarial, otras veces que de los salarios y otras que la culpa no es de nadie; pongámonos de acuerdo, porque esto sí que es importante, para que el ciudadano llegue a comprender de qué estamos hablando.

Creemos absolutamente imprescindible la existencia de varios ejes de comunicación, y esto hace referencia a la competitividad. Nosotros propugnamos la existencia de varios ejes relacionados con Europa, que estén interrelacionados y que puedan ser competitivos en el orden internacional. A tal fin, estimamos que hay que potenciar sustancialmente las inversiones en infraestructuras en la línea de Irún, cornisa cantábrica, Asturias, Galicia, Castilla y León, hasta unirse con Portugal. No sé si la conexión con Portugal pensarán hacerla por otro lado, pero el sentido común y la lógica nos dicen que, para llegar a París, Irún sería una vía bastante adecuada. Nos parece que si esta Cámara es de verdad de representación territorial, éste y otros asuntos podrán encontrar el apoyo de los Senadores integrantes de los diferentes grupos políticos.

Antes se decía que había una discriminación tomando como centro Madrid entre el norte y el sur, que los del norte éramos los ricos y los del sur los pobres. Pues bien, ahora parece ser que, tomando una diagonal desde el este y cruzando hacia el oeste, hay una parte a la que se van to-

das las inversiones y el resto se queda con muy pocas inversiones. En este sentido, como Senador vasco, tengo que declarar la insuficiencia de las inversiones previstas, y no lo hago por puro chauvinismo, podríamos demostrar cómo estas inversiones redundarían en beneficio de toda la comunidad.

Me explico. Nosotros queremos inversiones en el transporte ferroviario, aeropuertos y puertos. El primer puerto autónomo por movimiento de mercancías es el puerto de Bilbao, con 30 millones de toneladas. Al ser puerto autónomo no está contemplado en los presupuestos. Pues bien, el último acuerdo que hay es que la Administración central financiará un tercio y que para los dos tercios restantes se las componga el puerto autónomo de Bilbao, cuando el planteamiento inicial era un 50 por ciento cada Administración. Esto supone, ni más ni menos, que el puerto de Bilbao tiene que endeudarse en una gran cantidad o, para no endeudarse, va a tener que subir las tarifas, llámense G1, G2, G3, las de todos los movimientos portuarios, lo cual afectará a las exportaciones e importaciones. El puerto de Pasajes, como sus señorías saben, hoy día es uno de los principales exportadores de automóviles. Respecto a nuestros aeropuertos, estamos un año más pidiendo que, de una vez por todas, se terminen las obras necesarias y suficientes que hay que hacer para que no estemos en una situación a veces tercermundista.

El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, le ruego que vaya concluyendo.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: En cuanto al tema ferroviario, yo quisiera que los socialistas dijeran en Madrid lo mismo que dicen en Euskadi, es decir, que ese tema se va a resolver y que la entrada del tren de alta velocidad también se va a hacer por Euskadi, por Irún. Para unir las tres capitales vascas lo que hay que hacer es lo que se llama la «Y» famosa vasca. Nosotros hemos presentado alternativas: o bien que se haga la obra por la Administración central —aquí siempre tendremos el caballo de batalla de decidir primero cuál es el ancho de la vía, que, lógicamente, debe ser el europeo— o, si no, las obras se podrían acometer localmente y habría fórmulas con la Administración central para llegar a un acuerdo.

Hay otro aspecto en el que me gustaría entrar muy rápidamente, señor Presidente, si me lo permite. Queremos hacer al Gobierno un ruego: que el proyecto de presupuestos sea precisamente esto, una ley de presupuestos del Estado y no un instrumento para modificar cuantas leyes estime oportuno el Ministerio de Economía y Hacienda. A título meramente enunciativo, en este proyecto se modifican las siguientes leyes: Ley de Contratos del Estado, texto refundido de la Ley de Clases Pasivas, Ley General Presupuestaria, Ley del Mercado de Valores, Ley General Tributaria, Ley del Patrimonio del Estado, Ley de Entidades Estatales Autónomas, Ley para la Exploración e Investigación de Explotación de Hidrocarburos, Ley de Auditoría, etcétera.

Además, y esto lo consideramos muy grave, algunas modificaciones pueden entrar en colisión con algunas

competencias que son exclusivas en los estatutos de autonomía de algunas comunidades autónomas, tal como tendremos ocasión de exponer al debatir las enmiendas parciales.

Finalmente, señor Ministro, señorías, solicitamos que exista un análisis de por qué tenemos todavía determinados gastos militares si se está cambiando toda la estructura militar de Europa; por qué existen figuras que todos estábamos de acuerdo hace diez años que no deberían existir, como la de los gobernadores civiles.

En definitiva, señoría, nosotros lo que pedimos es algo que dijo Samuelson hace mucho tiempo y es que los administrados conozcan y entiendan los presupuestos del Estado igual que cada persona, cada ciudadano entiende sus presupuestos individuales y familiares. Para ello, entendemos que es preciso acercarse a la Administración al ciudadano, y curiosamente con las medidas fiscales que proponemos —de los que no se ha aprobado ninguna y algunas me parece que están en el libro blanco, como que se suba el tope hasta un millón de pesetas, lo cual al año que viene va a ser muy importante pero este año no lo es— creo que podemos dar ya un ejemplo de acercamiento en determinadas cosas. Vuelvo a repetir que nosotros estamos en la línea de todo lo que sea colaboración, todo lo que sea consenso, pero bien entendido que se trata de dos direcciones.

Por todas estas razones, vamos a mantener este veto en la confianza de que esto pueda ser tenido en cuenta en próximas ocasiones.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aguirre.

Para un turno en contra, tiene la palabra el señor García Sánchez.

El señor GARCIA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Socialista, aunque sea brevemente, va a responder a todos los portavoces de los Grupos parlamentarios que han interpuesto vetos.

Al portavoz del Grupo Nacionalista Vasco quiero decirle que en el último debate presupuestario en esta Cámara, el 19 de diciembre de 1988, dijo que su Grupo no era partidario de poner vetos todos los años, sino más bien un año sí y otro no. Ya veo que lo puso usted el año pasado y lo pone también este; dicho de otra manera, ustedes ya no giran a plazos, giran más bien al contado; desde luego, lo asumimos porque están en su perfecto derecho.

Sí quiero decirle a vuelapluma algo relativo al presupuesto de Defensa. Si mis datos no me fallan, creo que el presupuesto de Defensa es una de las secciones que menos aumenta en estos presupuestos, pero su señoría comprenderá que o dejamos que determinados equipos se estropeen o hay que tener un mínimo de mantenimiento. Creo que no se puede acusar al Gobierno socialista de ser excesivamente proclive a aumentar los gastos de Defensa; antes bien yo creo que mantiene la postura contraria, por lo menos en estos presupuestos, señoría, que es a los que nos debemos de referir.

Las infraestructuras deben aumentar. Yo he dicho ya que las inversiones aumentan un 30 por ciento y las infraestructuras un 28 por ciento sobre presupuesto liquidado de 1989. Ha hecho referencia su señoría a determinadas inversiones que se necesitan en el País Vasco. También se necesitan en el País Vasco otro tipo de inversiones, por ejemplo, para solucionar el problema de la sequía. Este tipo de competencias el Grupo Nacionalista Vasco no las ha aceptado, a pesar de que tienen toda la situación fiscal perfectamente estructurada para poder acometerlas. Por consiguiente, en el abastecimiento y saneamiento de aguas el problema está en que el País Vasco es una de las pocas comunidades que no han aceptado estas competencias y fiscalmente, repito, tienen plenas posibilidades para ello.

Por supuesto que la política de infraestructuras se contempla en estos presupuestos y que el esfuerzo del Gobierno socialista es extraordinario. Voy a leerles algunos datos. En 1990, el gasto total en la política de infraestructura representa un incremento porcentual de 28,6 puntos sobre 1989, exactamente 790.000 millones de pesetas, que supera ampliamente el presupuesto del año 1982. Fíjense ustedes, en este país, en 1982, sólo se gastaba en infraestructuras 180.000 millones de pesetas y en carreteras —a las que también se ha referido su señoría— 61 millones. En los presupuestos de 1990 están consignados 355.000 millones, casi seis veces más. ¿Cómo se puede negar la evidencia de ese crecimiento espectacular en la política de infraestructuras en general y de carreteras en particular? Lo mismo se puede decir de ferrocarriles, para lo que se gastaba en 1982, 39.000 millones; en 1990, 140.000 millones. El esfuerzo es considerable, siempre teniendo en cuenta de dónde partíamos en 1986.

Coincido plenamente con su señoría en los objetivos de política económica que expuso brevemente en el intermedio de su discurso. Hay que acercarnos a Europa, hay que reducir las diferencias en determinadas macromagnitudes con respecto a Europa, como puede ser la renta per cápita, la inflación... Le agradezco a usted sus palabras, ése es el camino que hay que seguir, pero no eche usted la culpa al Gobierno socialista si el mercado de la mano de obra no sigue sus recomendaciones; no le vaya a echar usted la culpa al Gobierno socialista, en una economía libre de mercado, si se negocian salarios por encima del ocho o del nueve por ciento, si se tienen en cuenta subidas nominales de salarios y no subidas reales de esos mismos salarios, que es lo que le importa a la clase trabajadora. No creo que en eso el Gobierno socialista tenga ninguna culpa.

Coincido también con usted en una afirmación que ha realizado: nos estamos jugando el futuro. Por supuesto, nos estamos jugando el futuro nuestro y el de varias generaciones. Este tren que está pasando ahora es de extraordinaria importancia y es de extraordinaria importancia que todo el mundo participe en ese compromiso de cara a 1993, que nos debe obligar a todos, a todas las fuerzas sociales, a todas las fuerzas políticas; se requiere un esfuerzo importante; hay que seguir trabajando en la misma dirección, pero, señorías, no se puede negar la evidencia de los resultados conseguidos, están ahí.

Asimismo, ha hecho referencia a los ingresos y parece ser que uno de los argumentos fundamentales para su veto a estos presupuestos. Este portavoz que les habla cree sinceramente que el sistema fiscal funciona razonablemente bien, ahí está anunciada ya la reforma del IRPF, que no lo es todo, un tanto por ciento de los ingresos; en cuanto al IVA, creo que funciona muy bien y el Impuesto sobre Sociedades, bastante bien. Yo pienso que no es como acaba de apuntar el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco.

Por último, quiero decir algo que me parece tremendamente injusto. Cuando se trata de analizar los avances que se están consiguiendo, siempre se dice que son factores externos: el empujón de la demanda externa, el crecimiento económico del exterior —siempre menor que el de nuestro país, por cierto—, e incluso se ha hablado de la caída del precio del petróleo. Eso no es cierto. El precio del petróleo subió un 20 por ciento a lo largo del año 1989.

Y ha hecho referencia su señoría al informe económico de la OCDE; me imagino que se referirá al informe económico de la OCDE sobre la economía de 1988, porque, salvo que su señoría lo haya recibido, el último informe económico de la OCDE, por lo menos en esta Cámara, todavía no se ha recibido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador Pujana, para defender su propuesta de veto.

El señor PUJANA ARZA: Gracias, señor Presidente. Desde el propio escaño.

Estamos muy acostumbrados a oír del Gobierno y del Partido que le sustenta ofertas de diálogo, de concertación, de consenso, de participación, incluso, de corresponsabilidad, y me voy a remitir a las pruebas: cinco vetos; 1.288 enmiendas; 73 enmiendas aceptadas en Comisión, que corresponden exclusivamente al Grupo Socialista.

Señor Presidente, no quiero entrar en este diálogo de sordos. Por tanto, doy por defendido el veto en los términos que lo hicimos en el Congreso de los Diputados y en la Comisión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para un turno en contra, tiene la palabra el señor García Sánchez.

El señor GARCÍA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente. Simplemente quería decir que en ese juego libre democrático cada uno estamos haciendo nuestro propio trabajo como mejor sabemos, los grupos de la oposición intentando poner los vetos o enmiendas que estiman convenientes de acuerdo con su propia ideología política y el Grupo que sustenta al Gobierno, como ha apuntado su señoría, defendiendo unos presupuestos que nos parecen muy dignos y muy extraordinarios. Por consiguiente, no comparto en absoluto la valoración que ha hecho del tratamiento general y del debate presupuestario que se está

siguiendo, ya que el esfuerzo realizado no sólo abarca a los que estamos en la Cámara, sino, incluso, a todos los funcionarios. Por otra parte, las enmiendas que se pueden o no aceptar o las transacciones que se puedan o no producir, se verán, en todo caso, a lo largo de este debate.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García. ¿Turno de portavoces? Comenzamos por el Grupo parlamentario Mixto. El Senador Pujana tiene la palabra.

El señor PUJANA ARZA: Gracias, señor Presidente. Hace bien el portavoz socialista en defender a su Gobierno, pero yo me remito exclusivamente a las pruebas y las pruebas hasta el momento están ahí.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Grupo parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. (Pausa.) El Senador Aguirre tiene la palabra.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Gracias, señor Presidente.

No quiero entrar ya en más polémicas, pero, desde luego, Senador García, con todo cariño, no mezcle las carreteras, que tenemos transferidas hace años —no hay problema, usted puede meter en el presupuesto todo lo que quiera, nosotros tenemos transferidas las carreteras y nunca les hemos pedido una peseta—, con otros temas. La discusión es política. A ver si de una vez por todas, nos enteramos de que, seamos economistas o médicos, aquí estamos como representantes de partidos políticos. El estatuto para nosotros fue un pacto político; cuando no aceptamos algo es por las condiciones en que viene; cuando se habla de corresponsabilidad y de colaboración estamos de acuerdo.

Hubo hace años una persona, para nosotros muy respetada, que dijo que el que esté exento tire la primera piedra. No sé si ustedes la podrán tirar. No vengán diciendo que el problema de la sequía se produce porque nosotros no hemos querido resolverlo, porque esto es para venderlo en la campaña electoral. No me digan que es porque no hemos querido aceptar una transferencia y por eso no lo hemos solucionado. Por favor, seamos serios y no mezclen temas que ya están transferidos hace mucho tiempo.

Respecto al tema de la OCDE, no sé si tienen el informe o no, pero eso es su problema, no el mío. Lo que sí digo es que en el plan macroeconómico para España de 1988-92, de la OCDE se decía una serie de cosas acerca de los problemas que tenía la economía española y, entre ellos, que el déficit —que no es culpa del Gobierno Socialista, que quede claro y así nadie se siente ofendido— es un problema estructural, porque es bastante lógico que, después de 40 años de dictadura, un país tenga problemas estructurales y muy grandes.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aguirre.

Grupo parlamentario del Centro Democrático y Social. (Pausa.) El Senador Quetglás tiene la palabra.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias señor Presidente. El primer reproche que nos ha dirigido el portavoz del Grupo Socialista es que no estamos discutiendo los presupuestos sino la política económica. Y la verdad es que es un reproche que nos deja perplejos. ¿Cuándo vamos a discutir de política económica si no es en el debate de presupuestos? ¿O es que los presupuestos generales del Estado están desconectados de la política económica del Gobierno? ¿O es que los presupuestos generales del Estado no son el instrumento fundamental y básico de la política económica del Gobierno? Discutir la política económica del Gobierno cuando se discuten los presupuestos es absolutamente obligado y creo que una referencia inevitable. Por tanto, discutimos de política económica y de la política económica de la que los presupuestos son reflejo o, por lo menos, eso esperamos.

Usted nos dice que nuestra política económica expansiva, la política económica alternativa que estamos defendiendo, significaría un recrudescimiento, en cifras impresionantes —usted ya ha hablado de los dos dígitos—, de la inflación. Si me permite —sé que éste no es foro para hacer discusiones académicas—, le diré que creo que se ha hecho un pequeño lío, porque usted ha hablado de incrementos de salario por encima de la productividad y eso —el señor Ministro lo explicará con mucha mayor seguridad y brillantez que un servidor—, los incrementos de salario por encima de la productividad, sí que es inflacionario. Pero no era ésa nuestra pretensión. Nosotros hemos hablado de participaciones en los incrementos de productividad por parte de los salarios superiores a las existentes, entre otras cosas porque la productividad ha subido considerablemente por encima de los salarios reales —no los nominales—, y ésa ha sido nuestra argumentación. Creo que se ha liado un poco; quizá, porque la falta de tiempo no nos ha permitido extendernos. Lo que es verdaderamente inflacionario o, por lo menos, va acompañado por la inflación, es la importación masiva de capitales. Eso es inflacionario, señoría. Si usted elabora y ejecuta una política donde los salarios suben por debajo de los incrementos de productividad pero participando más sobre ella, si usted estimula el ahorro y si usted estimula los incrementos de productividad y se hace una política económica en aquellos sectores donde los incrementos de productividad son o pueden ser más espectaculares —y hay que destacar aquí que, naturalmente, en una economía fuertemente terciarizada, como es la española en el sector servicios, los incrementos de productividad no son posibles y la flexibilidad del traslado de las tensiones inflacionistas es muchísimo más fácil porque los comportamientos son más elásticos—, entonces, lógicamente, usted conseguirá una política expansiva, que no habrá de ser necesariamente una política inflacionaria.

Para resumir, señoría, con su política sí que habría un incremento de inflación al incrementar los salarios, pero no con la política alternativa que nosotros estamos proponiendo. Esa es la diferencia fundamental, porque nues-

tra subida de salarios no está desconectada de la relación de las posibilidades expansivas de la economía española y el control de otras variables o del resto de las mismas. Como usted ha dicho, la economía está absolutamente interrelacionada y una concepción de la política económica también. Por tanto, no es lícito descontextualizar una medida de política económica o, como nosotros le proponemos, el incremento de salarios, del resto del cuadro que se ofrece.

Y le aclararé que lo que pretendía explicar en mi anterior intervención era que estamos donde estábamos, que habíamos conseguido llegar al punto de partida. Y me refería, señoría, a dos variables, que, además, son dos variables que repercuten de una manera directísima en la percepción y la sensibilidad de los ciudadanos. Una es la renta per cápita, es decir, que su nivel de bienestar es el mismo que era hace quince años en relación a la media europea, el 75 por ciento de la renta per cápita europea, y, otra, y la variable empleo, porque hemos llegado al nivel de desempleo del año 1982. Estas son las dos variables a las cuales he hecho referencia y no a otras. Y en ésas lo que hemos conseguido es volver a llegar al punto de partida.

En cuanto a su explicación sobre lo que son las profesiones marginales al consumo y profesiones marginales al ahorro, su argumento —para comprimirlo muchísimo— es: los ciudadanos sienten que es tal el nivel de bienestar alcanzado con la política económica socialista, que se lanzan desaforados al consumo; no es necesario ahorrar, ya que la política de bienestar de nuestro Gobierno es suficientemente enriquecedora. No le voy a decir que vivimos en países distintos porque sería un poco exagerado, pero parece que usted vive en un telediario; si usted cree que los ciudadanos españoles no ahorran por el nivel existente de prestación de servicios en materia de sanidad, de seguridad social, de pensiones; si usted cree que están satisfechos con los servicios de cobertura de desempleo, y que eso es lo que les permite tener un comportamiento bastante alegre en materia de consumo, creo que está haciendo un flaco favor al rigor en el análisis de los presupuestos y, por supuesto, un flaco favor a las preocupaciones de la sociedad española.

La satisfacción que mostraba nuestro portavoz en relación con algunas mejoras introducidas en materia de control es, señoría, ni más ni menos, lo que nos ha hecho retirar nuestro veto al Título I de la ley, y está retirado; es decir, hemos recogido esa satisfacción que sentía el señor Lasuén para retirar el veto al Título I de la Ley, pero no a su totalidad.

También voy a señalar muy brevemente —porque ya se ha encendido la luz roja— que nosotros hemos hablado de insuficiencias en materia de gastos, no hemos entrado a detallar cuestiones a las que vamos a hacer continuas referencias en la discusión por secciones; pero, insisto, hemos hablado de nuestra insatisfacción en materia de infraestructura en transportes y comunicaciones, en materia de sanidad y de comercio exterior, que son cuestiones básicas que, a nuestro juicio, no están suficientemente bien tratadas en este presupuesto.

Nos ha vuelto a ofrecer —una vez más— en nombre de su Grupo, como ya lo hizo con anterioridad el señor Ministro en nombre del Gobierno, un pacto de competitividad. Debo decirle, en nombre de mi Grupo —tal como lo hemos hecho en otras ocasiones—, que estamos absolutamente de acuerdo con eso, pero le reitero el argumento del Senador Aguirre: un pacto de competitividad sobre la base del consenso y del entendimiento no puede partir, como un contrato de adhesión, del argumento de que no hay otra política económica posible que la de ustedes. Por lo menos, concédannos el beneficio de la duda; por lo menos, consideren ustedes la posibilidad de que tal vez no estén en posesión de la verdad absoluta y sentémonos a hablar para considerar posibles alternativas.

Tal como ya se les ha recriminado en las pocas horas que llevamos de debate, no aceptando ninguna de las enmiendas de la oposición no es como se contribuye a crear un clima de consenso y de entendimiento. No es así. En el Senado ustedes no han aceptado ninguna de las enmiendas de los grupos de la oposición y quiero anunciar en este turno de portavoces que, entendiendo que al votar los vetos estamos votando una única opción, que es la de devolución del presupuesto al Gobierno, nuestro Grupo va a apoyar los vetos de los demás grupos en el entendido de que posiblemente no coincida en algunas de las líneas argumentales que nosotros defendemos e incluso alguna puede ser contradictoria, pero pensamos —y creo que es lo correcto— que votamos la devolución al Gobierno única y exclusivamente y no los argumentos, sobre los cuales sería prolijo ahora manifestar los matices. Por lo tanto, en todas y cada una de las votaciones —si es que, como parece, va a haber una por cada veto— vamos a votar la devolución al Gobierno de los presupuestos generales del Estado para 1990.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Quetglas.

Corresponde el turno de portavoces al Grupo de Convergència i Unió. Tiene la palabra el Senador Cardona, por tiempo de quince minutos.

El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señorías, querría contestar en primer lugar a algunas de las réplicas que ha hecho el Senador García en cuanto a las inversiones de Cataluña y los presupuestos expansivos de la Generalitat. Naturalmente, lo son; quizá los motivos de las inversiones realizadas en Cataluña en esos presupuestos y la causa de que éstos sean expansivos sean los mismos: los Juegos Olímpicos de Barcelona. Además, existe por parte de los presupuestos de la Generalitat la voluntad de que no se cree un desequilibrio territorial.

En cuanto a los presupuestos de sanidad y asuntos sociales, he dicho que nos parecen insuficientes, como muy probablemente le parecerán al Ministro de turno de Sanidad y Asuntos Sociales, pero he puesto más el acento en otras cuestiones más bien de distribución, como, por ejemplo, en que en los presupuestos de sanidad el desvío presupuestario crea problemas en las comunidades autó-

nomas que tienen transferida esa materia. En cuanto a los servicios sociales, he hablado más bien de los presupuestos centralizados del INSERSO.

Yo no he dicho que el Gobierno socialista ha propuesto medidas que favorecen el consumo. En todo caso, lo que pasa es que al faltar medidas eficaces para incentivar el ahorro, la sociedad ahorra menos o consume más. Usted manifiesta textualmente: No voy a ocultar que hay una balanza comercial negativa. Dejémosnos de discusiones. Se trata de intentar remediarlo en lo posible. Quien tiene la obligación es el Gobierno. Ustedes sustentan al Gobierno, pero sepan que el señor Ministro hablaba esta mañana, y dedicaba bastantes minutos de su discurso al asunto, del consenso. En este caso, estamos dispuestos a buscar la salida para la economía española de cara al reto del 1 de enero de 1993. Nos lo jugamos todo y en ese pacto de la competitividad tenemos que estar todos unidos, porque a todos va a salpicar el asunto si no lo sabemos resolver.

Cada vez que hacemos referencia a la situación económica de nuestro país, nos vemos obligados a recordar que puede ser absolutamente intrascendente haber mejorado un indicativo económico determinado si el diferencial con el resto de los países de la Comunidad Económica Europea nos sigue siendo desfavorable, en mayor o menor medida. Aquí está la discusión. Este análisis comparativo hay que hacerlo en el ámbito de la competitividad.

Conscientes de que es un vector resultante de nuestra economía, hay que señalar la baja competitividad de la misma. Estamos en la cola, juntamente con Turquía y Portugal, de los países de la OCDE, según informes publicados por el foro económico internacional. De hecho, el motivo —o por lo menos una de las razones— de la disolución de las Cortes fue la necesidad de afrontar profundas reformas de nuestra economía para adaptarse y superar los retos de la competitividad europea, de cara a 1993. Por tanto, la competitividad era y es la palabra mágica. Lo cierto es que de ella dependerá buena parte del futuro de nuestra sociedad. Es lógico que el objetivo sea conseguir entre todos un grado de competitividad cuanto más alto mejor. ¿Qué contemplan estos Presupuestos por esta tan deseada competitividad? Lo cierto es que entendemos que poco, porque resultan continuistas y sin cambios significativos en relación con la política económica que se ha llevado a término hasta ahora. ¿Era ésta la respuesta que justificaba la anticipación de las elecciones? Nosotros creemos que no. Es cierto que nuestra economía crece, ya lo hemos reconocido, pero también lo es que presenta importantes desequilibrios y muy superiores a los de las demás economías europeas.

Hemos conseguido importantes objetivos, ya lo hemos dicho, pero no es suficiente para contrarrestar los efectos negativos, y más aún, cuando la internacionalización de la economía nos impone un esfuerzo complementario para superar el reto de la competitividad. Lo cierto es que estos presupuestos no aportan novedad para rectificar la tendencia inflacionista que desde hace años padece nuestro país y continúa contemplando la política monetaria como única solución o como solución del incremento de

esta magnitud. La política monetaria restrictiva produce, a su vez, un diferencial entre 6 y 8 puntos de los intereses y una caída notable del ahorro, que como hemos dicho —y seguramente me replicará en este sentido—, ha pasado del 12 por ciento del Producto Interior Bruto en 1980 al 6 por ciento en 1988.

¿Incorpora el proyecto de presupuestos alguna propuesta concreta para reducir el déficit exterior, hoy por encima de los tres billones y medio de pesetas? Creemos que todo lo contrario. Si el plan de fomento para la exportación señalaba la necesidad de destinar a la promoción de las exportaciones el 1 por ciento de éstas, para el ejercicio de 1990 se destina el 0,5 por ciento de lo que se prevé exportar, y ello teniendo en cuenta que el mantenimiento de una posición fuerte de la pesetas dificulta aún más la capacidad exportadora del Estado español.

¿Dónde está la política que permita actuar con eficacia para equiparar la tasa de parados española con la que tiene la Comunidad Europea? ¿Para cuándo la reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social? Un estudio del Director General de Planificación demuestra que una disminución de un 3 por ciento de las cotizaciones de la Seguridad Social repercutiría en un aumento de la ocupación de un 2,7 por ciento. ¿Por qué no se hace ya?

El Presidente del Gobierno, refiriéndose a la financiación de la Seguridad Social, manifestó ya hace años —y lo hemos recordado en alguna ocasión desde esta tribuna—, lo siguiente: La financiación de la Seguridad Social en España es un impuesto contra el empleo. Ello es tan cierto como que las cotizaciones de la Seguridad Social gravitan sobre la competitividad de nuestras empresas, ya que nuestro sistema de cuotas está muy por encima del promedio de los países de la OCDE.

Señor Presidente, señorías, los presupuestos son el momento preciso y adecuado para introducir las variaciones necesarias en la política económica, y es evidente, desde nuestro punto de vista, que este proyecto para 1990 no va en esta dirección. Por ello, hemos de mantener el veto.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cardona.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortí Bordás.

El señor ORTI BORDAS: Señor Presidente, señor Ministro, señorías, las exposiciones que desde el primer defensor de los vetos de esta tarde hasta el último se han realizado en esta tribuna no han hecho más que confirmar la convicción de mi grupo parlamentario de que lo que demanda en estos momentos el interés público, en la materia que estamos debatiendo, es precisamente solicitar la devolución del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 1990. En conclusión, reiteramos lo ya afirmado esta mañana: el Grupo Popular votará favorablemente a todas y a cada una de las propuestas de veto que han sido formuladas por el resto de los grupos parlamentarios.

Dicho esto, tengo que agregar, por precisión, que esta mañana, a un discurso competente, comedido, optimista,

sí, del que se puede discrepar, pero en todo caso fundado, del titular del Departamento, ha seguido un turno en contra que, en sus líneas medulares, se ha venido repitiendo a través del debate que hemos sostenido esta tarde y que tengo que confesar que me ha sorprendido. Y me ha sorprendido, porque se ha producido aquí, quizás sin apenas percatarnos, un salto cualitativo en lo que podríamos denominar dialéctica parlamentaria. Hasta ahora, ha sido bastante frecuente que unos u otros —y yo el primero— hayamos utilizado en muchas sesiones de esta Cámara, al dirigirnos unos a otros, el método «Ollendorf», que es un método confuso, pero que, precisamente por su confusión, en determinados momentos parlamentarios resulta hasta divertido. Sin embargo, hoy, en vez de utilizarse en turno en contra el método «Ollendorf», se ha utilizado un método de neta raíz orwelliana; un método que ha hecho abstracción de la realidad. Y esto es realmente notable, el abstraerse de la realidad. Yo entiendo, señorías, que no se puede acusar legítimamente a ningún portavoz de esta Cámara de haber errado, en determinadas previsiones, en debates anteriores de presupuestos. Sobre todo, cuando se está militando en las filas que soportan a un Gobierno que, ejercicio tras ejercicio, ha errado sistemáticamente las previsiones del cuadro macroeconómico. Alguna ha merecido el que yo me detuviera esta mañana en mi análisis; por ejemplo, la relativa a la inflación, que dobló, en el ejercicio pasado, la previsión efectuada por un gabinete que cuenta con infinitos más medios que las minorías de esta Cámara o que los Senadores de esta Cámara, que, por no disponer todavía, no disponen ni tan siquiera de despacho. Y un Departamento y un Gobierno, y un partido que apoya y sostiene a ese Departamento y a ese Gobierno, tienen infinitos más medios, entre otros la función pública, para aquilatar mejor en sus previsiones. De forma que yo rogaría que no se hicieran imputaciones a Senadores o a grupos por haber errado en alguna apreciación, cuando —insisto— sistemáticamente el Gobierno se viene equivocando en las previsiones que efectúa en su cuadro macroeconómico. Dicho esto, y si me lo permiten sus señorías, tendré que añadir que el Senador Cardona tiene toda la razón cuando matiza lo que él ha querido decir respecto del consumo.

Es verdad, no se trata de que el Gobierno esté fomentado deliberada y directamente el consumo, se trata de que al penalizar el ahorro de forma indirecta y como efecto inducido está favoreciendo el consumo, el consumo público y también, ¿por qué no decirlo?, el consumo privado. Y dígame lo que se quiera, en lo esencial, en lo medular, en lo sustancial, en este país, en España, el fumar, el beber, el adquirir bienes y servicios sigue siendo más barato, y el ahorrar menos rentable que en los demás países de nuestro entorno. Y esto es así y no vale la pena que cerremos los ojos ante la realidad.

Ha habido una afirmación realmente desusada en el Senador que ha agotado los turnos en contra. Se ha lamentado de que se haya afirmado en la tribuna que no se están cumpliendo los presupuestos. Yo realmente he quedado sumamente confuso, porque antes yo había afirmado que en el ejercicio de 1989 los ingresos respecto de las

previsiones subieron un billón de pesetas y el gasto en exceso fue de 800.000 millones. Si esto no son desviaciones, yo rogaría que la mayoría nos ilustrara a las distintas minorías de esta Cámara sobre qué entiende que son desviaciones presupuestarias.

En cualquier caso, quiero dejar constancia clara y rotunda de que mi grupo no ha contribuido ni directa ni indirectamente, ni de cerca ni de lejos, a aumentar el gasto público como se ha afirmado desde esta tribuna al presentar enmiendas, porque es lógico, y todos los señores Senadores aquí presentes lo saben, que cada enmienda presentada con un alza en la dotación presupuestaria supone su baja. Pero es que el Grupo Socialista, entre el Congreso y el Senado, ha presentado, nada más y nada menos, que un bloque de enmiendas que suponen un aumento sustantivo del gasto, que yo cifro entre un mínimo de 60 y un máximo de 70.000 millones de pesetas. ¿Qué seguridad se nos da a nosotros, no ya desde el Ejecutivo, sino desde las propias filas del partido que lo sostiene, respecto de la contención, ya que no limitación del gasto público, si de una Cámara a otra lo aumenta en 60 ó 70.000 millones de pesetas? No ha sido ésta la afirmación, si se me permite decirlo; lo cierto es que en un tema tan complicado y arduo como el de los presupuestos, el Senador que ha defendido los turnos en contra ha tenido un tono moderado, que yo reconozco. Si se me permite, diré que ha habido una situación todavía más peregrina: se ha dicho que los servicios públicos en España en estos momentos están funcionando de maravilla. Yo tengo que afirmar que ni los teléfonos ni el correo ni el transporte en general están cumpliendo los mínimos europeos, los estándares europeos, en cuanto a servicios públicos se entiende.

También —y lo entiendo, porque es una dialéctica parlamentaria absolutamente legítima—, se nos ha dicho, aunque sea otro saldo cualitativo en el túnel del tiempo, que nosotros, con nuestro liberalismo, nos hemos situado en el siglo XIX. Esto es una mejora, un saldo cualitativo positivo, porque antes, quizás se nos podría haber dicho que nos situábamos en la Edad Media, pero ahora se nos sitúa sólo en el 29 americano, en la gran crisis americana. Nosotros, con nuestro liberalismo, estamos imitando, nos hemos situado en el liberalismo que llevó al «crack» del 29 en Estados Unidos. Puede que quizá viajemos al siglo XIX, pero puedo asegurar a sus señorías que en este viaje nos acompaña el Partido Socialista. He tenido la precaución de traer lo único que demuestra, de cara a la opinión pública de un país, cuál es la posición de un partido respecto a un área o a una materia determinada que, como sus señorías saben, es el programa electoral con el que se concurre a las elecciones. Pues bien, el programa electoral con el que mi Partido se presentó a las elecciones, en su parte económica y concretamente en su página 58 aboga por un aumento de la inversión, y ustedes se felicitan de tener una tasa real de crecimiento del producto interior bruto muy elevada, de forma que estamos en las mismas posiciones. Nosotros pedimos un aumento sustancial del ahorro, y ahora, en estos momentos, ustedes, que nunca han estado en esta posición, hacen una flexión y empiezan a clamar por el aumento del ahorro y muy

sustancialmente por el aumento del ahorro público, cosa que luego matizaremos. Pero es que nosotros en nuestro programa pedíamos la mejora de la competitividad, que es lo mismo que nuestro Presidente nacional, José María Aznar, pidió en el debate de Presupuestos en el Congreso de los Diputados. Y ustedes están precisamente en esta onda, en la de entender que es, no sólo importante sino absolutamente vital, la mejora de la competitividad. Pues bien, esto es lo que nosotros también pedíamos en nuestro programa electoral. Por último, en nuestro programa electoral, que está a disposición de ustedes, también pedíamos el diálogo social, y ustedes esta misma mañana han hecho un canto a la concertación con las distintas fuerzas sociales. Y matizo lo de fuerzas sociales, porque entiendo que ahí no entrábamos las fuerzas parlamentarias, como el señor Pujana ha demostrado con brevedad muy expresiva. Pues bien, resulta que todo lo que ustedes ahora entienden que es vital, nosotros lo pedíamos en nuestro programa electoral. Si este liberalismo nos lleva al siglo XIX, yo entiendo que ustedes pueden terminar en el XVIII.

En cualquier caso, se ha dibujado aquí por parte del Senador que ha realizado los turnos en contra un paisaje idílico, una valoración global absolutamente paradisiaca de la economía española, con un optimismo que no tengo más remedio que calificar de ciertamente panglossiano.

Yo no voy a hacer mención, como ha hecho algún otro Senador legítimamente, ni del precio del petróleo ni del cambio del dólar, sin embargo, sí le quiero decir que usted ha olvidado un dato verdaderamente básico en la discusión presupuestaria de hoy, un dato ciertamente muy preocupante, y es que por primera vez la balanza básica está en déficit, y en el primer trimestre esto se demuestra clarísimamente.

Siguiendo con el hilo argumental de mi exposición, quiero decir que efectivamente, en cuanto hablamos de desviaciones, hay que agregar un dato que estoy seguro resultará del interés de sus señorías, y es que el Tribunal de Cuentas, en la Memoria correspondiente a las cuentas del sector público de 1985, ha afirmado textualmente que, junto a modificaciones justificadas, había otras como presupuestar por defecto partidas de cuantía fácilmente determinable con carácter inicial, o incorporaciones de remanentes debidas a presupuestos excesivos. También ha denunciado en esta misma Memoria otros criterios utilizados poco usuales, tanto en la imputación de ingresos como en la imputación de gastos, con lo que con esos criterios poco usuales se alivió notablemente el déficit de 1985.

Hay otra cuestión que a mí me preocupa: si de verdad en este debate presupuestario —que por serlo es también un debate de política económica, estamos completamente de acuerdo— nos estamos dando perfecta cuenta de algo que un compañero mío de escaño en una reciente intervención utilizó de una forma muy intensa, y yo diría que muy eficaz: la penalización del ahorro. Estamos penalizando el ahorro, porque nuestros tipos impositivos son elevados y porque nuestra inflación es exactamente la que es, lo que da una rentabilidad negativa para el

ahorro, según se ha reconocido en el propio informe del Banco de España. Pero, además, porque estamos deduciendo los intereses de los préstamos y, naturalmente, a muchos ciudadanos si se les deducen los intereses de los préstamos para adquirir un bien, lo adquieren sin ahorrar previamente con el señuelo de la deducibilidad en el impuesto. Y es que, además, estamos persistiendo en la doble imposición de los dividendos porque, por una parte, se están pagando en el Impuesto de Sociedades y, por otra parte, se están pagando en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Por último, estamos haciendo una retención del 25 por ciento de las rentas del capital mobiliario, y hace bien pocos días, si no me falla la memoria, el antecesor del Ministro en el Departamento que ocupa, recordaba en Alemania que un Ministro de Hacienda tuvo que dimitir —dimisión que le fue aceptada— cuando intentó una retención en origen de las rentas de capital del 10 por ciento. Y nosotros —insisto— estamos en el 25 por ciento.

Ha caído tres puntos el ahorro familiar, y es preciso que nos demos cuenta de que el ahorro familiar tiene un carácter estructural y el ahorro público tiene un carácter coyuntural, por lo que tiene razón el Gobernador del Banco de España y tiene razón el informe del Fondo Monetario Internacional cuando dicen que es preciso fomentar el ahorro privado si de verdad queremos enjugar el déficit de una forma racional y coherente.

Y, por fin —y ya termino—, hay que decir que, efectivamente, es cierto que el sistema fiscal español está en crisis, en una auténtica crisis. Y no se impide la racionalidad de esta afirmación diciendo que, en definitiva, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tan sólo representa el 30 por ciento de la recaudación, porque estamos hablando de un sistema, es decir, de un conjunto de impuestos; y si uno de esos impuestos quiebra, como efectivamente ha quebrado el Impuesto sobre la Renta, lo que entra en crisis es el impuesto concreto y singular en cuestión, pero también el sistema en el que está inmerso. Es cierto que las decisiones de los españoles sobre invertir, sobre ahorrar, sobre adquirir o alquilar una vivienda, sobre trabajar más, sobre asumir riesgos empresariales, sobre seguir viviendo en España o residir fuera, sobre defraudar poco, mucho o nada es algo que tiene muchísimo que ver con el diseño positivo o negativo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y estas decisiones se trasladan a todo el resto de los impuestos, globalizando sus efectos. (*Rumores.*) Pero ya que tan singular atención me prestan algunos de sus señorías de mi izquierda, quisiera decir también que deberíamos hablar en alguna ocasión de la gestión, de la administración tributaria y de las bolsas de fraude, cosa a la que mi grupo está dispuesto cuando lo deseen en una sesión plenaria monográfica en esta Cámara.

En definitiva, hemos asistido al ceremonial, al rito anual de un debate de presupuestos en el que, no es ya aquello que decía Maura de que «a mis proyectos de ley no se les quita una coma», es que a los proyectos de ley que nos presenta el Gobierno que sustenta el Grupo So-

cialista, por no quitarles, no se les quita ni tan siquiera un acento.

Por tanto, no debemos dramatizar. Sabemos lo que da de sí un debate sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado en esta situación, somos realistas y sabemos a qué atenernos.

En cualquier caso, yo terminaré recordando, para satisfacción irónica de la Cámara, que Enrique Jardiel Poncela afirmó, y afirmó bien, que en España la guía de ferrocarriles servía tan solo para comprobar el retraso con el que llegaban los trenes. Parafraseando a Enrique Jardiel Poncela, yo me atrevería a decir, con el consentimiento bienhumorado de todos nosotros, que los Presupuestos que hoy estamos debatiendo para lo único que sirven, en definitiva, es para poder comprobar fehacientemente los muchos, los hondos y los graves incumplimientos a que dan lugar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ortí Bordás.

Grupo Parlamentario Socialista. El Presidente se encuentra de perlas viajando por el siglo XIX hacia el Siglo de Las Luces, pero recuerda que son las seis y media y no hemos votado aún los vetos. Su señoría tiene la palabra.

El señor BARREIRO GIL: Con su venia, señor Presidente, señorías. Quizá haya una cuestión previa, que yo necesitaría que se me aclarase: su señoría no ha justificado el fraude fiscal, ¿verdad? Porque achacar primero a una sola causa la existencia del fraude fiscal en España, ajena a cualquier tradición cultural de amplios sectores de este país, decir que algo tendrá que ver eso y dejarlo caer sin ninguna explicación, al menos necesita una justificación posterior. Sé que su señoría no quiso justificar actitudes insolidarias no con la Administración pública o con la Hacienda Pública, sino con el país y con los intereses de cuantas personas con sentido común trabajan por una España solidaria y cívica.

Estoy seguro además de que su señoría, que es capaz de releerse a sí mismo en el «Diario de Sesiones», y que construyó su discurso sobre la respuesta de mi compañero de grupo parlamentario, estará de acuerdo en que, estando presentes en la misma sala y ante el mismo discurso, su señoría y yo, y creo que buena parte de la Cámara, hemos escuchado discursos diferentes. Desconozco la razón, pero aunque sólo sea a los efectos de dejarle constancia, nadie ha dicho la mitad de las cuestiones que su señoría dice que el Grupo Socialista ha manifestado en esta tribuna. Por ejemplo —y es meramente anecdótico—, nadie ha dicho que los servicios públicos en España funcionen de maravilla porque, si no, el Grupo socialista hubiese modificado radicalmente estos presupuestos, uno de cuyos objetivos más preclaros y evidentes es precisamente mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los españoles. Y parece que es, además, uno de los objetivos principales, si no el que va en la carátula de los propios presupuestos.

Por otra parte, si su señoría me lo permite y aun a fuer

de que sus señorías me obligan a utilizar el turno de portavoces como turno en contra de los turnos en contra, le diré que si se toma su señoría la molestia de poner sobre la mesa el programa electoral del Partido Popular y señalar, prácticamente con numeración, aquellos puntos fundamentales, según su señoría, de concepción de la política económica en los que estamos de acuerdo, dígame entonces el señor portavoz del Grupo Popular por qué veta los Presupuestos Generales del Estado, por qué mantiene una posición radicalmente antagónica a los postulados de política económica que se encierran en ellos.

Yo entiendo —su señoría bien lo ha dicho— que esto es un rito; un rito como el del gallego de Castelao, que le decía al otro: oye, veta tú, porque a mí me da la risa. Y seguramente en esta especie de juego de los formalismos forzados estamos cogidos todos, aun a fuer, digo, de devaluar el contenido de los discursos políticos.

Es evidente que éste también es un debate de política económica, nadie lo ha cuestionado, estimado Senador Fuentes, pero precisamente porque lo es tienen sus señorías derecho a hacer valoraciones que en rigor exigen ese contexto de planificación plurianual de nuestra economía. Y en ese terreno creo que ni siquiera el más empeinado de los desfiguradores puede negar que en estos últimos cinco años se han obtenido logros sustantivos, verificables —y dejemos la valoración para cada quien—, en importantes asuntos económicos: la estabilidad de los salarios, la mejora de las rentas familiares, la ampliación y aseguramiento de la presencia internacional de la economía española, la detención del proceso de deterioro de las estructuras empresariales, todas las cuestiones que sus señorías tienen en la documentación de presentación de los presupuestos y que alguno de sus señorías vetantes han explicado y explicitado en esta tribuna. Precisamente por ese resultado uno puede considerar agoreros a los profetas de hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete años y decir que, el sentido común deja bien en evidencia que en este país hay un consenso de aceptación de los resultados de la política económica que se está aplicando que desborda el campo electoral del Partido Socialista, y que precisamente por eso, porque existe esa capacidad de consensuar resultados, y lo que es más importante, de consensuar expectativas, en este momento sus señorías y mi grupo parlamentario, que yo sepa, estamos en condiciones de asumir compromisos consensuados en importantes terrenos económicos y sociales; precisamente por eso este momento de nuestra política económica está posibilitando la actuación de terrenos que buscan la concertación de intereses entre los distintos sectores sociales; precisamente por eso parece que estamos de acuerdo en suscribir pactos, acuerdos, entendimientos que permitan la mejora de la competitividad de nuestras empresas en un pacto muy amplio que no sólo contempla la competitividad sino todos los elementos de la economía que nos lo permitan; precisamente por eso nadie puede subirse a esta tribuna descalificando sencilla y simplemente la política económica y sus resultados; y precisamente aunque sólo fuese por eso, al Grupo Socialista si no la razón absoluta, que si lauviésemos renegaríamos de ella, porque

debe ser pecado, le asiste al menos el sentido común. Si hasta aquí hemos sido capaces de dar pasos y si de aquí en adelante, por esos pasos que se han dado, somos capaces de consensuar expectativas, díganme qué es lo que pasa, a qué responde este debate que estamos teniendo esta tarde, aparte de jalear al personal o servir de atractivo para los intereses partidarios o para las afirmaciones de protagonismo discursivos. Yo comprendo las dificultades discursivas de los portavoces de la oposición para vetar los Presupuestos Generales del Estado, y no crean sus señorías que cambian las cosas tanto como parece. En estos últimos años muchas fuerzas políticas han experimentado sustanciales variaciones interiores, han modificado sus liderazgos, lo cual ha implicado protagonismos específicos en el terreno parlamentario, han cambiado de nombre, han ampliado, han reducido sus coaliciones, se han afirmado en el neoliberalismo supuestamente progresista en defensa de la invasión territorial que hipotéticamente le infringe el liberalismo seguramente conservador y, sin embargo, el discurso político no se ha movido prácticamente nada. Yo aconsejo a sus señorías que releen los debates presupuestarios desde 1982 hasta 1990 y comprobarán —estoy seguro— como yo que vale la pena seguir trabajando y que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de retirar la paja del grano, a medida que lo hagamos, el debate político ganará envergadura, y seguramente las discrepancias falsas que se han estado poniendo sobre la mesa se convertirán en uno más de los instrumentos de consolidación de la economía española.

Al ilustre representante del Centro Democrático y Social le tengo que decir que la sola mención —para fijar los ejemplos, como hace su señoría— de que en terrenos tan capaces de sintetizar los resultados de una política económica como el empleo y la renta «per capita» estamos donde estábamos hace quince años, es cuando menos innecesariamente pueril. Seguramente su señoría es capaz como yo de hacer ponderación simultánea de la evolución de la población activa respecto del empleo, de la evolución de las tendencias de cada variable, o aunque estén en el mismo nivel, cuáles son sus tendencias de evolución; o seguramente su señoría, respecto de la renta «per capita», es capaz como yo de hacer una evaluación del volumen y de la calidad de los servicios públicos que se prestan hoy y que se prestaban hace quince años, creo que es innecesario que centremos el debate en estas pequeñas trifulcas. También coinciden sus señorías en reproducir, especialmente algunos de los grupos minoritarios, el discurso de la insuficiencia de los recursos para las administraciones públicas, excepto, claro está, la que asume la responsabilidad de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Asumamos ese discurso como lícito, asumamos también el discurso de la jerarquía de decisiones, de la prioridad de opciones. Yo no creo que asumir ese discurso de las prioridades responsablemente implique que reproduzcamos los viejos debates; decía antes, me parece que era el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que había un discurso quebrador del lenguaje político cuando se afirmaba con anterioridad que había un eje de Madrid para arriba, que arriba estaban los benefi-

ciados y abajo los pobres; arriba estábamos nosotros, los gallegos, por ejemplo. Era un discurso en buena medida injusto, como lo es pretender sustituirlo ahora por otro eje, aunque éste vaya del este al oeste. Hay una prioridad de opciones en el gasto de infraestructura en este país sobre el que sus señorías deben pronunciarse. ¿Están o no están de acuerdo en que España aproveche la ocasión excelente que se nos ofrece sobre ese eje en los próximos años para intentar consolidar nuestro crecimiento económico y también para intentar corregir desigualdades la-cerantes de ciclo histórico? Ahí es donde sus señorías pueden pronunciarse, pero no cambien un eje por otro, porque acabaremos convirtiendo esto en una rueda de bicicleta, en donde nadie sabrá cuál es el eje principal.

Señorías, sin entrar en los contenidos más reiterativos de los vetos, porque han tenido su turno en contra y yo estoy haciendo un turno de portavoces, me basta con decirles que he tomado nota, sorprendido y dolorido, porque sobre los gastos de las administraciones autonómicas y su incidencia en el déficit público nadie ha querido decir ni una sola palabra más. En esta cámara eso equivale a hurtar parte sustancial del debate político, que algún día tendremos que asumir como responsabilidad propia, porque no hay discriminaciones en distinto bando. En todo caso, he de manifestarles que yo puedo y quiero aceptar, por salud mental, que hay políticas económicas alternativas a la nuestra, ¡faltaría más!, ya digo que yo reniego de la verdad absoluta, pero lo que no puedo creer es que el contenido de política económica sustancial que hay en los vetos de todos y cada uno de los grupos parlamentarios que se sientan en este lado sea el mismo, si eso puede deducirse de la intervención del primero de los portavoces que tomó la palabra en contra de este proyecto de ley, ya que antes de que se produjese el debate de todos y cada uno de los demás vetos anunció que votaría a favor todos ellos, fuese cual fuese su contenido, y algún otro portavoz lo repitió, les felicito por la confusión de ideas en la que sus señorías participan.

Muchas gracias. (*Aplausos en los bancos de la izquierda.*)

El señor PRESIDENTE: El Senador Quetglas tiene la palabra.

El señor QUETGLAS ROSANES: Señor Presidente, le pido la palabra por dos conceptos distintos, por el artículo 87.1 y por un cierto sentido compensatorio, ya que usted me ha encendido la luz roja y me ha obligado a acelerar mi discurso.

El señor PRESIDENTE: No, no hay turno compensatorio, la luz roja se ha encendido por error, pero ha sido rectificado y todos los portavoces han tenido más tiempo del que está autorizado y establecido en la Junta de Portavoces y se lo puedo asegurar porque lo llevo calculado. Pero por el artículo 87, tiene su señoría la palabra por un minuto para rectificar las argumentaciones de que haya sido objeto.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo agradezco el tono y el contenido de la intervención del portavoz socialista, pero quiero referirme a alguna de sus argumentaciones.

No es nuestra obligación sumarnos al reconocimiento de determinados logros que la economía española ha tenido por motivo de una situación económica internacional específicamente favorable o por determinadas acciones de la política del Gobierno. No tenemos por qué ocultarlo, pero tampoco perder nuestro escaso tiempo en algo que ya descompensadamente el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno se dedican reiteradamente a argumentar. Yo quiero decir una cosa: Usted me ha dicho que nuestros argumentos relativos a la comparación de nuestra renta «per capita» con la europea y con el nivel de empleo son pueriles. Primero, vamos a precisar qué es la renta «per capita» porque usted ha hablado de servicios públicos y de que hay que afinar los instrumentos. La renta per cápita es un concepto muy simple: es la renta nacional dividida por el número de habitantes, y eso incluye a los servicios públicos, lo incluye todo; por tanto, no hay que matizar. Nuestra renta «per capita» hoy es el 0,75 de la media europea, exactamente igual que hace 15 años, y lo que yo le digo, señoría, es que nosotros no nos conformamos con eso. Yo les pregunto si se conforman con que en 15 años no hayamos sido capaces de absorber un solo punto del diferencial entre nuestra renta «per capita» y la europea.

Nosotros hemos ofrecido una política económica alternativa, la hemos puesto sobre la mesa, y ustedes se ha negado sistemáticamente a tenerla en cuenta, ni siquiera a discutirla, y estamos diciendo que la política del Gobierno no está absorbiendo el diferencial de nuestra renta «per capita» con la europea, y eso es cierto. En cuanto al nivel de desempleo estamos en el de 1982. Por lo tanto, estamos allá donde estábamos respecto a las dos variables fundamentales que más preocupan a los ciudadanos —el desempleo y la renta «per capita»—, porque son las apreciables, y no nos conformamos con esa política. Entendemos que la política del Gobierno es equivocada cuando intenta frenar el crecimiento de nuestra economía, cuando las posibilidades de crecimiento no inflacionario es, a nuestro juicio, posible y ustedes no quieren siquiera discutirlo. Si negarse a aceptar cualquier apunte o cualquier iniciativa que tenga sentido distinto al que ustedes defienden, no es estar en posesión de la verdad absoluta, están muy cerca de ello.

Por lo tanto, no le acepto en absoluto que nos diga que un planteamiento económico, por ser distinto, es pueril, ni que la contrastación de elementos fácilmente verificables —para usar su terminología— son una huida de la realidad económica que nos rodea. Creo que quien está fuera de la realidad, señoría, es el portavoz que ha usado los turnos en contra del Grupo Parlamentario Socialista, que nos ha pintado un panorama tan idílico sobre cuál es el estado de prestación de servicios, gracias a la política económica del Gobierno, que el problema es que no conseguimos que los ciudadanos ahorren porque el nivel de seguridad al que le ha llevado la política del Gobierno es tal, que puede existir un acierta alegría...

El señor PRESIDENTE: Señor Quetglas, creo que está suficientemente explicada la parte que tenía que aclarar.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

El señor Ortí Bordás tiene la palabra por el mismo turno.

El señor ORTI BORDAS: Gracias, señor Presidente.

No sé si por el mismo turno, pero lo cierto es que no es mi intención contestar a ninguna de las descalificaciones que en su intervención ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Hay que contestar a argumentos, no a descalificaciones. En cualquier caso, sí quiero decir dos cosas. Desde que yo soy portavoz de este grupo en esta Cámara, si algo me ha impresionado de los hombres y de las mujeres de mi grupo y del resto de los grupos de esta Cámara, es precisamente la voluntad y el esfuerzo de haber venido a aquí, año tras año, incluso con sesiones nocturnas, a debatir unos presupuestos que jamás el Ejecutivo Socialista ni el partido que lo sustenta ha unido la menor voluntad de discutir. Y dicho esto, voy a agregar algo: Si alguien que no hubiera estado en esta sesión leyera fuera del contexto las palabras iniciales del portavoz del Grupo Socialista respecto a mi posición en relación con el fraude fiscal, podría decir que son sencillamente insidiosas. Y quiero decir que yo jamás he defraudado, que mi grupo jamás ha hecho otra cosa que condenar el fraude... (*Rumores.*) ... y que desde esta tribuna ahora mismo acabo de decir que estamos dispuestos a un gran debate parlamentario, precisamente porque en este país hay bolsas de fraude, y bolsas de fraude consentidas, por ejemplo, las de los pagarés del Estado, y bolsas de fraude que, a lo mejor, tendremos que calificar de cuasi consentidas, por ejemplo, las declaraciones complementarias en determinados seguros. De forma que no tolero, ni individualmente ni como portavoz de este grupo, que se puedan lanzar palabras que fuera de esta casa se pueden considerar insidiosas.

Muchas gracias. (*Aplausos en los bancos de la derecha.*)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro. Silencio, por favor.

El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solchaga Catalán): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, quizá el representante del Grupo Popular, llevado por un cierto apasionamiento, ha confundido gravemente los términos de lo que es fraude, de lo que son aspectos particulares contemplados por la ley, y, desde luego, de su propia ejecutiva personal. No creo que nadie de mi grupo —estoy seguro— haya querido sugerir ni por un momento que el señor Ortí Bordás está defendiendo el fraude en materia fiscal o que, mucho menos, está incurriendo en el mismo. Y es evidente que la pasión que ha puesto en la defensa de su persona

estaba fuera de tono y, sin duda, provenía de un malentendido.

Pero no es por esto por lo que me levanto, porque cualquier compañero mío del Grupo Parlamentario Socialista hubiera podido decir lo mismo, sin necesidad de mi concurso. Me levanto para poner en claro algunas de las cosas que con frecuencia se dicen a partir de graves errores en la concepción de las leyes y su obligada observancia y cumplimiento. No es España el único país que contempla la posibilidad de que patrimonios que son de carácter relativamente irregular puedan contribuir seriamente, en última instancia, a la aportación necesaria que la Constitución prevé de todos los ciudadanos a las cargas generales del Estado a través de la colocación de tipos de deuda pública con tipos de interés castigados. Esto ocurre en Francia, país de larga tradición democrática y donde hace muchísimo tiempo que los niveles de fraude fiscal existentes, como en todos los sitios, son extraordinariamente más bajos que en España, y ocurre también en otros muchos países. No hay nada en la moral social que pueda repugnar a esta idea, excepto, naturalmente, la idea superior de que todos pudiéramos contribuir seriamente a denunciar el fraude fiscal allí donde existiera, en todos los sitios donde supiéramos que existe, señor Ortí Bordás. Por tanto, cuando en 1985 el Gobierno Socialista pasó a las Cámaras la Ley de Activos Financieros, y dentro de ella se contemplaba la presencia o existencia de los pagarés del Tesoro, no estaba haciendo nada de lo que tuviera que avergonzarse. Es más, nadie que suscriba pagarés del Tesoro está excluido o exonerado del cumplimiento de sus deberes fiscales; era un procedimiento para colocar un patrimonio, que de otro modo hubiera sido desconocido absolutamente por la Hacienda Pública, mediante el pago ciertamente de un coste, y no es eso distinto de lo que algunos grupos parlamentarios presentes en esta Cámara y algunos políticos importantes en este país y algunos expertos, cuyas posiciones son más próximas a los grupos que representa usted, señor Ortí Bordás, que al que representan el Gobierno y el Grupo Socialista, están solicitando ahora al calor de la reforma fiscal que estamos empezando a discutir. (*Varios señores SENADORES: ¡Muy bien!*)

Cuando se hizo esta ley se propuso también porque había quien defendía el papel del mercado frente al papel del Estado en esta materia, que existiera en todo momento la posibilidad de competir con el Estado en la emisión de algún tipo de activo que tuviera las mismas ventajas fiscales, y así se crearon por ley, contemplando esa posibilidad de competencia por parte del sector privado, los activos con retención en origen; activos que tienen una retención del 50 ó 55 por ciento sobre las rentas del capital que están previstas.

Y la historia moderna de la colaboración entre las entidades financieras —que no son precisamente socialistas, ni están gobernadas por socialistas—, y el Gobierno en esta materia ha sido que no ha existido prácticamente este tipo de títulos, que se llamaban «afros», porque nadie quería retratarse mediante la posesión de los mismos. Y, por el contrario, hay una importante bolsa de fraude

contra la que ha luchado este Gobierno en solitario, absolutamente en solitario desde el punto de vista de las fuerzas política, aunque debo reconocer que con el aplauso ulterior, «a posteriori», o —como dirían los castizos— a toro pasado, de la oposición, pero no precisamente animado por la misma, o empujado e impulsado en el desempeño celoso de esta tarea. En no mucho tiempo se han propuesto establecer pagarés del Tesoro a tipos más bajos de los oficiales con el único fin de defraudar el porcentaje que se pagaba a Hacienda. Ulteriormente se han creado por las entidades de crédito pólizas de seguro de prima única que no se diferenciaban en absoluto de lo que podría ser una imposición de capital a plazo con un rendimiento explícito o implícito, y por esa vía han entrado billones de pesetas de los españoles, saliéndose en parte de los pagarés, pero en parte también de cualquier otra fuente desconocida para la Hacienda española. Cuando esa vía se ha terminado y las entidades financieras que han incurrido en ella se han visto obligadas a dar al Ministerio de Hacienda todos los datos sobre quiénes eran los suscriptores de esas pólizas, ha aparecido el tema de las cesiones, y cuando esa vía también ha finalizado, muy por encima de lo que pudieran determinar las necesidades de financiación del déficit público de las haciendas territoriales del País Vasco, las entidades financieras han venido aconsejando que se suscribieran pagarés forales en cantidades que se han aproximado en poco tiempo a un billón de pesetas. Esta es la historia de nuestro país.

Miente, consciente o inconscientemente, quien diga que tras estos cinco años de persecución sistemática contra la colaboración de las entidades financieras, con la que pretenden mantener el nivel de fraude, este Gobierno consciente, admite, o simplemente se conforma, con el fraude existente. En ese sentido, señor Ortí Bordás, ni la normativa que este Gobierno ha introducido, ni el celo con el cual la gestión tributaria se ha llevado a cabo, ni el esfuerzo que en materia de inspección y en inversiones informáticas hemos hecho, ni, desde luego, los riesgos políticos que el Partido Socialista Obrero Español ha encarado en solitario a la hora de luchar contra el fraude —cosa que, como todo el mundo sabe, no es popular, ni nunca se había hecho en la historia de España— me pueden permitir dejar de salir al paso de las palabras que ha tenido usted. No es cierto que este Gobierno consienta el fraude; este es un Gobierno que pasará a la historia de España por muchas o por pocas cosas, pero, desde luego, entre otras será por el énfasis que ha puesto para hacer del sistema fiscal la contrapartida en términos financieros de lo que es una auténtica democracia, es decir, el sistema transparente por el cual cada español, de acuerdo con las previsiones del artículo 31 de la Constitución, aporta a las cargas generales del Estado según su capacidad económica.

Muchas gracias. *(Aplausos en los bancos de la izquierda. El señor Barreiro Gil pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Senador Barreiro, le ruego que se ciña a los términos del artículo 87: sólo para cuestiones que han sido discutidas de su argumentación.

El señor BARREIRO GIL: Intentaré hacerlo de una manera absoluta, señor Presidente.

Creo que era Bertolt Brecht quien decía que cuando la verdad se siente débil, pasa al ataque. Y como yo en estos terrenos pretendo no poner más arenas en el camino que las que el camino tiene, no voy a hablar de las interpretaciones, equivocadas, o no, que se hayan podido hacer de mis palabras, y vuelvo a remitirme de nuevo al «Diario de Sesiones» para que se pueda comprobar no sólo que no ha sido mi voluntad, sino que este grupo parlamentario siempre ha mantenido una escrupulosa diferencia entre la persona y el grupo parlamentario al que se contesta, y nunca ha dirigido individualmente ningún tipo de gesto o actitud hacia otra persona en esta Cámara.

Senador representante del Grupo del CDS, voy a ser muy breve, porque esto era lo que quería decir: quizá no tengan ustedes la obligación de cantar los logros, seguramente; pero sí la de ser razonables, igual que nosotros. Y, en todo caso, si la razón básica de su veto es que no se ha aceptado ni una sola enmienda a este proyecto de ley, como ha expresado en la tribuna, dígame esto cuando terminemos el debate de presupuestos; precisamente su señoría.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barreiro.

Vamos a efectuar las votaciones, separadamente, de cada uno de los vetos suscritos por los grupos parlamentarios y por el Senador Pujana Arza.

Como saben sus señorías, para la aprobación de las propuestas de veto se requerirá la mayoría absoluta de los señores Senadores que en estos momentos componemos la Cámara. Esta está integrada por 251 Senadores; la mayoría absoluta es de 127 votos emitidos a favor de cualquiera de los vetos.

Votamos la propuesta de veto número 1, suscrita por el Grupo Parlamentario Popular.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 101; en contra, 125.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 100; en contra, 124.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la propuesta de veto número 3, suscrita por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 99; en contra, 125.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, iniciamos la votación de la propuesta de veto número 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 103; en contra, 124.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto suscrita por el Senador Pujana Arza, del Grupo Mixto.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 99; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De conformidad con lo establecido en la junta de portavoces en su reunión del día 12 de junio de 1990, las enmiendas se debatirán agrupadas por títulos. Cada conjunto de disposiciones adicionales transitorias, finales y derogatorias, se debatirán como títulos separados. Comenzaremos por los votos particulares de enmendantes individuales, por orden alfabético y, a continuación, los de los grupos parlamentarios por orden de menor a mayor.

Para la defensa conjunta de los votos particulares se atribuirá un minuto por enmienda, con un mínimo de tres minutos para los enmendantes individuales, y cinco minutos para los grupos, con un máximo de treinta minutos. Los turnos en contra serán de la misma duración que los turnos a favor o, si se agruparan al final de todos los turnos a favor, serán por el total que figura en el cuadro, con un máximo de treinta minutos.

Hago esta lectura del acuerdo de la Mesa porque, a partir de este momento, vamos a intentar ser extraordinariamente rigurosos, en la medida de lo posible, con los tiempos.

Título I Iniciamos, por lo tanto, el debate del Título I, artículos uno a once y de los Anexos uno, dos y siete, comenzando por las enmiendas suscritas por el Senador Fuentes Navarro, del Grupo parlamentario Mixto, que son las numeradas 812, 813 y 814 que, como votos particulares, pueden ser defendidas en estos momentos.

Para su defensa, por tiempo de tres minutos, tiene la palabra el Senador Fuentes Navarro.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestras enmiendas pretenden modificar la regla quinta del artículo ocho, el artículo nueve, el apartado 1.4, añadiendo un párrafo y, en tercer lugar, la enmienda 814 pretende modificar el artículo nueve, apartado 2, suprimiendo también un párrafo.

en cuanto al artículo ocho, regla quinta, nosotros creemos que en estos Presupuestos, amén de otros muchos aspectos que se tocarán, naturalmente, con mayor detenimiento cuando discutamos las diversas secciones, se cae en dos defectos importantes. Por una parte, se aumenta la discrecionalidad a favor del Gobierno, hurtando, en

muchos de sus ámbitos, el control parlamentario. Por otra parte, se refuerza extraordinariamente el poder del Ministerio de Economía y Hacienda, facultándolo excesivamente.

Por lo que se refiere al primer apartado, nosotros creemos que esta norma quinta del artículo ocho incide claramente en este defecto de hurtar este control a las Cámaras y, a la vez, comporta el establecimiento, de manera, a nuestro juicio irregular, de una forma de retribución de los servicios de los miembros del Ministerio de Hacienda encargados de la inspección, mediante la adjudicación a la mejora del servicio de las cantidades que se perciban en concepto de sanciones y recargos. Nosotros creemos que esta es una vía irregular y que, por tanto, debe ser suprimida de los Presupuestos.

En el artículo nueve estamos planteando una enmienda sustitoria para el caso de que la primera no sea aceptada. En ella pedimos...

El señor PRESIDENTE: Perdona un momento, Senador.

Ruego a sus señorías que, si no pueden dejar de hablar, al menos lo hagan sentados, porque se nota menos.

Su señoría tiene la palabra.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Como decía, la enmienda relativa al artículo nueve, es una enmienda alternativa —la 813 a la 812— para el caso de que la 812 no sea aceptada. En el caso de que se mantenga esta forma irregular fijada en el artículo ocho, apartado 5, pretendemos, como mínimo, que se dé cuenta a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y el Senado para que, aunque sea con carácter posterior, puedan tener un mínimo de control sobre estas actuaciones del Gobierno.

En relación con la enmienda 814, nosotros pretendemos que las generaciones de créditos por la realización de activos del Ministerio de Defensa en relación con bienes inmuebles, no se adjudiquen directamente al Ministerio de Defensa, sino que entren a formar parte del conjunto del patrimonio del Estado sobre todo porque, en muchos casos, y debido al incremento del valor de muchos de estos bienes, pueden generar cantidades importantísimas que no es justo ni lógico que se dediquen a la reposición del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa puede necesitar una parte para reposición, pero en ningún caso se justifica, desde nuestro punto de vista, esta adjudicación plena y completa al Ministerio de Defensa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A continuación, enmiendas suscritas por el Senador García Royo, números 1.174 y 1.176.

Su señoría tiene la palabra por tres minutos.

El señor GARCIA ROYO: Si me lo permite el señor Presidente voy a defender todas las del Título I, las del gru-

po más las de los anexos, incluidas las mías; pienso que sería un mejor procedimiento.

El señor PRESIDENTE: Perdona un momento señor García Royo, dígame exactamente qué es lo que va a defender.

El señor GARCIA ROYO: Voy a defender las enmiendas que hemos presentado al Título I en las que incluiré diez enmiendas de mi grupo.

El señor PRESIDENTE: Las de su grupo también; ¿todas?

El señor GARCIA ROYO: Sí claro, todas.
También incluiría las dos personales mías.

El señor PRESIDENTE: Entonces tiene su señoría la palabra por dieciocho minutos.

El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, a este capítulo primero parece que, generalmente, se le da poca importancia, pero la tiene, y significativa. Es el título en el que se cifran los gastos, se cifran los ingresos, se cifra la financiación o el esquema de financiación del déficit que pueda existir y ha merecido especial importancia por parte del Grupo Popular. Mi grupo presenta un veto, precisamente, a este título, además, presenta diez enmiendas y tres más a los anexos I, II, VII, sobre los que después volveremos.

En primer lugar, quisiera lamentar, faltaría más, después del intenso trabajo realizado en Comisión hasta altas horas de la noche durante días y días, que la sensibilidad del Grupo Socialista no aceptara ninguna de las enmiendas que se presentaron por el resto de los grupos que allí comparecimos. Pero si observamos que el Grupo Socialista, a través de 21 programas y en seis funciones, consigue incluir con la debida autorización reglamentaria, ciertamente, nada menos que un incremento de más de 57.000 millones de pesetas. De ahí que no haya ningún problema en poner de manifiesto y se ha apuntado aquí esta mañana y esta tarde, la falta de credibilidad de estos presupuestos por los puntos y datos que aportó en este momento.

En primer lugar, en el artículo dos del texto que nos ocupa, se cifran los gastos del Estado en 18 billones 131.000 millones con, y están anexionadas ya, las variaciones al alza que ha sufrido, como consecuencia de enmiendas presentadas por el grupo Socialista. Se establece, efectivamente, que los ingresos son de 17 billones 75.000 en su artículo dos, lo cual nos da un déficit de un billón 56.000 millones de pesetas, un 2,13 del Producto Interior Bruto.

Este parlamentario a lo largo de sus catorce años de ejercicio, tiene por norma no adaptarse a esa propuesta. ¿Y por qué? Pues porque en estos 18 billones 131.000 millones no se recoge el capítulo noveno que es la amortización de pasivos financieros. ¿Es que acaso en alguna

economía doméstica el pago de los intereses de la vivienda, del colegio y de la comida no tienen que contar? ¿Por qué no van a contar en el conjunto de los gastos del estado lo que tienen que satisfacer, esos 998.000 millones de amortización de pasivos?

Ya lo discutimos en Comisión, y ahora es cuando quiero dejar testimonio concreto. Para este parlamentario, y creo que mi grupo lo arropará, escúchenme bien en este momento, el déficit inicial presupuestario, en términos de necesidades de financiación, es de dos billones 54.000 millones de pesetas, un 4,14 por ciento del Producto Interior Bruto.

¿Por qué esa obsesión del Gobierno Socialista de excluir el capítulo noveno? ¿Es que acaso no tiene que atender con los ingresos del Estado los gastos de financiación de la deuda pública? ¿Por qué tiene interés en coger los capítulos del primero al octavo y excluir el noveno?

En el artículo cuatro, donde se nos habla ya de la financiación del déficit dando por bueno el de un billón 56.000 millones —que no sería con mi consentimiento, puesto que no se contempla el capítulo noveno— se dice que se financiará con los ingresos por valor de 17 billones 75.000 millones de pesetas más el endeudamiento neto resultante de las operaciones que se regulan en el capítulo correspondiente del Título V de esta ley, concretamente el artículo 48. Y en el artículo 48 se autoriza al Estado para que emita deuda pública por una suma de 980.000 millones de pesetas, y nosotros nos preguntaríamos, acaso ingenuamente, ¿y la diferencia que existe hasta ese billón 74.000 millones o en el caso concreto que mantiene este parlamentario de necesidades de financiación hasta los dos billones 54.000 millones? Pues muy sencillo, porque han tenido la suficiente habilidad de decir que para la financiación de los gastos no financieros van a contar con un crecimiento vía créditos extraordinarios o suplementos de crédito que consta en el punto segundo del artículo ocho, y de esa manera van a tener, señorías, 435.000 millones más de pesetas, que efectivamente tendrán que pasar por esta Cámara, porque tendrán que ser proyectos de ley que surjan como consecuencia de esos complementos de crédito o suplementos de crédito. ¿Qué de dónde saco el cálculo de los 435.000 millones? Muy sencillo, señoría, como se aceptó una enmienda del Grupo del Centro Democrático y Social en la que tasaba en 2,5 el nivel europeo de endeudamiento extraordinario, si ustedes aplican a los 18 billones el 2,5 por ciento da los 435.000 millones de pesetas que son los que van a contar.

Pero en este tema lo que más nos preocupa —y vamos a entrar en ello— son los principios generales que se mantienen o se desarrollan en el capítulo segundo, puesto que hasta aquí la explicación ha afectado exclusivamente a la aprobación de presupuestos y modificaciones. Vayamos ahora con las normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios.

Ya dijimos en comisión que estos Presupuestos son estructuralmente irregulares. No cabe comparación entre crédito inicial de 1989 y crédito inicial de 1990. No. Para el año 1989 nos sirve el resultado de la liquidación del ejercicio, que son cifras muy inferiores, de ahí —y no voy

a entrar en ello, porque sería volver a un «ritornello» del tema que esta mañana se ha debatido— que el crecimiento más fantástico, más abultado de las inversiones, un 29 ó 30 por ciento, señorías, si ustedes aplicaran y lo compararan realmente con los créditos que en esta Cámara se aprobaron y que estuvieran vigentes a partir de 1.º de enero de 1989, quedan reducidos al 14,20 por ciento. Si ustedes aplican inflación y algo más, resulta que la inversión de este ejercicio no es ni más ni menos que hincharla en tanto en cuanto dejaron de ejecutar en el ejercicio 1989. Porque, pásmense ustedes, me he permitido sacar las diferencias que ha habido en la ejecución presupuestaria —y ya veremos luego si alguien me lo discute— y el Gobierno Socialista en el año 1989 —y ha tenido incidencia en la formalización de los Presupuestos para 1990— ha dejado pendiente de ejecución un billón 588.000 millones de pesetas. Y los voy a analizar, porque éstos señorías son datos de la Intervención General de la Administración del Estado, no es que se repentencen. En deuda pública se pasó de tres billones 899.000 a solamente pagar dos billones 859.000 millones. Defensa ¡dichoso Ministerio! el Ministerio que peor ejecuta presupuestos, dejó 165.000 millones; el Ministerio de Obras Públicas ¡faltaría más! 123.000 millones; Agricultura 80.000; Administraciones Públicas 17.000; y algo que sí le afecta a esta Cámara, señorías, del Fondo de Compensación Interterritorial que, como saben ustedes, por ley específica admite que se vayan sumando los resultados del ejercicio anterior, se reincorporen los remanentes, de 366.000 millones que había de créditos iniciales quedaron pendientes de ejecutar 254.000 millones de pesetas. Son datos que nos proporciona la Intervención General de la Administración del Estado.

Es decir, que cuando llegamos a este Capítulo Segundo y vemos las normas de modificación y ejecuciones de créditos presupuestarios, se nos pone carne de gallina. Porque, no es esa sólo la mala ejecución presupuestaria, es que voy a entrar en un tema, que quizá sea de fineza jurídica, del que voy a intentar exponer una anécdota para que ustedes lo entiendan.

La Ley General Presupuestaria, una ley cuyo texto refundido por el Gobierno socialista incluso tuvo un impacto anticonstitucional, que se aprueba en 1988, se aplica, y ahora, nada más para el ejercicio de 1990, pásmense ustedes, pasa a ser subsidiaria de la ley anual de presupuestos. Lean ustedes: las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en esta Ley —la ley anual— y a lo que al efecto se dispone en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria en aquellos extremos que no resulten modificados por aquélla. Es decir, ley general, ley casi fundamental, en este caso subordinada a una ley anual.

Crédito que nos creemos que va a servir para estímulo o aliciente personal, con los recargos y sanciones que, como consecuencia de la gestión administrativa, se pueden producir.

Mi Grupo ha presentado las enmiendas números 23 y 24 de supresión porque no parece correcto que un sector de la Administración, dedicada nada menos que a la ins-

pección y al control, algo que creíamos que ya había desaparecido, vaya a tener ahora un crédito a su disposición —no voy a llamarle nunca una caja B— que se va a nutrir de las sanciones y recargos en vía administrativa.

Vamos al artículo nueve. En este artículo hay dos clases de competencias, una del Ministerio de Economía y Hacienda para incorporar los remanentes del Ministerio de Defensa, 165.000 millones de pesetas, que se suman a los presupuestos de este ejercicio. Asimismo, por parte del Ministerio de Hacienda se va a asumir desde esta ley una competencia que afecte a la aplicación de créditos de las inundaciones de las provincias de Valencia y Murcia y una incorporación última de remanentes para los efectos que las lluvias torrenciales han producido en algunas de las provincias de nuestro territorio. Pero, verán ustedes las competencias que se le dan al Ministerio de Defensa.

En primer lugar, puede generar ingresos que procedan de la venta.

Respecto a las transferencias de crédito que se establecen en el artículo setenta, apartado 1, de la Ley General Presupuestaria, hay un matiz que sus señorías están viendo estos días en las enmiendas. Como ustedes conocen, está el capítulo, el artículo, el concepto y el subconcepto. Ahora se da rango primordial, en lugar de al concepto, que es el último, al artículo, es decir, lo invierte. Porque la Ley General Presupuestaria no sirve, no se va a aplicar en estos presupuestos generales del estado para 1990. Las limitaciones que se contienen en el artículo 70 solamente van a servir para tres aspectos: para transferencias de competencias a las comunidades autónomas, patrimonio histórico español o cuando se trate de financiación con la CEE. Pero, ¿quieren ustedes una guinda? Pues les voy a leer la regla quinta de este artículo. Dice así: Podrán generar crédito en los estados de gastos de los centros que realicen funciones de inspección y control los ingresos derivados de sanciones y recargos acordados en los correspondientes procedimientos administrativos con ocasión de su efectivo ingreso en el Tesoro público. Estas generaciones se aplicarán a la mejora de los servicios que lleven a cabo las citadas funciones de inspección y control. En música clara esto significa que el Cuerpo de Inspección y Control del Estado va a generar de productos farmacéuticos o de los servicios hospitalarios que presten, y en este momento llamaría la atención del Senador que haya de seguirme en el uso de la palabra sobre que vamos a la seguridad jurídica desde lo que una ley de patrimonio establece en sus artículos 36 y 37.

Yo publicaba hace unos años que la característica necesaria para que un bien público o patrimonial pueda ser enajenable es la de la declaración de alienabilidad, es decir, que alguien diga que ese bien inmueble sea enajenable, y a partir de aquel momento ya hablaremos de qué esquema, si concurso, subasta, mixto o de adjudicación directa, buscaremos para ese bien.

Pues no, señores; aquí el Ministerio de Defensa, soslayando, como la inobservancia rotunda de los artículos 36 y 37, la vigente Ley del Patrimonio, llega inclusive a poder enajenar los bienes inmuebles de que ahora disfruta. ¿No habíamos dicho, y se dice en el preámbulo de la Ley

de Patrimonio, que el patrimonio del Estado es universal, que no tiene aquello que se denomina afección, es decir, que un bien de los del Patrimonio del Estado puede dedicarse muy bien a escuela o a un centro cultural, pero no previamente determinado? Esto hay que decirlo después, en el momento de la afectación o en el momento de la enajenación.

Vayamos, por el tiempo, señor Presidente, al artículo diez. En este artículo se va a establecer la limitación al reconocimiento de las obligaciones, y esto es algo que nos deja asombrados. En tanto que la Ley General Presupuestaria establece, sin distinguos, que los gastos tengan que ser para cada gasto y para cada caso, en el artículo diez se recoge que con cargo al Presupuesto, y referidas a operaciones no financieras, el conjunto de las obligaciones recogidas, excluidas las derivadas de créditos extraordinarios y suplementos de crédito aprobados por las Cortes y las generaciones de créditos financiados con ingresos previos no podrán superar la cuantía total del crédito inicialmente aprobado para atender dichas operaciones financieras en el Presupuesto del Estado. Y esto es lo que dice la Ley General Tributaria, pero es que no habla de operaciones no financieras; si ustedes quieren verlo, en la Ley General Presupuestaria, que la tengo a su disposición, se habla de gastos en sentido globalizado. Ustedes están hablando, además, de reconocimiento de obligaciones. No se habla de obligaciones contraídas en la Ley General Presupuestaria; se está hablando de gastos comprometidos, gastos contraídos, gastos a primero de enero de 1990. Es decir, ustedes han cogido la Ley General Presupuestaria, la han vestido a su gusto, la van a dormir a su gusto y tan contentos durante el año 1990. Ya veremos si esto acaba aquí.

Al párrafo segundo de este artículo diez, como he dicho, mi Grupo había presentado la enmienda número 30, de adición «in fine», en la que los créditos extraordinarios y suplementos ya van a tener una cuantiosa limitación: 453.000 millones de pesetas. El Gobierno comunicará trimestralmente —alguien ha hablado ya antes aquí del toro pasado —a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado las operaciones de ejecución de tal Presupuesto.

Como ven sus señorías —y con esto termino, señor Presidente dando por defendidas todas las enmiendas en lo que pueda afectarles, sin perjuicio de las dos personales de este Senador, que también doy por defendidas—, lo que el Gobierno socialista en este título I pretende es, no voy a decir el término camuflar pero aun cifrándolo, no computar el costo de amortización de los pasivos financieros por suma de un billón de pesetas; no decir en cuanto va a enjugar el diferencial del déficit, sino que nada más habla de la emisión de deuda por valor de 980.000 millones de pesetas.

De esta manera, señorías, como ustedes comprenderán, por aquello del concepto y el artículo que les indiqué, yo emplazo a cualquiera de ustedes si son capaces, a partir de la entrada en vigor de la Ley de 1990, de controlar o seguir la ejecución de estos Presupuestos que vamos a aprobar seguramente en el plazo de ocho días.

Yo emplazo a sus señorías, porque con las transferencias y las modificaciones que se autorizan, ríanse ustedes de lo que estos presupuestos van a significar: un cheque de 18 billones de pesetas que todos los Grupos, excepto el Grupo Popular, van a consentir que se entregue a las manos libres del Partido Socialista, y encima sin control.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Royo.

Se supone que el Grupo Socialista va a consumir por el tiempo de media hora el turno en contra general previsto para este título, ¿verdad?

El señor GARCIA SANCHEZ: Sí, señor Presidente. El Grupo Socialista va a agrupar todas las intervenciones y responderá al final oportunamente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Así no cometeré errores con su señoría. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista Vasco, el señor Aguirre tiene la palabra para la defensa de sus tres enmiendas por tiempo de cinco minutos.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Gracias, señor Presidente. Nosotros tenemos a este Título presentadas las enmiendas 927, 928 y 929.

La enmienda 927 hace referencia al artículo ocho, Regla segunda, de la que pedimos su supresión, ya que entendemos que el Texto refundido de la Ley General Presupuestaria no hay que confundirlo con los Presupuestos Generales del Estado. Esto es algo que se hace tradicionalmente en todos los presupuestos y entendemos que no debe procederse de esta forma, y ya hemos hablado de esto cuando hemos expuesto nuestras sugerencias para años futuros.

Respecto a las enmiendas 928 y 929 hacen también referencia al artículo ocho, Regla quinta. Nosotros pedimos la supresión de los dos párrafos de la Regla quinta, ya que en ellos se dice: «Podrán generar crédito en los estados de gastos de los Centros que realizan funciones de inspección y control, los ingresos derivados de sanciones y recargos acordados en los correspondientes procedimientos administrativos, con ocasión de su efectivo ingreso en el Tesoro Público».

«Estas generaciones se aplicarán a la mejora de los servicios que lleven a cabo las citadas funciones de inspección y control.»

Queda claro que se habla de las funciones de inspección y control. Con esto, si se aprueba tal como está en los Presupuestos, se está dando un cheque en blanco para que el Gobierno pueda premiar a la inspección conforme a lo que se pone en esta Regla quinta del artículo octavo. Como posiblemente ustedes no van a aceptar la supresión, entonces la enmienda 929 es una alternativa a la anterior, en la cual decimos que si no admiten suprimir estos dos párrafos, pedimos que en su inciso final se ponga: «... teniéndose en cuenta en todo caso la prohibición contenida en el artículo 30 de la presente Ley». Es decir, queremos aclarar que las generaciones de créditos que se apliquen

a la mejora de los servicios que lleven a cabo las citadas funciones de inspección y control, no sirvan para incrementos indirectos de las retribuciones de este personal. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Por el grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona por tiempo de nueve minutos para defender sus nueve enmiendas.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente. Nuestro Grupo Parlamentario formuló y ha reservado para este momento de defensa en el Pleno seis enmiendas al Título I y tres al Anexo II, y éste hace referencia a la aprobación de los presupuestos y modificaciones; dos de ellas al Capítulo segundo y las otras cuatro al Capítulo tercero.

Las enmiendas al Capítulo segundo tratan de las normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios. La número 637 propone la modificación de la Regla 5 del artículo ocho que establece que podrán generar crédito en los estados de gastos de los Centros que realizan funciones de inspección y control, los ingresos derivados de sanciones y recargos acordados en los correspondientes procedimientos administrativos, con ocasión de su efectivo ingreso en el Tesoro Público. La modificación consiste en introducir una excepción a esta Regla y eliminar cualquier posibilidad de que estos ingresos puedan destinarse a mejoras retributivas del personal. Las recaudaciones procedentes de ingresos derivados de sanciones y recargos no pueden, a nuestro entender, ser destinadas a retribuciones del personal. Destínense a incorporar nuevas técnicas y métodos de gestión, a mejorar métodos, y evítese que puedan ser destinadas a retribuciones de personal.

La enmienda número 638 propone la adición de un nuevo apartado al artículo diez. El artículo diez establece las limitaciones con respecto a las obligaciones reconocidas en 1990 con recargo al Presupuesto del Estado y referidas a operaciones no financieras. Estas limitaciones constituyen una novedad, ya que es la primera vez que se contempla en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y nosotros creemos que lo que se establece en este artículo 10 ha de complementarse, de lo contrario podría resultar poco efectivo. Este es el objeto de nuestra enmienda, cuya introducción alcanzaría un criterio más homogéneo, con la intención de la limitación establecida en el artículo 10. Con este objetivo de complementar esta limitación, nuestra enmienda 638 propone que las ampliaciones de crédito previstas en el Anexo II no puedan tener efectividad, a no ser que se instrumenten las correspondientes minorizaciones de otros créditos, de lo contrario se puede generar un crecimiento de gasto incontrolado.

Tenemos cuatro enmiendas al capítulo tercero, tres de adición de un nuevo apartado al artículo 11, único de este capítulo, y una de adición de un nuevo artículo 11 bis. Todas ellas responden a una misma preocupación: el proceso de participación «a posteriori» en las desviaciones que

experimenta el gasto del Insalud aplaza problemas de tesorería de la Administración Central a los ejercicios siguientes, pero los genera a las administraciones autonómicas que tienen competencias en materia de sanidad. Nuestra enmienda número 639 tiene por objeto introducir criterios de cierto automatismo en la gestión y aplicación de los presupuestos de la Seguridad Social. Es un problema que se viene arrastrando desde hace años, lo hemos comentado en el veto a la totalidad, con grave incidencia en la efectividad y eficacia de estos servicios. Se trata de que, en los expedientes de incremento de gastos que promueve el Instituto Nacional de la Salud que se financien durante el ejercicio por aportación del Estado, se incluya la parte que corresponda a las comunidades autónomas con gestión transferida. Es lo lógico, puesto que el mecanismo de financiación de las comunidades autónomas, en lo que hace referencia a la sanidad, no se encuentra en el sistema nacional o en el sistema general de financiación y es común al Insalud y a las administraciones que han recibido las transferencias en materia de sanidad, por lo que debe reconocerse que estas coberturas con cargo al Estado han de extenderse a estas comunidades al mismo tiempo que se instrumentaliza, y para ello proponemos adicionar un nuevo párrafo al artículo 11.

La enmienda número 640, que propone adicionar un nuevo apartado, va en la misma dirección y da cumplimiento a lo dispuesto en la disposición transitoria del Real Decreto 1088/89, de 8 de septiembre.

La enmienda número 641 hace referencia a los centros nacionales, tanto al Centro de Paraplégicos de Toledo como al de Silicosis de Asturias, y entendemos que deben mantenerse. Ahora bien, son centros nacionales y sólo a los efectos de determinar sus presupuestos creemos que su montante no debería minorizarse del que se distribuye después a las comunidades autónomas, porque de lo contrario haríamos soportar a las comunidades la financiación de centros que tienen carácter nacional. Esto nos parece evidente y corregirlo es el objeto de nuestra enmienda.

Finalmente, la enmienda número 642 propone se establezca un mecanismo de compensación financiera entre las diferentes comunidades autónomas que tengan transferida la gestión de los servicios sanitarios de la Seguridad Social y el Insalud, como consecuencia de prestación sanitaria y farmacéutica realizada a los beneficiarios no residentes en las mencionadas comunidades autónomas.

Tenemos tres enmiendas al Anexo II, 717, 718 y 719, que damos por defendidas en sus propios términos.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona.

Terminado el debate de las enmiendas formuladas como votos particulares a estos Títulos, corresponde el turno en contra.

El Senador García tiene la palabra.

El señor GARCIA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, creo que es bueno que empiece diciendo que hay un proyecto y que habrá una ley de presupuestos generales del Estado y lógicamente el Grupo parlamentario Socialista ha estudiado todas y cada una de las enmiendas presentadas individualmente por sus señorías y por los distintos grupos.

Creo que son injustas algunas de las afirmaciones que se han vertido, sobre todo para las horas de trabajo que mis compañeros y yo mismo hemos invertido en el estudio de esas enmiendas, muchas de las cuales, me atrevería a decir, han tenido reflejo en las enmiendas presentadas por el propio Grupo parlamentario Socialista aquí en el Senado y algunas de las cuales me imagino que también tendrán reflejo en las oportunas enmiendas transaccionales que puedan presentarse. En cualquier caso, señorías, hay un proyecto, ese proyecto cuenta con el apoyo social suficiente y, por consiguiente, a ello me circunscribo, con independencia de que les asegure que hay un responsable por cada sección o título, el cual ha estudiado todas las enmiendas presentadas.

Quisiera empezar diciéndole al señor García Royo que, a veces, cuanto más conservadoras son las ideas, más revolucionarios son los discursos. Como yo creo que ya hemos pasado la discusión de los vetos de totalidad y el trabajo que estamos realizando debe de ser un trabajo reposado, reflexivo, sereno y casi técnico, me atrevería a decir, al margen del político, por supuesto, yo voy a intentar responder a todas y cada una de las enmiendas presentadas a todos y cada uno de los artículos del Título I.

Quiero empezar agradeciendo al Grupo parlamentario del Centro Democrático y Social que haya retirado el veto en Comisión a este Título I. Quiero recordar, no obstante, que lo ha retirado porque, en buena medida, lo que pedía ya se consiguió en el debate en el Congreso de los Diputados. Por consiguiente, no tienen razón sus señorías en todo lo que dicen.

Respecto a la supresión de la Regla segunda del artículo ocho, se han presentado dos enmiendas, la número 22 del Grupo parlamentario Popular, y la número 927, del Grupo parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Señorías, si en estos presupuestos se incluye una norma que compete al régimen de vinculación jurídica y con vigencia exclusiva para el año en curso para 1990, ésta es la razón que obviamente justifica su no inclusión en el texto refundido de la Ley general Presupuestaria; no hay otra razón, y creo que es evidente. En absoluto cabe deducir de ello, como han dicho sus señorías, una situación de inseguridad normativa, en absoluto, ya que el precepto es claro, y lejos de suponer un obstáculo al seguimiento y control presupuestario a que alude la enmienda, implica un requisito adicional a las modificaciones del presupuesto, vía transferencia de crédito, en aras a un mayor control sobre el mismo.

Voy a pasar a la tan debatida Regla quinta del artículo ocho, a la que se han presentado cuatro enmiendas de supresión: la número 928, del Grupo parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos; las números 23 y 24, del Grupo parlamentario Popular y la número 812 del Grupo parlamentario Mixto. No entiendo que haya dos enmiendas

de supresión a la regla quinta del artículo ocho, como no sea que todo lo que suene a inspección y control ustedes intenten suprimirlo por todos los medios, pero sobra alguna en mi opinión.

Como ustedes saben, la Regla quinta del artículo ocho establece que podrán generarse créditos en los estados de gastos de los centros que realicen funciones de inspección y control y que los ingresos derivados de esas sanciones y recargos, esas generaciones, en definitiva, de ingreso se pueden dedicar a la mejora de los servicios. Me parece normal que esto sea así, y no tienen razón los que han asegurado que eso supone una desviación presupuestaria puesto que, al fin y al cabo, tiene que ser el propio presupuesto el que contemple en el lado de los ingresos y de los gastos las correspondientes consignaciones. Y ya está hecho así. Los presupuestos ya tienen contempladas las partidas y asignaciones correspondientes.

Por otra parte, quiero tranquilizar a algunos de sus señorías respecto a si estos fondos o estas generaciones de crédito pueden destinarse a gastos de personal o no, porque creo que puede ser importante para algunos de ustedes y, de hecho, el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado una enmienda de adición en este sentido, y debo decir que en ningún caso se establece que dicho mecanismo sea un medio de retribuir al personal afecto a labores de inspección y control, ya que tales retribuciones se encuentran taxativamente reguladas en la Ley 30/1984 y en el Título III del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Espero que haya quedado claro.

Y, por fin, debe señalar que el mecanismo citado en absoluto desvirtúa el contenido de los Presupuestos Generales del Estado, ya que esos ingresos a que den lugar esas actuaciones de inspección y control seguirán figurando en los capítulos correspondientes al Presupuesto de ingresos, en los términos previstos en el artículo 143 de la Constitución y en el 48 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Espero que esta información pueda servir para que sus señorías revisen las enmiendas interpuestas a la regla quinta del artículo ocho, incluidas las dos enmiendas de adición, la número 25 y la 929, del Grupo Popular y del PNV respectivamente.

Al artículo nueve se han presentado en total cinco enmiendas, la 26, del Grupo Popular, de supresión de un apartado, la 813, del Grupo Mixto, de adición, la 814, también del Grupo Mixto, de supresión de un apartado, la 1.176, del señor García Royo, igualmente de supresión de un apartado, y la 1.174, del mismo Senador, de adición.

En general y en sintonía con lo que decíamos para la regla quinta del artículo ocho, parece que a sus señorías les preocupa la agilidad presupuestaria que se deriva de la cesión de competencias al Ministerio de Defensa para autorizar generaciones de créditos procedentes de la venta de bienes inmuebles. Creo, señorías, que de estos Presupuestos se pueden decir muchas cosas, pero, desde luego, lo que está claro —y todos coincidirán en ello— es que son los de mayor ámbito. De todos los Presupuestos de la democracia, estos son los que incorporan mayores controles y los de mayor ámbito. No entiendo cómo entonces,

cada vez que se pretende lograr una nueva medida de agilidad, eficaz en lo público, sus señorías pueden poner enmiendas, entorpeciendo, en mi opinión —y lo digo con todos los respetos— la propia gestión de la administración.

El artículo nueve no tiene otro objetivo que flexibilizar la gestión del patrimonio inmobiliario de la Defensa, permitir una actuación más flexible de la Defensa en materia urbanística inmobiliaria. Como sus señorías saben, se está procediendo a la reestructuración de los tres Ejércitos y a veces existen inmuebles que es necesario vender, generándose los oportunos créditos e ingresos —por ejemplo, para trasladar las instalaciones fuera de las ciudades, etcétera— y se requiere eficacia y agilidad en la gestión.

Por lo que respecta a los ingresos derivados de la venta de productos farmacéuticos y la prestación de servicios hospitalarios, parece lógico que también puedan generar crédito lo más ágilmente posible a efectos de no entorpecer la gestión financiera de los hospitales y centros asistenciales dependientes del Ministerio de Defensa.

Al artículo diez, de limitación del gasto, se han presentado cinco enmiendas; cuatro del Grupo Popular, de la 27 a la 30, ambas inclusive y la 638, del Grupo de Convergència i Unió. El artículo diez tiene una limitación tanto en el importe global de los créditos, que no se puede superar, como en los créditos extraordinarios y suplementos de créditos, que no podrán sobrepasar el 2,5 por ciento de los propios créditos ordinarios fijados en el artículo 2.1 de esta Ley.

Incluyendo en mi respuesta a todas las enmiendas existentes al artículo diez, debo decir, señorías, que lo verdaderamente importante de este artículo es que ya se puede asegurar cuál es el déficit del ejercicio de 1990. Si el presupuesto de ingresos —bastante ajustado, por cierto— se cumple, estaremos en condiciones de decir que el déficit se habrá rebajado al 1,6 por ciento del PIB, y eso, señorías, es lo auténticamente importante, puesto que estará por debajo del ejercicio de 1989.

Otras de las enmiendas presentadas a este artículo diez, como las del Grupo Popular —las números 27, 28 y 29—, distorsionan claramente, en mi opinión, y dicho con todos los respetos, el propio contenido del artículo, ya que la limitación que en el mismo se establece debe afectar al presupuesto no financiero en su conjunto, sin descender a un mayor grado de desagregación, lo que me parece negativo para una economía que tiene que ser eficaz y en la que hay que contar en todo momento con los recursos inmediatos y con las formas de actuación política inmediatas. Evidentemente, creo que eso entorpecería esos mecanismos de gestión y, por tanto, entiendo que lo más prudente es no aceptar las enmiendas, puesto que impiden aprovechar los saldos de los programas y capítulos que reflejen un menor reconocimiento de obligaciones que se hayan aprobado a lo largo del ejercicio y es posible que se produzca el efecto contrario. Si pretendemos que la Administración pública sea eficaz, señorías, no debemos —en mi opinión— limitarla tanto, puesto que, repito, los controles son máximos en estos presupuestos.

Y ocurrirían cosas muy curiosas, señorías. Por ejemplo,

con las limitaciones que proponen las enmiendas presentadas al artículo diez, quedarían sin ninguna utilidad práctica algunas modificaciones presupuestarias que supusieran un aumento de los créditos. Se llegaría incluso a la paradoja de que autorizándose estas últimas no pudieran utilizarse por la limitación que pretenden introducir esas enmiendas.

El Grupo Popular pide la supresión del artículo once, cuatro, a través de su enmienda número 30, pretendiendo introducir la obligación del Gobierno de comunicar trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congreso y del Senado las modificaciones presupuestarias efectuadas. Esto, señorías, implica la reforma tácita del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, que sólo contempla la obligatoriedad por parte del Gobierno de dar cuenta a las Cortes Generales de los créditos extraordinarios aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda respecto de los organismos autónomos, sobre la base de que para los citados organismos no es necesario que sean las propias Cortes las que aprueben la concesión de los créditos extraordinarios que precisasen para el cumplimiento de sus obligaciones. Nada dice el Texto refundido respecto de las demás modificaciones presupuestarias; no dice nada en absoluto, por lo que en ningún caso puede hablarse de incumplimiento del principio de legalidad, como dice el Grupo Popular. Además, las modificaciones presupuestarias a lo largo de un ejercicio se apoyan en el propio texto refundido de la Ley General de Presupuestos, y nunca se realizan modificaciones no contempladas en dicha norma.

Hay cuatro enmiendas al artículo once presentadas todas ellas por el Grupo de Convergència i Unió. Señorías, la participación de las comunidades autónomas en las desviaciones presupuestarias del INSALUD está prevista ya en sus respectivos reales decretos de traspaso de competencias. De acuerdo con dicha participación. Se repercute en el ejercicio presupuestario siguiente a aquél en que se produce la desviación. La aceptación, por ejemplo, de la enmienda número 639, supondría incrementar el gasto presupuestario y supondría incrementarlo sin financiación, señorías. Salvo que ustedes me demuestren lo contrario, esto es irregular. Se aumentaría el gasto y no se especifica claramente la financiación de ese gasto.

Por otra parte, debo decirles que la financiación por el Estado de los gastos de la universalización de la asistencia sanitaria de las personas sin recursos ya está contemplado en el presupuesto inicial del INSALUD. De este presupuesto participan las comunidades autónomas en régimen transferido, en función de los índices respectivos de población protegida, por lo que no parece necesaria la enmienda número 640 del Grupo de Convergència i Unió.

Respecto a la exclusión del Centro Nacional de Silicosis de Asturias y del de Parapléjicos de Toledo como centros nacionales a efectos de determinar la participación de las comunidades autónomas en los gastos del INSALUD, deben tener en cuenta sus señorías que el hecho de que estos centros se incluyan como nacionales para el cómputo de ese gasto es precisamente porque a ellos pueden ir enfermos beneficiarios tanto de Cataluña, de Astu-

rias, como de Madrid, pueden ir de todo el territorio español. Por tanto, tienen un carácter nacional. No veo por qué se deben excluir en ese cómputo.

Por último, quiero decirles que la compensación entre comunidades autónomas por prestación de servicios está contemplada en la Ley General de Sanidad, correspondiéndole al Gobierno instrumentar su desarrollo, conforme a los criterios establecidos en la Ley.

El Grupo Popular ha presentado la enmienda número 153 al Anexo I. Me perdonarán sus señorías si les digo que yo no aprecio equilibrio presupuestario por ningún lado, es decir, pretender reforzar el crédito destinado a un Programa en concreto, como se propone en su enmienda 153, produce desequilibrio presupuestario, salvo que ustedes me demuestren otra cosa.

Respecto a la enmienda 154, del Grupo Popular al Anexo II, para que no sean ampliables determinados créditos, en concreto los del V Centenario y los de cooperación internacional, debo decirle, empezando por estos últimos, que tiene su justificación en el artículo 4 del Real Decreto 825/88, de 15 de julio, que regula los fines de interés social a los que puede afectarse la asignación tributaria. De acuerdo con estas disposiciones, el crédito consignado en el proyecto de presupuestos tiene el carácter de provisional, pudiendo ser ampliado una vez conocida la liquidación correspondiente.

En cuanto al contrato programa del Estado V Centenario, que prevé la revisión anual actualizando las partidas de la cuenta de resultados por la relación entre el IPC real respecto al previsto, se observa claramente la necesidad de considerar ampliables los conceptos citados, puesto que, si no, no se podría asegurar, señorías, que se pueda cumplir el contrato programa.

El Grupo Popular, también a través de su enmienda 155 al Anexo II, pide que no sean ampliables los créditos del Banco Europeo de Inversiones. Este es un ejemplo típico de cómo a veces se proponen determinadas enmiendas que dificultarían de una manera muy seria la propia gestión. Tengan ustedes en cuenta, señorías, que el Gobierno está comprometido en ampliaciones de capital del Banco Europeo de Inversiones y que esas ampliaciones se realizan en ECUs, y que el valor de éste puede variar. Por consiguiente, se necesita que estos créditos sean ampliables, puesto que pudiera ocurrir que no se pudieran realizar las ampliaciones comprometidas. Por lo tanto, es claro que el citado crédito necesariamente debe ser considerado ampliable.

La enmienda 717, del Grupo de Convergència i Unió, sobre los accesos a las grandes ciudades, es una de las que puede estar perfectamente recogida en las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista y, por consiguiente, señorías, me atrevo a sugerir que sea retirada, puesto que la enmienda 1.821 que ha presentado nuestro Grupo al Plan Felipe de acceso a las grandes ciudades incluye una consignación muy superior, 50.000 millones en concreto, a la que ustedes citan.

Por otra parte, pretender dotar a la Generalitat en 17.500 millones para el Ayuntamiento de Barcelona con cargo a la Sección 31, porque éste atiende determinados

servicios estatales, que es lo que pide la enmienda 718 de Convergència i Unió, debo decir lo siguiente: no puede aplicarse a la partida de la Sección 31.

No puede aplicarse directamente a déficit, señorías. En todo caso, quizás ustedes se refieran a la 32 «Entes territoriales» y, por error, hayan citado la sección 31. De todas formas tengan en cuenta que la financiación del Ayuntamiento de Barcelona se ha materializado en los Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley de Haciendas Locales, lo cual no prevé dotaciones adicionales como la que plantea su enmienda.

Respecto de la posibilidad de transferir créditos a la Generalitat de Catalunya como consecuencia del traspaso de funciones en materia penitenciaria, tal como se pretende en su enmienda 719, cuando estaba estudiando esta enmienda, señorías, me preguntaba cómo se puede plantear una enmienda a este tema sin antes discutir algo tan escabroso y complicado con el correspondiente Ministerio. Creo que no es la vía de enmienda el mecanismo más oportuno. Considero que no es lo más adecuado poner una enmienda, y a ver qué pasa. Creo, señoría, que tanto usted, el portavoz del Grupo de Convergència en este acto, como yo, podemos hablar perfectamente con el Ministerio. Esto es algo que hay que hablar directamente con ellos viendo las posibilidades, y no ir directamente a la vía de enmiendas.

Señorías, en virtud de lo expuesto, el Grupo Socialista va a mantener el texto del artículo primero en sus propios términos.

Señor Presidente, muchas gracias

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos ahora al turno de portavoces comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto. Su portavoz tiene la palabra.

El señor FUENTES NAVARRO: Muchas gracias señor Presidente.

Creo que debemos mantenernos de nuevo y, sobre todo, después de las palabras del portavoz socialista, en nuestra enmienda y en otras enmiendas que van en la misma dirección de supresión de la regla quinta del artículo ocho, porque es evidente —y esto no ha sido desmentido porque no puede serlo— que esta regla quiebra con el principio de la no afectación. Esta regla establece claramente la discrecionalidad y la falta de control parlamentario sobre los actos de la Administración. Insisto en que sus palabras nos ratifican en estas afirmaciones. Su señoría nos ha señalado que, en modo alguno, se van a aplicar estas generaciones de créditos a percepciones salariales —dicho esto en terminos coloquiales— a las percepciones de personal, que pueden tener carácter de sueldo base, de complementos, etcétera. Pero yo me pregunto en qué se basa el portavoz socialista para esa afirmación porque, evidentemente, la norma no dice nada de eso. La norma permite perfectamente al Gobierno poder imputar estos créditos a gastos de personal. ¿Por qué? Porque el término «mejora de los servicios» es amplísimo y permite aplicarlo a diferentes supuestos. Yo creo que, si realmen-

te esa es la voluntad del Gobierno, lo que debería hacer el Grupo Socialista es aceptar la enmienda del Partido Nacionalista Vasco que establece una coletilla en la que se señala que en ningún caso se van a aplicar a percepciones salariales de los funcionarios o empleados laborales adscritos a estos servicios. Esa sería una forma de establecer claramente un control y una limitación para el Gobierno. Nosotros creemos que esta no es la vía —y lo señalamos ya— para mejorar los servicios. Creemos —lo hemos afirmado y lo reiteramos— que es importante mejorar las dotaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre todo en lo relativo a Hacienda, para la persecución del fraude fiscal. Creemos que debe dotársele de más y mejores medios, y de ahí que hayamos planteado una enmienda a la sección correspondiente, porque creemos que ese es el camino. No el camino aleatorio del posible exceso, o no, de sanciones y recargos, que puede darse o puede no darse, y si la mejora tiene que depender de unas circunstancias tan aleatorias, difícilmente podrá el Gobierno abordar seriamente estas tareas tan importantes. Por tanto, creemos que se impone la supresión de esta regla o, en cualquier caso, la aceptación de esa enmienda de la que ha hablado el portavoz socialista. Es necesario también mejorar los servicios del Ministerio de Hacienda por la vía de las dotaciones previas, establecidas en el proyecto por el Gobierno y debatidas por las Cámaras.

En lo que se refiere al artículo nueve y a los bienes del Ministerio de Defensa, nos encontramos otra vez con la quiebra del mismo principio. Se están afectando estos bienes a un Ministerio determinado, sabiendo todos como sabemos que pueden comportar unas plusvalías importantísimas que en modo alguno se justifican con la reposición. Esa es otra vía de hurtar al control de las Cámaras la actuación del Gobierno. Se trata de introducir elementos claros de discrecionalidad en ambos casos y de ahí que mantengamos nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fuentes.

Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco. (Pausa.) El Senador Aguirre tiene la palabra.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Gracias, señor Presidente.

Yo creo que lo ha explicado con mucha claridad el Senador Fuentes. Senador García, le hago una propuesta concreta: si usted me da su palabra de que esto no se va a aplicar a ninguna retribución de funcionarios, yo retiro las enmiendas; sólo si usted dice que no se aplicará; esto, tal y como está redactado, se puede aplicar y usted lo sabe, porque dice «a la mejora del servicio», mejora del servicio de inspección y control. Nosotros tenemos también responsabilidades de recaudación. Todos sabemos lo que son mejoras de inspección y control. Si usted me da su palabra de que no se va a aplicar, en ningún caso, una

sola peseta a mejoras retributivas salariales, yo retiro las enmiendas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Aguirre.

Grupo del CDS. (Pausa.) Muchas gracias, señoría. Grupo de Convergencia i Unió. (Pausa.) El Senador Cardona tiene la palabra.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Respecto de la tan debatida regla quinta del artículo ocho, usted puede dar su palabra, pero ¿por qué no admitir, después de créditos, con la única excepción del capítulo uno, «gastos de personal»? Son ganas de no recoger ninguna enmienda. Usted puede decir lo que quiera y nosotros podemos creerlo, pero por precaución, por cautela ¿por qué no lo introducimos aquí?

En cuanto a la enmienda 639, sobre la desviación presupuestaria de la sanidad, dice usted que, como no está presupuestado, porque es una desviación posterior, no se puede recoger. ¿Es que las comunidades autónomas no pueden presupuestar? Si en un caso es imposible, en el otro es peor. Hay que instrumentalizar de la forma que sea esas desviaciones. Si para el INSALUD, a nivel estatal, tiene un efecto rápido, para las comunidades autónomas también debe tenerlo, porque de otra forma se les crea un problema de liquidez económica. Eso es evidente.

En cuanto a la enmienda 641, referente a centros nacionales, diré que nosotros pedimos sólo que el Centro Nacional de Paraplégicos de Toledo y el Centro Nacional de Silicosis de Asturias no tengan la consideración de centros nacionales a los efectos de determinar la participación de las comunidades autónomas. Usted me dice que todos los paraplégicos y los que padecen silicosis vayan a los centros nacionales. Hay otros centros competentes sanitarios que están tratando estas patologías, sin que esos centros tengan carácter nacional. Por lo tanto, saquemos de los presupuestos generales el presupuesto de estos dos centros y repartámoslo equitativamente para las comunidades autónomas; si no, parece que se hacen juegos malabares con el dinero.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cardona.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador García Royo.

El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente. Brevemente, quisiera pedir perdón al compañero García, tocayo en apellido, porque quizá me he exaltado en mi intervención. No ha sido más que una muestra de mi indignación —no crea que se debe a que sea o no sea conservador—, indignación que nacía de la falta de cómputo en las cuantías de los gastos. No obedecen a nada más, Senador García.

Efectivamente, usted me ha dicho que esto se venía observando y que se han estudiado todos esos extremos por el Gobierno Socialista, pero de la lectura muy reposada

de la ley anual se deduce que aquí hay una fragmentación, hay una mutación total y en beneficio exclusivamente en cuanto al año 1990 de la Ley General Presupuestaria. Es una Ley que ustedes han modificado y con la que tuvieron pequeños problemas, pero ya que está modificada vamos a respetarla todos, porque si ustedes cuando llegan los presupuestos quieren variar el principio del ordenamiento jurídico de universalidad y pasan automáticamente a decir que la Ley General Presupuestaria ya no sirve, comprenderán que eso debiera ser para todos.

En cuanto a la inspección y control —el problema de la dichosa y cacareada regla quinta—, yo tengo una duda que voy a exponer con todos los respetos. Sé y me consta que hace algún tiempo el Gobierno Socialista, sobre todo el Ministerio de Hacienda, ha tenido pequeños problemas con este colectivo. Como usted sabe, toda mi vida me he dedicado a la asesoría y recuerdo cómo funcionaba aquello, que bien funcionaba el principio del humanismo, el principio del diálogo, el principio de la prueba. Y yo me pregunto ahora ¿no será que, como consecuencia de esa situación laboral en que está ese sector de inspectores, ustedes quieren premiarles diciéndoles: servicios más recargos, para vosotros? Porque si es así y no se acepta la enmienda del Grupo de Convergencia i Unió, en la que se decía que no habría de ser asignado al capítulo primero de gastos de personal, no lo acabamos de entender. Repito que no es más que una duda. Usted me la aclarará, si quiere, en su momento.

Finalmente, usted dice que podrían haber cifrado el déficit. Yo recuerdo —y al Senador Cercós pongo por testigo— que en los primeros presupuestos que debatimos aquí venía con cifras totales el déficit inicial presupuestario y también cómo se iba a financiar. Era donde íbamos todos —yo entonces no estaba en la oposición—, a ver cómo se financiaba aquel déficit, pero ustedes no. Ustedes ni siquiera dicen cuál es el déficit, ni siquiera dicen cómo lo van a financiar y ni siquiera dicen qué apelaciones tienen. Porque conforme con que vayan a apelar al Banco de España, pero van a apelar a la Deuda y van a apelar —entendemos— a los créditos extraordinarios, a los suplementos de crédito. Eso es lo que se deduce. Entonces ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen si es un billón 74.000 millones o son dos billones 24.000 en términos de necesidad? Son unas preguntas muy concretas, que sé que me las va a contestar.

El control del gasto «ab initio» es imposible en esta Cámara. Puede que después, con esos formidables documentos que nos remite la Intervención General del Estado, a toro pasado, cada tres meses o cuatro, sepamos algo, pero antes no estamos en condiciones de ello en esta Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García Royo. Grupo Socialista. *(Pausa.)* El Senador García Sánchez tiene la palabra.

El señor GARCIA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente. Quiero contestar en primer lugar al señor García Royo para que no se me vaya la idea que ha apuntado, puesto

que, en lo relativo al déficit público, efectivamente, antes no le había respondido. Quiero decirle lo siguiente traducido a las economías domésticas para que todos nos entendamos. Si una economía doméstica ahorra al año un millón de pesetas, compra un inmueble con un crédito y luego tiene que financiarlo y pagar las correspondientes amortizaciones de principal y de intereses, usted coincidirá conmigo que ese millón de pesetas necesariamente tiene que ir destinado a los gastos financieros de devolución de intereses y de principal que ha supuesto una inversión. Por tanto, no me está diciendo nada nuevo. Lo que pasa es que usted no está contemplando el análisis correcto del déficit. Pero aun admitiendo su planteamiento, señorita, si usted quiere ver la evolución del déficit considerando los activos y pasivos financieros, verá cómo, en el ejercicio 1990, también disminuye con respecto a 1989. No es otra cosa, señorita. Es la realidad.

Respecto a la regla quinta, se han hecho determinadas afirmaciones. Se me ha preguntado que por qué tengo que decir si va a gastos de personal o a gastos de inversión. Y ¿por qué no pueden ir destinadas esas consignaciones de crédito a la mejora de los servicios de inspección, cuando al fin y al cabo a los socialistas nos gusta tanto y nos agrada que se siga avanzando en la lucha contra el fraude fiscal?

De todas formas, señoritas, yo no he dicho lo que ustedes dicen que he dicho. Como sabía que éste era un tema muy comprometido, antes he leído textualmente lo que ahora voy a repetir: En ningún caso se establece que dicho mecanismo sea un medio de retribuir al personal afecto a labores de inspección y control, ya que tales retribuciones se encuentran taxativamente reguladas en la Ley 30/1984 y en el Título III del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Eso es exactamente lo que he dicho y también que están perfectamente consignadas en el lado de los ingresos y en el de los gastos las partidas correspondientes con los fondos correspondientes.

Por último, quiero decir al Grupo de Convergencia i Unió que realmente no entiendo lo que pretenden respecto de la exclusión del Centro Nacional de Silicosis de Asturias y el de Parapléjicos de Toledo como centros nacionales, a efectos de determinar la participación de las comunidades autónomas en los gastos del INSALUD. Ha hecho usted un análisis que es absolutamente falso. Yo podía haber dicho en mi primera intervención, pero he procurado evitarlo, que si se aceptara esta enmienda se incrementaría el presupuesto de gastos sin financiación en el lado de los ingresos. Con eso, señorita, sería suficiente para usted, puesto que no hay financiación en el lado de los ingresos. Podía haber dicho eso, pero me he limitado a otra serie de análisis que me parecieron más oportunos. De todas formas, incluso así, no me parece correcta la postura de su Grupo; ustedes están en su derecho de defender su enmienda, pero comprenda también la posición del Grupo Socialista para rechazarla.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador García.

Hemos terminado el debate del Título I. Entramos ahora en el debate del Título II.

Las votaciones de las enmiendas y del articulado las fijaremos a partir de las nueve y media de la noche.

Título II Vamos a comenzar el debate del Título II, artículos doce a dieciocho y anexos V y VI.

Enmiendas del Senador Fuentes Navarro, del Grupo Mixto, que se corresponden con los números 815, 816, 817, 818 y 819.

Para su defensa, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. (*El señor Vicepresidente, Bayona Aznar, ocupa la Presidencia.*)

El señor FUENTES NAVARRO: Señor Presidente, señorías, nuestras enmiendas inciden en algunos de los aspectos a los que me he referido antes.

La enmienda número 815, relativa al artículo 14, pretende la supresión del último inciso que señala que cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejen, se solicitará el informe a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Ello se refiere a cuando la autoridad que haya de otorgar la aprobación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser normalmente cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias.

Nosotros creemos que en estos supuestos específicos debería ser siempre preceptivo el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que no debería dejarse al arbitrio de que las circunstancias concurrentes lo aconsejen, porque con ello se introduce una vía discrecional que nosotros consideramos inaceptable.

La enmienda número 816 se refiere a la revisión de los precios en los contratos. Estimamos que los que tengan una ejecución prevista inferior a un año no deberían estar sujetos a revisión de precios. En cualquier caso, se trata de una enmienda que se defiende en sus propios términos y en la que creo que no debo extenderme mucho.

Sí creo, sin embargo, que es importante referirme a la enmienda 819, que coincide con alguna otra de las enmiendas que se han presentado en esta Cámara y que se refiere ni más ni menos que al control sobre las ayudas del Estado, sobre las subvenciones básicamente. Es cierto que existe ya un mecanismo de control en la concesión de las subvenciones, pero, a nuestro juicio, no existe un control suficiente en cuanto a la aplicación posterior de estas subvenciones. De ahí que esta enmienda lo que pretenda sea articular el procedimiento de concesión y control de estas subvenciones sirviendo, naturalmente, como control para la Administración del Estado a la hora de su adjudicación y también como control al beneficiario, al administrado, en cuanto a que destine estas subvenciones a los fines legalmente previstos.

De las restantes enmiendas, 817 y 818, la 817 se refiere a facultades que se adjudican al Ministerio de Economía y Hacienda en relación con las modificaciones de crédito que se financien con cargo a remanentes del INSALUD. Nosotros creemos que estos remanentes deben ser, en cualquier caso, gestionados por el propio INSALUD Y que otra cosa va en contra de la autonomía de gestión de este

organismo. La enmienda 818 es, a nuestro juicio, simplemente una mejora técnica; pretendemos que se suprima el término «liquiden» porque creemos que no es correcto señalar que se pueda liquidar una obligación sin que previamente haya una ampliación de créditos.

Por todo ello, señorías, insistimos en estas enmiendas, que, como he dicho antes, quieren reducir, en la medida de lo posible, los mecanismos que se introducen en esta ley de presupuestos, que abonan la discrecionalidad del Ejecutivo en relación con los caudales públicos. Creemos que es deseable, y hoy más que nunca, dotar de estos mecanismos de control a la Administración y al administrado en las subvenciones y por todo ello pedimos su voto favorable.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Gracias, Senador Fuentes.

Supongo que el turno en contra se realizará al final del Título, como la vez pasada. (*Pausa.*) Por tanto, damos la palabra al Senador García Royo, para defender su enmienda 1.177.

El señor GARCIA ROYO: Muchas gracias, señor Presidente.

Quería señalar una pequeña omisión de su señoría, que dice: artículo 16.2; es el artículo 16.2 de la Ley General Presupuestaria. Podía haberse llamado disposición adicional.

Pretendo que en el artículo dieciséis de la Ley General Presupuestaria, punto dos, después de decir: «así como los ingresos y pagos que de ellos se derivan» se añada «la fiscalización de los objetivos alcanzados por los respectivos programas presupuestarios». La razón de esta enmienda, señor Presidente, es que, desde la aprobación de la Ley de Auditorías, recientemente existe una normativa europea en cuanto a que la fiscalización de los presupuestos del Estado se haga no como venimos haciéndolo ahora, quizá con un aspecto orgánico o funcional, sino por programas. Yo creo que no costaba nada admitir esta enmienda, puesto que no es palabra mía, sino de la Intervención General, que ha dicho que es preceptivo y acometerá como mínimo los controles de los programas en cuanto a grado de realización de los objetivos postpresupuestarios y desviaciones físicas y financieras que se hayan producido en relación con las previsiones realizadas y, finalmente, causas de tales desviaciones.

Esto último, señor Presidente, está pronunciado por la Intervención General de la Administración del Estado. Lo que pretendo, pues, como repito, es la modificación del artículo 16.2, pero de la Ley General Presupuestaria.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Gracias, Senador García Royo.

No hay más enmiendas de Senadores individuales; por tanto, pasamos a las enmiendas de Grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, el señor Aguirre, para

defender las enmiendas 930 y 931 por un tiempo de cinco minutos.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Gracias, señor Presidente.

Nuestra enmienda 930 va en la dirección del que ya hemos hablado más de una vez; es decir, en los presupuestos generales del Estado, en el artículo doce, se habla otra vez de un tema que está comprendido en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, artículo 61.2; por tanto, no vemos la necesidad de que esto esté otra vez en la ley de presupuestos generales del Estado cada año. O establecemos para qué sirven las leyes o estamos hablando de cosas distintas.

La enmienda 931, como es una enmienda puramente técnica de redacción que, a nuestro entender, mejora lo que dice el artículo trece, la damos por defendida en sus propios términos.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Muchas gracias, Senador Aguirre. Para defender las enmiendas 530 a 532, del Grupo del Centro Democrático y Social, el Senador Quetglas tiene la palabra.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo tiene a este Título una propuesta de veto a las innovaciones que propone el texto sobre la contratación. La mayoría de ellas, no todas, es cierto, tienden a incrementar la discrecionalidad en la gestión de los capítulos correspondientes gestionados por la vía de los contratos del Estado. No entendemos algunas de las pretensiones de incremento de mínimos para determinadas contrataciones; por ejemplo, duplicar el mínimo de 1.000 a 2.000 millones para que el órgano de contratación sea de rango ministerial.

En cualquier caso, nuestra objeción fundamental a este Título se refiere al control de las subvenciones. La gestión de los créditos autorizados por vía de contrato en relación a la gestión de los que se efectúan por vía de subvenciones, Capítulos cuatro y siete, presenta una diferencia impresionante en cuanto a su control. Si pensamos cómo actúa la Intervención General del Estado en cada una de las fases de desarrollo del gasto de un crédito autorizado que se ejecuta por vía de contratos del Estado y el control que, vía dirección de ejecución de la obra del servicio por parte de la Administración, supone para el contratista, y lo comparamos con el control de la gestión que se efectúa desde la Administración del Estado para aquellos créditos que se gestionan vía Capítulos cuatro y siete, la diferencia es tan impresionante, tan abismal, que empieza a preocuparnos, máxime si tenemos en cuenta que desde 1982 a 1989 las subvenciones, los créditos gestionados por los Capítulos cuatro y siete se han multiplicado por cuatro, lo cual es lógico. Es lógico que, en un Estado moderno, en un Estado que no quiere crecer de manera desmesurada y, sin embargo, intenta hacer partícipe a la sociedad civil en el ámbito de la consecución de objetivos de política económica y social, crezcan estos ca-

pítulos de subvenciones, pero lo que no es lógico es el elevadísimo desnivel, la enorme diferencia que existe entre el control de unos y otros.

Nosotros pretendemos con nuestra enmienda 531, que es coincidente con una enmienda que ha presentado también el Grupo Mixto, Izquierda Unida, y con otra que ha presentado el Grupo Popular —y no es casualidad que sean coincidentes, sino que es un texto que ha desaparecido del proyecto entre su fase de anteproyecto y su fase de proyecto y no entendemos que de manera justificada—, cuestiones tan simples, tan elementales y tan lógicas como que las actuaciones de la Intervención General del Estado incluyan la comprobación de los usos y correctos destinos de los fondos procedentes de subvenciones, tanto en su aspecto legal como económico; que el beneficiario, sea una familia o sea una empresa, use las subvenciones para lo que fueran destinadas; que se exija el mantenimiento de la actividad; que se comunique a la Administración la existencia de otras subvenciones concurrentes para saber hasta qué punto con dinero público se está subvencionando una actividad; que se fije el papel de las entidades colaboradoras cuando sean éstas las que efectúan el reparto de las subvenciones; que se exija una normativa previa con sujeción a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad; que se regulen los supuestos en que procederá la devolución por incumplimiento; y en definitiva, que se establezca un régimen sancionador. Porque el control que se efectúa de las subvenciones, simplemente sobre la base de un muestreo «ex post» por parte de la Intervención General, no es ni mínimamente satisfactorio.

Nuestra enmienda número 532, de un tenor completamente distinto, se refiere al Capítulo segundo de este Título de la gestión de los presupuesto docentes. Pretendemos que los umbrales mínimos de renta para acceder a becas por estudios medios o superiores se consideren el doble cuando no exista un centro adecuado para los estudios pretendidos en el municipio correspondientes. Este es un tratamiento que estimamos que es justo, en el sentido de que no es lo mismo considerar una renta familiar cuando las posibilidades de desarrollo educativo o de tener unos estudios son dentro del municipio, a cuando no. Por lo tanto, ya que son los umbrales mínimos de renta los que determinan el derecho subjetivo a acceder o no a las ayudas, a las becas del Ministerio de Educación y Ciencia, que sean estos umbrales mínimos los que tengan en cuenta un criterio de lejanía geográfica que interviene de manera decisiva a la hora de plantear las necesidades y las posibilidades de acceso a esa educación por parte de las familias.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Gracias, Senador Quetglas.

Para defender las enmiendas números 643 y 717, 718 y 719, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

A ese Título II tenemos la enmienda 643, que se refiere al artículo 16 sobre el módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de Centros Concertados, y en cuyo párrafo segundo se establece que el incremento previsto sobre las retribuciones del personal docente tendrá efectividad desde el día uno de enero de 1990, sin perjuicio de la fecha en que se apruebe el respectivo Convenio de la Enseñanza Privada, si bien hasta su aprobación no será satisfecho. A continuación, determina que el componente del módulo destinado a otros gastos surtirá efecto a partir del comienzo del curso 1990-1991, hasta cuyo momento se satisfará idéntico importe que el señalado para el curso anterior.

Nuestra enmienda propone que el incremento del módulo correspondiente al año 1990 sea en su totalidad a partir del uno de enero de 1990. Y no nos vale la razón de que otros gastos se calculan en función del coste del curso académico, porque, de hecho, estos gastos cubren las nóminas de personal no docente, administrativos, psicólogos, personal de limpieza, etcétera. Las necesidades se determinan igual que las del personal docente y no encontramos razón que justifique el desfase; no entendemos por qué se trata con criterios diferentes a un personal y otro.

En cuanto a las demás enmiendas, las damos por defendidas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Gracias.

Efectivamente, y si no corrija su señoría, sólo tenía una enmienda, la número 643, a este Título, puesto que las otras son al Anexo II que, aunque figuran aquí como propias del Título II, han sido ya debatidas en el Título anterior.

Por tanto, pasamos a las enmiendas del Grupo Popular, las enmiendas comprendidas entre los números 32 y 45, y la enmienda número 156.

El señor Martínez Randulfe tiene la palabra por un tiempo de quince minutos.

El señor MARTINEZ RANDULFE: Señor Presidente, señorías, las enmiendas que el Grupo Popular presenta a este Título II y a su Anexo son todas ellas puntuales y concretas, y que vamos a pasar a analizarlas.

La enmienda número 33 es de supresión. Existe una Ley de Contratos del Estado. Si esa Ley no es buena, tráiganse un proyecto y modifiquémosla, pero no echemos parches.

La enmienda número 34 también es de supresión, ya no sólo por motivos de garantías jurídicas, sino por congruencia con toda la política económica que ustedes vienen sosteniendo. Se aprobó el Real-Decreto 7/1989 y en su artículo 9 se establecen unos coeficientes de actualización para el caso de venta de bienes que se hayan adquirido con anterioridad a una fecha. El coeficiente para la actualización de los bienes adquiridos en 1988 y vendidos en 1990 es el 1,038. Y ustedes, señorías, aplican para la actualización de las facultades que se conceden a los Ministerios el cien por cien; de 1.000 a 2.000 millones. Cree-

mos que esto no es congruente con la política que ustedes mismos están manteniendo. Si hablamos de actualización de sueldos, hablamos en función de unos coeficientes. Sin embargo, cuando hablamos de actualización de facultades para la Administración, nos disparamos.

En el mismo sentido va la enmienda número 35.

Las enmiendas al artículo dieciséis, uno, son la número 36 y siguientes. Los presupuestos son, señorías, para el año 1990. Deben entrar en vigor, con carácter retroactivo, el día uno de enero de 1990. No entendemos por qué a la hora de determinar las nóminas de los profesores de los centros concertados se aplica un criterio distinto, a partir del curso escolar 1990-91. Seamos congruentes, señorías, máxime después de oír a nuestro compañero, y por eso no lo repito yo, que ha dicho que se aplican criterios distintos dentro de un mismo ámbito escolar.

La enmienda número 37 va encaminada a que si ustedes quieren convertirse en los pagadores de los profesores de los centros de enseñanza lo hagan con todas las consecuencias. Si son pagadores, sean también empleadores. Y esos profesores, que son, al menos, tan dignos, y que tiene la misma misión, la misma entrega, la misma abnegación y el mismo trabajo que los de los centros públicos, deben cobrar lo mismo que ellos. Si va a ser ustedes los pagadores, no paguen a unos de una manera y a otros de otra. Son todos profesores de enseñanza general básica.

Con la enmienda número 38 lo que pretendemos, señorías, es no distinguir donde la ley no distingue.

Las enmiendas al artículo dieciséis, dos, son las número 39, 40 y 41. Las mantenemos en sus términos, en congruencia con las razones antes expuestas. De no admitirse la supresión de ese número dos del artículo dieciséis, en la enmienda 40 pretendemos una modificación, acomodándole a la política que ustedes mismos están defendiendo.

La enmienda número 42 es al artículo dieciséis, tres. Pretendemos la equiparación de los centros concertados con los centros públicos, dotándolos de profesores de apoyo igual que a los centros públicos.

Las enmiendas 43 a 45, al artículo dieciocho, tres, las doy por defendidas.

Y termino, para ser breve, porque es pequeño el auditorio y, por otra parte, porque sé que es pequeña también la capacidad de convencimiento que tengo, porque, si no, ya hubieran admitido algunas de estas enmiendas.

Somos partidarios, señorías, y lo saben ustedes de siempre, de que no se aproveche esta ley de presupuestos para modificar un montón de normas jurídicas. Nos lo oyeron durante toda la legislatura anterior y nos lo vuelven a oír ahora. ¿Que se produce con esta práctica tan cotidiana en todas las leyes de presupuestos? Hacer más árduo, más complejo y más difícil el conocimiento de la norma. Va a ser necesario que nos dediquemos a elaborar textos refundidos de leyes porque, de lo contrario, no va a haber quién se entienda. Con esto lo que estamos consiguiendo es que la sociedad nos critique de oscurantismo legislativo y de producir la indefensión en el administrado. Es preferible que cuando existan necesidades se acuda a proyectos puntuales.

Hagamos lo que decía hace un momento su compañero, el señor Barreiro: retiremos la paja y dejemos el grano. Al grano en la ley de presupuestos. Y la paja —aunque no sea ciertamente paja—, que, en este caso son las otras normas que aquí se varían, nada más y nada menos que 44 conceptos, dejémosla para leyes puntuales.

Termino pidiendo su voto favorable para estas enmiendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Gracias, Senador Martínez Randulfe.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador García Sánchez.

El señor GARCIA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías, por el tono de su intervención.

Quiero empezar contestando al veto interpuesto a la totalidad del Título por el Grupo del Centro Democrático y Social. Quiero decirles que este Título permite plenamente dotar a los órganos administrativos de los instrumentos precisos para llevar a buen fin la ejecución del presupuesto.

Al Grupo Socialista le agradan las innovaciones contenidas en materia de contratación del Estado, al objeto de evitar contradicciones existentes con la normativa comunitaria y procurar una mayor adaptación a las exigencias actuales de la contratación pública. Asimismo, señorías, también es importante para nosotros que, mediante modificación del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, se ajuste la gestión presupuestaria de la Seguridad Social a los cambios introducidos en su régimen de financiación.

Las normas que se contienen en el Título II del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado tienen por objeto contribuir a una mayor racionalización, en mi opinión, y a una mayor agilización del proceso de ejecución presupuestario, ya sea adaptando la normativa vigente en la materia a las nuevas circunstancias que se producen o innovándola en aquellos aspectos en que se ha mostrado susceptible de mejora. *(Un señor Senador interrumpe con el gesto orador.)* Lo siento, señorías, ya sé que tienen ustedes prisa, pero yo, evidentemente, como he trabajado en este Título, aunque no las hayan defendido, voy a contestar a todas y cada una de las enmiendas hasta agotar el tiempo de que dispongo.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Senador García Sánchez, su señoría tiene un límite total de treinta minutos y tiene absoluta libertad para consumirlos como crea conveniente.

El señor GARCIA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente. Es que se me estaba haciendo gestos.

Su Grupo ha reconocido en el Congreso que estos presupuestos eran los de mayor ámbito, más controles y más disciplina de gastos, como le recordé en el debate de Comisión. Partiendo de este reconocimiento, me parece in-

justo que ustedes estén en contra de los procesos de ejecución y de una mayor racionalización, de acuerdo con lo que se contiene en este Título.

Al Grupo Nacionalista Vasco, que en su enmienda 913 pide la supresión del segundo punto del artículo 12, debo decirle lo que ya de alguna forma le dijo el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados: el párrafo que pretende sustituir la enmienda es de obligado cumplimiento, puesto que el artículo 12 de la vigente Ley de Contratos del Estado prohíbe el pago aplazado de los contratos, entre ellos, el de compraventa, a menos que una ley lo autorice expresamente. Dicha autorización expresa es precisamente la que se habilita en el párrafo cuya supresión proponen ustedes y que nuestro Grupo considera que hay que mantener.

En la enmienda número 32, del Grupo Popular, al artículo trece, de adición, se pretende evitar los fraccionamientos en el pago de obras. Esto es algo que está previsto en la Ley de Contratos del Estado; lo dije en Comisión y lo repito ahora; no veo el motivo de esta enmienda.

En cuanto a la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, de supresión de un párrafo del artículo trece, en mi opinión, no tiene mayor importancia decir todas aquellas obras o decir todos aquellos proyectos de obra, máxime cuando el propio título del artículo trece excluye cualquier confusión. El artículo dice exactamente: «Contratación directa de inversiones». No veo, pues, ningún problema de confusión.

Se han presentado tres enmiendas del Grupo Popular al artículo catorce, las números 33, 34 y 35, y la número 815, del Grupo Mixto. Señorías, partiendo de la base de que el grado de control al que se somete el Ejecutivo está fuera de toda duda —y el Grupo Socialista parte de esa base—, no nos parece aconsejable que se entorpezca la labor de la Administración haciendo que se acumulen los expedientes, lo que ocurriría de prosperar algunas de estas enmiendas. Razones, pues, de eficacia, nos llevan a rechazarlas. Por último, quiero decir al portavoz del Grupo Popular que la materia de contratación ha sido normalmente regulada por las leyes de presupuestos del Estado.

En cuanto a la enmienda 816 del Grupo Mixto, al artículo quince, que pretende limitar las revisiones de precios, en mi opinión dicho Grupo no se da cuenta de que las revisiones de precios están claramente establecidas en la Ley de Contratos del Estado. Reitero, pues, lo dicho en Comisión.

Con respecto a las enmiendas números 643, de Convergencia i Unió, y 36, del Grupo Popular, que pretendan que la efectividad económica del incremento en la partida «Otros gastos» sea a partir del 1 de enero y no del comienzo del curso 1990-91, convendrán conmigo en que no puede resultar oportuno variar la secuencia temporal de dicho componente del módulo, cuya aplicación se inició en septiembre-octubre de 1986. La efectividad del incremento en la partida en 1989 fue a partir del comienzo del curso 1989-90, en coherencia con la sistemática de años anteriores, por lo que parece lógico que dicha partida experimente una elevación a partir del curso 1990-91, trans-

currido un año. No procede, en mi opinión, aceptar estas enmiendas a tenor de lo expuesto.

Se han presentado seis enmiendas al artículo dieciséis, del Grupo Popular: de la número 37 a la número 42 y una del señor García Royo: la número 1.177. No estamos de acuerdo con la enmienda número 37 del Grupo Popular, que justifica diciendo que el Estado no debe sustituir al patrono. Usted hablaba de pagador y empleador. Señoría, el Estado sustituye al patrono, como usted dice, porque lo establece la Ley. Lo establece la LODE y, por consiguiente, no veo qué sentido tiene esa enmienda. La Administración efectúa el pago como pago delegado y esa delegación de pago está en la LODE, concretamente en el artículo 49.5, para más precisión. No es, pues, en mi opinión, válida la argumentación de su señoría en esta tribuna.

En cuanto a la enmienda número 38, del Grupo Popular pretende suprimir la siguiente frase del artículo dieciséis, uno, párrafo tres —y leo textualmente—: «La distribución de los importes que integran los gastos variables se efectuará de acuerdo con lo que se establezca en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos». Deben tener en cuenta que el artículo 13 del Real Decreto 2.377/1985, que aprueba el Reglamento de normas básicas de los conciertos educativos, establece la diferenciación de los gastos que integran el módulo económico entre partidas.

Por otra parte, esta diferenciación se establece en los módulos fijados en el Anexo V y es la siguiente —y voy a leerla textualmente—: Primero, salario del personal docente, incluidas las cargas sociales abonadas a este personal por la Administración en concepto de pago delegado. Segundo. Otros gastos abonados directamente al centro concertado, quien deberá justificar su aplicación. Tercero. Otras cantidades para gastos variables, artículo 13 C) del Real Decreto referido y que incluye, entre otros, la antigüedad.

Esta última partida dice que se recogerán en un fondo general que se distribuirá de forma individualizada entre el personal docente de los centros concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor y aplicando criterios análogos a los fijados para el profesorado de centros públicos. No se trata, señoría, de añadir una distinción más, sino de cumplir la normativa vigente.

El Grupo Popular también pretende, a través de la enmienda número 39, suprimir del texto legal el párrafo que autoriza al Gobierno a fijar las cantidades a percibir de los alumnos de estos centros por actividades complementarias y de servicio. Esto se regula en los artículos 51.3 y 4 de la LODE y justifica su propuesta en que debería regularse por ley. Se estiman innecesarios estos cambios, señoría, puesto que la percepción de cantidades por estas actividades y la determinación de la cuantía que corresponde percibir se regula en el artículo citado de la LODE y en el artículo 15.2 del Real Decreto 2.377/1985, que aprueba el reglamento de normas básicas de los conciertos educativos.

Al margen de esto, debe resaltarse la contradicción en

que se incurre en la justificación de la propuesta, que pretende la eliminación del artículo del mismo texto legal en que se dice debería regularse. Tampoco me parece correcta la redacción que propone el Grupo Popular al primer párrafo del artículo 16.2, enmienda 41, puesto que, en primer lugar, no se circunscribe la posibilidad de financiación complementaria de los alumnos a los conciertos singulares, no se especifica nada al respecto, cuando en los demás conciertos es totalmente gratuita la enseñanza. En segundo lugar, hace una remisión a la LODE y a las normas vigentes en materia de conciertos, suprimiendo la garantía de financiación pública que, como mínimo, se establece.

Respecto a la enmienda 532, del Grupo del Centro Democrático y Social, debo decir a sus señorías que hasta el momento no han efectuado el estudio que les había pedido sobre la cuantificación del gasto que supone esa enmienda sobre las becas. Evidentemente, eso es previo para proceder a la aprobación o no de cualquier enmienda y creo que a su portavoz personalmente le había pedido esa cuantificación del gasto, que, de momento, no me ha entregado.

En cuanto a las enmiendas al artículo dieciocho, la 817 y 818, del Grupo Mixto y la 43, 44 y 45, del Grupo Popular creo sinceramente que adolecen de importantes defectos, señorías. Por ejemplo, el Grupo Mixto debe tener en cuenta que toda modificación del presupuesto del INSALUD que implique un incremento neto del mismo debe ser autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda, puesto que dicha modificación la financiará, en definitiva, el Estado. La expresión «... y liquiden...», que pretende suprimir el Grupo Mixto, es una reproducción del propio texto refundido de la ley.

Por otra parte, el Grupo Popular pretende suprimir el artículo 150.4 de la Ley General Presupuestaria y parece desconocer, en mi opinión, la regulación actual de las imputaciones de crédito en los presupuestos públicos. Además, la enmienda no supone una ampliación de las posibilidades de imputación de obligaciones de ejercicio pasado a ejercicio presente sino, al contrario, una limitación a tal posibilidad, adecuando tal materia en el ámbito de la Seguridad Social, a lo que ya está establecido desde hace años en el Presupuesto del Estado.

Tampoco veo justificada la enmienda 44 del Grupo Popular, al que debo decir que, teniendo en cuenta la doctrina que ha sentado el Tribunal Constitucional, difícilmente puede aceptarse la justificación de la enmienda 45; por el artículo 18 se modifican determinados preceptos de la Ley General Presupuestaria, modificaciones que han venido siendo una constante en leyes anteriores.

Paso definitivamente a las enmiendas sobre el control de subvenciones, del Grupo Mixto y del Centro Democrático y Social. Señorías, los textos que ustedes han presentado pueden ser compartidos por el Grupo Socialista en cuanto a filosofía de fondo, al margen de algunas discrepancias que no afectarían a los objetivos finales que se persiguen. Estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. Pero al portavoz del Grupo Socialista que les habla no le parece prudente el momento. Creo que hay que esperar a

los Presupuestos —que estarán ya ahí, en breve plazo— para 1991. ¿Y por qué hay que esperar? Pues entiendo que porque las implicaciones que el régimen de subvenciones públicas tiene, tanto en el ámbito del sector público estatal como en el de otras administraciones públicas e incluso en la Comunidad Económica Europea, hacen aconsejable demorar el establecimiento del mismo a la realización de estudios previos necesarios para evitar las posibles disfunciones que se pudieran producir en estos ámbitos. Y lo digo aun estando de acuerdo con el fondo de la cuestión que se deriva de sus enmiendas.

En efecto, el régimen propuesto puede incidir directamente en determinadas empresas estatales cuyo único objeto actual lo constituye la financiación de determinadas actividades que, a la luz de dicho régimen, pudieran ser consideradas como subvenciones, situación que podría llevar a la desaparición de estas empresas. De otro lado, existen muy variadas normas de carácter legal reguladoras de distintos tipos de subvenciones y, por lo tanto, parece aconsejable que el nuevo régimen regulador de las subvenciones abarque todas, o al menos la mayor parte, de las actualmente reguladas por normas especiales, evitando así la entrada en vigor de un régimen que, «ab initio» carecería de la generalidad precisa.

Por último, la integración del régimen de subvenciones con las previsiones que, al efecto, han realizado los órganos competentes de la Comunidad Económica Europea plantea problemas competenciales que merecen, señorías, un estudio más reposado. Por ello, en nombre de mi Grupo, les pido que se aplace este debate para los próximos presupuestos, una vez que esos estudios estén realizados.

A tenor de lo expuesto, señorías, señor Presidente, el Grupo Socialista mantendrá el texto en sus propios términos y votará en consecuencia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar) Gracias, Senador García Sánchez.

Se abre el turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Fuentes.

El señor FUENTES NAVARRO: Gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor García, por sus palabras.

En relación con las enmiendas que tenemos presentadas a este Título, y que han sido, en principio, rechazadas, queremos señalar que la 815 se refiere a supuestos excepcionales. Se trata, ni más ni menos, que de una Junta Consultiva de Contratación, que está establecida y que tiene estas funciones. Lo que se pretende es eliminar la discrecionalidad que aparece en el texto. Porque si se establece que, en determinadas circunstancias, entenderá la Junta de Contratación y será preceptivo su informe pero a continuación se dice «cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejen», la realidad es que es como si no se dijera prácticamente nada. Todo el preámbulo de la intervención de dicha Junta queda desvirtuado en función de esta coletilla. De ahí que creamos que es impor-

tante mantener esta enmienda e introducir esta modificación en el texto, porque creemos que desvirtúa totalmente lo previsto. En cualquier caso, no se nos pueden alegar razones de celeridad de la Administración ya que —insisto— son supuestos excepcionales. La Junta Consultiva de Contratación puede actuar con celeridad pero en cualquier caso es un mecanismo importante de garantía.

No voy a insistir más en la cuestión de las revisiones de precios. Efectivamente, está establecido el mecanismo. Lo que nosotros planteamos es una pequeña modificación de ese mecanismo, sobre todo teniendo en cuenta las tasas de inflación en nuestro país. Y nos referimos muy en concreto a los contratos de obra cuya ejecución está prevista en menos de un año. Se trata, pura y simplemente, de esa pequeña modificación pero que creemos que es importante y que sí va a redundar en beneficio de la Administración y en beneficio de la celeridad administrativa que tanto se proclama.

En relación con los remanentes del INSALUD, nosotros creemos que no es exactamente en esos términos como está establecido en la ley. Prueba de ello es que se establece en los presupuestos. No tendría mucho sentido reproducir literalmente los supuestos, sería redundar en lo que ya está previamente establecido. Pero existen algunas distinciones que aquí no se contemplan, por tanto, nosotros mantenemos en sus términos la enmienda.

También mantenemos la enmienda 818 en sus propios términos.

En relación con la enmienda 819, creemos que, para establecer estos mecanismos importantes de control en las subvenciones, no hay por qué esperar a los presupuestos del año que viene. No hay por qué esperar, pues los argumentos que se nos dan en contra no nos convencen. No nos convence, por ejemplo, hablar de las empresas públicas, porque no están recogidas aquí. Por tanto, mal podemos plantear su exclusión cuando ya están excluidas.

Por otra parte, aquí se trata de fijar, de establecer unos mecanismos de garantía previos, coetáneos y posteriores a la concesión de las subvenciones, que no van a hacer otra cosa que garantizar la legalidad, la transparencia, el control de la Administración del Estado, pero sobre todo, el control del administrado, el control de las empresas, el control de los ciudadanos en la percepción de estas subvenciones, en el destino que se da a esas subvenciones y, en definitiva, en la adecuación entre los fines que se propone la Administración pública al concederlas y los resultados que de las mismas se obtiene. Por tanto, para lograr esos objetivos en absoluto creemos que haya que esperar a los nuevos presupuestos. Se pueden intentar ya en este momento. Se especifica claramente cuáles son las entidades afectadas y, en todo caso, como sabe muy bien el portavoz socialista, este texto no ha sido una invención de estos grupos, sino que, en definitiva, estaba en el anteproyecto y es un texto que había sido ya previamente estudiado, elaborado y que debería, por tanto, aprobarse ya en los presupuestos que estamos debatiendo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Gracias, Senador Fuentes.

¿El Senador Aguirre quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Gracias.

El Senador Quetglas, en nombre del Grupo del Centro Democrático y Social, tiene la palabra.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Empezaré por el final, por la enmienda 532. Nosotros pedimos que los umbrales mínimos de renta para acceder a becas cuando no haya centros en los municipios se modifiquen y se establezcan al doble. El Senador portavoz del Grupo Socialista nos señala la predisposición positiva de su Grupo a aceptar esta enmienda, pero dice que como no la tenemos cuantificada no la pueden aprobar. Señoría, quiero decirle sinceramente que a mi Grupo parlamentario y a este portavoz que les habla les es absolutamente imposible cuantificarlo. Les es absolutamente imposible cuantificar eso. Usted lo sabe perfectamente. Si quiere usted una cuantificación, tendríamos que esperar. Lo que yo tendría que hacer sería una pregunta escrita al Gobierno en los siguientes términos: ¿En cuánto valoraría el Gobierno lo que significaría la adopción de esta medida? Cuando el Gobierno me contestara, yo le diría a usted: la valoración que se puede hacer es ésta. Me parece que usted tiene mayores facilidades y mayor capacidad de diálogo para encontrar esa respuesta que yo mismo.

Desde el momento en que se propuso la enmienda, en su debate en comisión, le dije que para nuestro Grupo era absolutamente imposible cuantificar cuántos becarios más habría si, en cada uno de los municipios españoles donde no hay centros pero sí ciudadanos con aspiraciones o con ganas de hacer estudios en centros que no existen en ese municipio, accediesen a esas becas; ahora no pueden acceder porque su nivel de rentas se lo impide. La respuesta, señor García Sánchez, no la sé. El Gobierno tiene mayores posibilidades de estimarlo, no de saberlo, pero de estimarlo sí. Realmente, pedirnos una cuantificación de una enmienda como la que estamos planteando, no nos parece una respuesta adecuada. Si ustedes tienen la voluntad política de aprobarla yo no creo que el coste sea lo que impida a su Grupo a hacerlo. Es decir, yo creo que es una cuestión de voluntad política, y punto.

Quiero incidir en lo que es la enmienda principal a este título, que compartimos con el Grupo Mixto y también con el Grupo Popular —aunque el Grupo Popular no la ha puesto a este título sino a una disposición adicional—, porque sinceramente, señorías, no nos parecen de ninguna manera convincentes sus argumentos.

En primer lugar, el sector público, aquellas empresas pertenecientes al sector público que reciben subvenciones están excluidas de esta enmienda a las que solamente se les aplica un carácter supletorio. Es lógico. Es lógico, porque lo que pretende la enmienda es el control del ejercicio real, de la correcta aplicación de las subvenciones, especialmente a las empresas y a las familias sobre las que la Administración no tiene una titularidad de control, porque lógicamente las empresas pertenecientes al sector público que reciben subvenciones —que además en este Presupuesto son algunas que están tasadas, y como dijo

el Ministro de Economía y Hacienda en el debate presupuestario, son empresas públicas u organismos autónomos mucho más a efectos de nomenclatura que a efectos reales, porque su implicación con la Administración Pública es tan fuerte que difícilmente se les puede considerar dentro del ámbito de las empresas públicas y, por ejemplo, él se refería en un caso concreto a RENFE— están fuera de lo que es el ámbito de control que nosotros proponemos para las empresas públicas.

La segunda argumentación es mucho más preocupante. Usted ha dicho que la aplicación de estos criterios de control podrían poner en peligro y significar la eventual desaparición de algunas de las empresas que ahora son receptoras de este tipo de subvenciones. La verdad es que ese argumento no solamente es preocupante sino que es un argumento muy fuerte a favor de la enmienda. Es decir, si lo que significa ese argumento es que hay empresas o asociaciones que están viviendo de las subvenciones, pero que si nosotros efectuamos un control para ver si esas subvenciones se dedican a aquello para lo que han sido presupuestadas éstas desaparecerán, quiere decir que estamos tirando el dinero, señoría. Quiere decir que estas empresas desaparecerían, porque si controlásemos las subvenciones, se vería que no las están aplicando al fin para el que fueron concedidas. Es su argumento. Y la verdad es que nos preocupa que usted nos diga que no van a establecer un control sobre las subvenciones, porque si lo establecen, las empresas subvencionadas van a desaparecer.

Por último, alude usted a problemas de tipo competencial, y yo sinceramente —a lo mejor no he comprendido muy bien su argumentación— no he entendido a qué se refería, si a problemas competenciales con las comunidades autónomas o a problemas competenciales con relación a directivas europeas. La verdad es que se me ha escapado su argumento. En cualquier caso, yo no creo que haya dudas competenciales con relación a que el Estado disponga de instrumentos de control sobre el uso de su dinero. No puede haber duda competencial alguna. Ni en relación con las comunidades autónomas —en cualquier caso, la aplicación de esta normativa sería con carácter supletorio y podrían hacerla suya, y estaría bien que la hicieran inspirada en esta medidas— ni, sospecho yo, con respecto a directivas de la Comunidad Económica Europea.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Gracias, Senador Quetglas.

Senador Cardona, ¿va a utilizar el turno en nombre de su Grupo? (Pausa.) Gracias.

Por el Grupo Popular, el Senador Martínez Randulfe tiene la palabra.

El señor MARTINEZ RANDULFE: Gracias, señor Presidente.

Señorías, si hay que adaptarse a la normativa europea, adaptémonos. Sus compañeros saben que colaboré en la adaptación de normas españolas a la Comunidad Econó-

mica Europea. Si hay que racionalizar las leyes, racionalicémoslas. Yo, señorías, pretendía seguir el criterio de unicidad de norma que en su día me enseñó el Profesor Tierno y que decía: «Los criterios normativos no deben ser alterados en un mismo cuerpo legal». Eso me lo enseñó el Profesor Tierno en primero y quinto de carrera.

Pedimos y seguimos pidiendo que se racionalice la labor legislativa, y entendemos que haciendo de la Ley de Presupuestos un cajón de sastre para unas cosas sí y para otras no, no nos vale. De ahí que mantengamos las enmiendas y anunciemos que votaremos afirmativamente las de los otros grupos que son congruentes con las nuestras.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Gracias, Senador Martínez.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador García Sánchez.

El señor GARCIA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías por sus palabras y por la forma de tono de las mismas.

Respecto a las subvenciones, creo que sería bueno que se hicieran la siguiente reflexión: ¿Contemplan las enmiendas de sus señorías, en concreto las del Grupo Mixto y las del CDS, los efectos que en ese tema tiene incluso la adaptación a la Comunidad Económica Europea? ¿Se contempla? Seguro que no, señorías. Por consiguiente, aunque sea sólo desde ese punto de vista, se hace aconsejable demorar el establecimiento del control.

Respecto a las becas, quiero decirle al señor Quetglas que la disposición positiva o negativa del Grupo Socialista vendrá dada en función de los estudios o análisis que el Grupo Socialista realice en este caso para los siguientes presupuestos. Pero cuando cualquier Senador socialista plantea una enmienda a la dirección del grupo, ésta exige que se haga esa cuantificación y un estudio serio de la enmienda. Lo que comprenderá su señoría es que, si el portavoz de presupuestos del Grupo Socialista tiene que analizar las 1.180 enmiendas y el coste de las mismas en siete días, es bastante difícil, a pesar de la ayuda que puedan prestar los distintos Ministerios. Por consiguiente, no se preocupe su señoría, continuaremos hablando de este asunto de cara al futuro; me parece interesante; creo que podemos seguir analizándolo. Tenemos los presupuestos para 1991 a la vuelta de la esquina, vamos a seguir hablando, vamos a seguir haciendo números el CDS y el Grupo Socialista y vamos a cuantificar lo que en su enmienda no se cuantifica.

El señor Quetglas también tiene la tentación de decir que yo dije lo que no dije. Ya tuve algún problema en Comisión, pero ahora también lo estoy teniendo. Como creo que soy bastante riguroso en lo que digo —al fin y al cabo, señoría, uno es reo de lo que dice y es dueño de lo que calla—, debo leerle textualmente lo que dije, ya que cada enmienda tiene un informe. Se lo leeré brevemente, señoría: el régimen propuesto puede incidir directamente en determinadas empresas estatales cuyo único objeto actual

lo constituye la financiación de determinadas actividades que, a la luz de dicho régimen, pudieran ser consideradas como subvenciones —actividades, señoría—, situación que podría llevar a su desaparición. Por consiguiente, no he dicho lo que usted dice que dije sino lo que estoy diciendo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Bayona Aznar): Gracias.

Vamos a entrar en el debate del Título III, artículos 19 a 36, Disposiciones Transitorias primera a tercera y Disposición Final quinta.

Título III

Para defender sus enmiendas números 820 a 858, tiene la palabra el Senador Fuentes Navarro.

El señor FUENTES NAVARRO: Señor Presidente, señorías, antes de nada voy a empezar por retirar tres enmiendas, las números 853, 854 y 855, porque inciden esencialmente en una cuestión que se va a debatir en esta Cámara la próxima semana: el proyecto de ley de negociación colectiva de los funcionarios. Creemos que ese es el mejor ámbito para discutir estas cuestiones que, por otra parte, ya han sido básicamente negociadas con las organizaciones sindicales y con todos los grupos mayoritarios del Congreso. Obviamente, van a tener también aquí este acuerdo unitario de las fuerzas políticas por cuanto este proyecto de ley supone un instrumento muy importante de equiparación —naturalmente, salvando todas las distancias— en la negociación colectiva de los funcionarios, es decir, de los empleados del Estado, con los trabajadores de las empresas particulares.

Dicho esto, para defender este conjunto de enmiendas previamente quiero formular algunas consideraciones generales, y pido disculpas a sus señorías por lo avanzado de la hora; en cualquier caso, creo que no es imputable a este Senador, ya que yo por mi cuenta no he planteado este año ninguna enmienda de veto a la totalidad. Esperaba que el cambio de talante que ha existido por parte del Gobierno —y no voy a analizar cuáles han sido los motivos que han comportado este cambio de talante del Gobierno—, sobre todo en la negociación con las organizaciones sindicales, comportaría también un cambio en el talante del grupo parlamentario en cuanto a la aceptación de muchas de las enmiendas que nosotros planteamos, que van en esa misma dirección de recoger y plasmar ese espíritu negociador y esos contenidos de la negociación con los sindicatos; de plasmarlo, a nuestro juicio adecuadamente, en los Presupuestos Generales del Estado.

Se ha dicho aquí esta mañana y esta tarde que la economía española ha crecido, y ello es cierto sin duda alguna. El portavoz socialista incluso reclamaba que se reconociera que en ese crecimiento de la economía española sin duda algún mérito habría tenido el Gobierno socialista. Y yo quiero aceptar y reconocer que una parte del mérito de ese crecimiento —evidentemente todos sabemos que no todo el mérito, porque obedece a múltiples factores— puede corresponder al Gobierno socialista. Y diría más: corresponde al Gobierno socialista. Ahora bien, esto

nos lleva, a mi juicio automáticamente, a otra consideración: que situados en el estado actual de nuestra economía, lo que debemos ver es si esa situación que tiene nuestra economía comporta correlativamente que el nivel de los servicios que presta el Estado se corresponde con esa situación económica que ha mejorado. A eso nos referiremos, por lo menos por mi parte, de forma especial y específica en el momento de tratar las distintas secciones, pero también debemos ver si en un apartado tan concreto y tan directamente relacionado con las facultades del Gobierno, como son las percepciones de sus funcionarios y de sus empleados con relación laboral, esta mejora de la situación en nuestro país se traduce adecuadamente. Yo creo, sinceramente, que no es así. Esta mejora de la situación económica en nuestro país, este cambio en la actitud del Gobierno que está negociando, con los altibajos que la negociación comporta, con las centrales sindicales no se ha traducido en estos presupuestos en la aplicación adecuada de las correspondientes consecuencias. No se puede señalar que tenemos, y podemos tenerlo, un mérito en la mejora de la situación económica y no llegar a la consecuencia evidente de que eso comporta unas obligaciones para con los funcionarios, para con los empleados del Estado. Y en esa dirección van nuestras enmiendas.

Hemos discutido en Comisión y en el Congreso si los funcionarios y los trabajadores del Estado en general han sufrido o no pérdidas del poder adquisitivo. Yo creo que ésta es una discusión que siempre puede dar la razón a quien sostiene determinadas posiciones, porque es lo cierto que hay colectivos importantes, para nosotros mayoritarios, que han perdido poder adquisitivo en los últimos años. Es evidente que hay otros colectivos que seguramente no han tenido esa pérdida, pero lo cierto es que de la existencia de estos colectivos que no han resultado tan perjudicados no podemos deducir que el conjunto de los funcionarios y de los empleados públicos no han resultado perjudicados y, por tanto, no han participado, no participan adecuadamente en esa mejora de la situación en nuestro país. Esa es, en definitiva, la justificación de la mayor parte de nuestras enmiendas, a las que de forma individualizada me voy a ahora a referir.

La primera enmienda lo que pretende ni más ni menos es que la previsión de incremento que se fija para las percepciones salariales y complementarias, sueldo y complementos de los funcionarios y los trabajadores de la Administración, sea del 7 por ciento con carácter general y global, con un 2 por ciento adicional para mejorar a colectivos clarísimamente más perjudicados.

Introducimos también enmiendas que van en la dirección de consolidar las mejoras que han adquirido ya los funcionarios y los trabajadores de la Administración y que además obedecen a compromisos que han adquirido con los sindicatos, y que creemos que deben plasmarse en los presupuestos, porque es la forma de establecer un control, y de que no se caiga en aquella discrecionalidad a la que antes aludía, sino que nos movamos dentro de los parámetros de lo establecido presupuestariamente. Por tanto, tenemos un conjunto de enmiendas que van en esa dirección.

También hemos establecido en una enmienda la modificación de la masa salarial. Creemos que hay toda una serie de conceptos que no deben formar parte de la masa salarial, muchos de ellos no forman parte de ella por imperativo de la ley, pero creemos que tampoco los aumentos por antigüedad y de clasificación profesional, por su carácter específico e individualizado, deben formar parte de esta masa salarial.

Querría referirme también muy en concreto a algunas enmiendas como la 828 y la 829, que se refieren a complementos específicos a los directores generales. Nosotros creemos que hay que establecer un límite al complemento específico de los directores generales, teniendo en cuenta la retribución de los subsecretarios; nos planteamos también, y creo que hay otras enmiendas en la misma dirección, eliminar el complemento de productividad, porque lo consideramos absolutamente inadecuado para retribuir a los altos cargos. Creo que es ociosa la necesidad de argumentar sobre esta cuestión. Plantearnos que a los altos cargos hay que retribuirlos con un complemento de productividad nos parece fuera de lugar.

Naturalmente, establecemos toda otra serie de enmiendas que no hacen sino adecuar a estas previsiones del 7 por ciento, más el 2 por ciento complementario, los sueldos, los trienios, las percepciones de los distintos colectivos, extendiéndonos también, como es obvio, a los funcionarios de la Administración de Justicia. *(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)*

En definitiva, y naturalmente sin perjuicio de extendernos en su momento, si cabe, en el turno correspondiente de portavoces, creemos que por toda esa serie de factores, porque se trata de fijar, ni más ni menos, que unas garantías para estos colectivos que tiendan a equipararlos al conjunto de los trabajadores, que permitan que les alcancen estas ventajas derivadas de la mejora en la situación económica, de la mejora en la situación de nuestro país, que mal puede justificarse si no sirve también para que el conjunto de los ciudadanos —y de una forma especial y específica los funcionarios y los empleados del Estado en general— pueda beneficiarse de ella, es por lo que pedimos la votación favorable de estas enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Fuentes.

Tiene la palabra el Senador Aguirre, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, para la defensa de su enmienda, por tiempo de cinco minutos.

El señor AGUIRRE BARAÑANO: Muchas gracias, señor Presidente.

Nosotros tenemos la enmienda 932 al artículo 21.4, que se refiere a los directores generales. Señorías, ésta es una de las perlas de este presupuesto. Voy a leer literalmente lo que dice este artículo tal como viene redactado: «Todos los Directores Generales tendrán idéntica categoría y rango, sin perjuicio de que el complemento de productividad que, en su caso, se asigne a los mismos por el titular del Departamento dentro de los créditos asignados para tal fin pueda ser diferente, de acuerdo con lo previs-

to en el artículo veintidós, uno, E) de la presente Ley». Nosotros pedimos que se acabe ahí, porque a continuación, fijense en lo que sigue: «... a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda...» —se puede referir a todos los directores generales de todos los Ministerios— «... el Gobierno pueda establecer complementos específicos distintos con el fin de asegurar que su retribución total guarde la relación adecuada con la estructura orgánica y el contenido...» —atención— «... de especial dificultad técnica...» —para ser director general— «... dedicación...» —para ser director general— «... responsabilidad...» —para ser director general— «... peligrosidad o penosidad de dichos Altos Cargos». Señores, si para ser director general no se necesita una cierta responsabilidad técnica, no se necesita un cierto grado de cualificación técnica, una dedicación, díganme ustedes para qué está esto. Pues está simplemente para algo muy claro: a ustedes se les está marchando la gente, sobre todo del Ministerio de Economía y Hacienda, como lo ha reconocido el señor Borrell, y se les está marchando tanto a la empresa privada como a la empresa pública que ustedes dominan, porque cobran más dinero. Esto es una salida para que el Ministerio de Economía pueda hacer con todos los directores generales de todos los Departamentos lo que quiera.

El señor Ministro para las Administraciones Públicas dijo no hace mucho que el Ministerio de Economía tenía un gran poder y que no tocaban bola. Desde luego, tal como está esta disposición, el que toca bola aquí es el Ministro de Economía, los demás no tocan nada. Además, si para ser director general no hace falta tener unos conocimientos técnicos, no hace falta tener dedicación, una responsabilidad, etcétera, vamos a ver quién puede ser director general. Se da por supuesto que en el cargo están esas cualidades.

Ustedes tienen un problema que empieza por la retribución del Presidente del Gobierno. Yo creo francamente que es baja, porque un Presidente de gobierno que no gane diez millones brutos crea problemas cuando a continuación ya los ministros tienen que ganar menos, pero todos los ministros ganan igual, gana igual la Ministra Portavoz, con toda su grandísima responsabilidad, que el Ministro de Economía y Hacienda que tiene otras responsabilidades, de «n» tendiendo hacia infinito. Este es el problema que tienen y que no plantean. A partir de ahí, ocurre que la gente válida de la Administración, con categoría de director general para abajo, se les va a marchar, salvo que quiera hacer carrera política, que es lo que está ocurriendo.

Nosotros mantenemos la enmienda, porque entendemos que en una democracia no se le pueden dar al Ministerio de Economía y Hacienda estas atribuciones. Las atribuciones de que, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, se puedan establecer complementos específicos para todos los directores generales de todos los Departamentos. Nosotros esto no lo entendemos y mucho menos con las explicaciones que aquí se dan de dificultad, dedicación y responsabilidad. Para nosotros, o esto va en el cargo, o no tiene ningún sentido.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Aguirre.

A continuación, están las enmiendas del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, de la 533 a la 550, incluyéndose la enmienda de vuelta al texto del Congreso.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Quetglas, por un tiempo de diecinueve minutos.

El señor QUETGLAS ROSANES: Muchas gracias, señor Presidente.

Nosotros vamos a defender la enmienda de veto con la misma argumentación que las enmiendas parciales números 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547 y 548, porque son coincidentes. Como saben sus señorías, pretendemos que las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas no aumente un 6 por ciento, sino un 7, y no por argumentos de fácil venta electoral, como se nos ha insinuado por parte del portavoz socialista, sino por razones rigurosas, en primer lugar, de carácter técnico. Es decir, la productividad del sector público no solamente lo autoriza sino que lo aconseja, porque contrariamente a opiniones generalmente extendidas, los estudios y los análisis del comportamiento de la productividad en el sector público demuestran que ésta también ha crecido por lo menos tanto como en el sector privado. Por lo tanto, no hay ninguna razón para discriminar al sector público en cuanto al incremento de las retribuciones con respecto al sector privado, y nosotros —insisto— con el 7 por ciento estamos defendiendo una postura tan moderada y poco reivindicativa como decir simplemente que el incremento del sueldo a los funcionarios públicos va a absorber la inflación prácticamente habida en el año 1989; nada más, eso es todo. También por una razón de justicia. Es cierto que durante una determinada época los Presupuestos Generales del Estado, al incrementar las retribuciones de los funcionarios, hacían subir de manera importante, en relación con el ascenso total, la parte correspondiente a las retribuciones básicas, no tanto como la relativa a las complementarias, lo cual, a efectos de clases pasivas, efectivamente producía un beneficio importante para la clase funcionarial. Sin embargo, ésta es una tendencia que se ha paralizado en los últimos años. En este momento hemos petrificado la relación entre retribuciones básicas y retribuciones complementarias. Más que eso, se ha reducido esta relación al introducirse elementos no ya complementarios, sino de carácter discrecional, dentro de las retribuciones de los funcionarios, y además de manera creciente, en concreto, los complementos por productividad y los complementos específicos. Por tanto, no se puede pretender que no se sabe por qué —y en este momento me sumo al argumento que el señor Aguirre esgrimía en relación con los directores generales respecto al conjunto de los funcionarios— se está produciendo una desincentivación constante de los mismos y una fuga del sector público al privado.

Sé que hay un argumento que se está utilizando por parte de la mayoría, que dice que el conjunto de retribuciones de personal no sube el 6 por ciento, sino el 11; es

decir, la masa salarial sube el 11 por ciento. Es cierto. Sube el 11 por ciento, con lo cual, primero tenemos que descontar el incremento que absorbe el aumento de plantillas, no siempre justificado, no siempre justificable, especialmente en algunas unidades administrativas que han sufrido una merma competencial importante con el proceso de transferencias a comunidades autónomas, pero, en fin, hay un incremento de plantillas que absorbe buena parte de ese incremento del 6 al 11. Pero el problema fundamental es que la parte que está subiendo es el tramo discrecional de complementos específicos y de complementos de productividad, no el tramo complementario.

Con ello estamos poniendo en entredicho, severa y profundamente, lo que es el régimen de relación estatutaria de los funcionarios con la Administración pública. Entendemos, asumimos y asimilamos que haya que introducir determinados criterios para estimular la productividad, que no se están produciendo bien y, sobre todo, que no se están midiendo bien, pero el frágil equilibrio entre el incentivo y la productividad y el respecto a la legalidad de un régimen estatutario que, además, está sentenciado por el Tribunal Constitucional, no autoriza a que el proceso de discrecionalización de las retribuciones de los funcionarios llegue a límites tan considerables como aquél al que se está llegando si el argumento que se nos va a utilizar es: «vamos a subir la masa salarial el 11, lo que pasa es que las retribuciones básicas y las complementarias, es decir, las legales, vamos a subirlas sólo el seis; el resto, las subiremos como a nosotros o como al jefe de la unidad correspondiente nos parezca».

El cuarto argumento para defender esta subida es sencillamente por eficacia de la política económica. Nos congratulamos de que las autoridades monetarias y económicas reconozcan que el factor salarios no es un factor responsable en estos momentos ni principalmente de los componentes de la inflación. Estamos de acuerdo y ya lo sabíamos. Pero, entonces, ¿por qué no se articula la política en consecuencia con esta creencia? ¿Qué es lo que se va a conseguir? ¿Se esperan frenar tirones de demanda sobre la base de discriminar a un colectivo, el de funcionarios y personas cuyas retribuciones están dependiendo del Presupuesto? Lo único que van a conseguir son peores rendimientos y falta de incentivos.

Y eso conecta con nuestra enmienda número 540, sobre los complementos de productividad. Insistimos en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el respeto a la legalidad de la relación estatutaria de los funcionarios y la introducción de incentivos a la eficacia y a la productividad. Lo que pretendemos es evitar las discrecionalidades de la autoevaluación que significan los incentivos de productividad, puestos en manos de los jefes de las unidades administrativas, e intentamos que sean las Cortes Generales las que determinen, no los complementos de productividad individualizados, como es lógico, que va a corresponder a las unidades administrativas correspondientes, pero sí los criterios con que se va a hacer y, en función de las prioridades políticas, sociales y económicas que se establezcan en la Ley de Presupuestos, asignar

los criterios de productividad. Si queremos que determinados sectores de actividad de la administración pública sean especialmente prioritarios y, por tanto, funcionen mejor, es importante traer a los mejores funcionarios, a los más capaces o premiar a aquellos que están desarrollando estos programas con especial interés vía complementos de productividad. ¿Quién debe determinar esos criterios? Indudablemente, las Cortes Generales y no la autoridad administrativa. Las Comisiones de Presupuestos de las Cortes son las que deben determinar el orden de prioridad de los baremos de gasto y los baremos de complemento de productividad.

Con esta medida queremos introducir además —no lo queremos dejar de poner en evidencia— que los criterios con los que se van a medir los complementos de productividad sean otros que los que se están empleando ahora. Todos ustedes son conscientes de que hoy en día no hay otra medida de la productividad de un puesto de trabajo que preguntarle a un señor: «usted tenía tanto de presupuesto, ¿cuánto ha consumido? ¿Tanto?, perfecto. Su productividad es muy alta si ese porcentaje es alto». Y eso la verdad es que en una economía moderna, con una administración moderna, no nos sirve para nada, porque lo único que está haciendo es estimular esa patología burocrática de que cuanto mayor sea el presupuesto, más importante es la unidad y más importante es el funcionario correspondiente. Por el contrario, queremos introducir criterios de medición de la productividad en términos de unidades físicas en la medida de lo posible; de kilómetros de carreteras trazados o de camas de hospital habilitadas, o actos médicos efectuados, o cualesquiera otras que nos pongan auténticamente en conexión con la productividad efectiva y no con la productividad en términos de cumplimiento del presupuesto asignado.

Entendemos que son criterios que deben introducir las Cortes Generales y que los Departamentos ministeriales sean los que fijen las cuantías individuales.

Nuestras enmiendas números 549 y 550 hacen referencia a que no entendemos que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 sea el lugar adecuado para producir reformas importantes en el estatuto del personal sanitario. Mire usted, creo que nosotros —y así lo pusimos de manifiesto en la Comisión— mantenemos una postura matizada con relación a la capacidad de la Ley de Presupuestos para modificar las otras leyes. ¿Cuál es nuestro matiz? Que no nos produce ningún tipo de escándalo especial el hecho de que la Ley de Presupuestos modifique leyes en función de que es un instrumento de la política económica, y las determinaciones de la política económica deben alterar, por supuesto, algunos cuadros legislativos vigentes. Estamos de acuerdo; pero creemos que debemos exigir, en nombre de una elemental disciplina sistemática y también presupuestaria, que las leyes de presupuestos se limiten a cambiar aquello que es cambiante de las otras leyes, es decir, los aspectos coyunturales, las actualizaciones de los precios, de las tablas, de los tipos, y aquellas cuestiones que se oponen a objetivos de política económica explicitados en el presupuesto de cada año. Pero lo que no nos parece correcto desde el pun-

to de vista sistemático, aunque evidentemente es legal y está sentenciado por el Tribunal Constitucional, lo reconocemos, es que las leyes de presupuestos se aprovechen para introducir reformas profundas, estructurales, en aquellas cuestiones que requieren un debate, una reflexión profunda y un análisis específico. Y, por supuesto, el régimen del personal estatutario de la sanidad pública es una cuestión que no puede entrar de matute y sin debate dentro de un proyecto de presupuestos para alterar una relación que es de carácter estructural y que entronca con otro tipo de planteamientos.

Por todas estas razones, defendemos nuestras enmiendas de veto y las parciales al Título III de la Ley de Presupuestos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Quetglas.

Vamos a suspender aquí el debate y a iniciar la votación de las enmiendas y del articulado correspondientes al Título I, comenzando por las del Senador don Roc Fuentes Navarro, del Grupo Mixto, votos particulares que se corresponden con los números 812, 813 y 814 de sus enmiendas. Pueden votarse agrupadamente.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 98; en contra, 124; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos, a continuación, a votar los votos particulares suscritos por don José María García Royo, correspondientes a las enmiendas 1.174 y 1.176. Se pueden votar agrupadamente.

Se inicia la votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 98; en contra, 127.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votos particulares correspondientes a las enmiendas suscritas por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, números 927, 928 y 929.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 99; en contra, 126.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

El señor QUETGLAS ROSANES: Querría pedir votación separada, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Dígame su señoría de cuáles.

El señor QUETGLAS ROSANES: Enmiendas 637 y 638.

El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, estas pueden votarse agrupadamente.

Iniciamos la votación de los votos particulares suscritos por el Grupo parlamentario de Convergència i Unió, correspondientes a las enmiendas 637 y 638.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 99; en contra, 126.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos, a continuación, a votar conjuntamente los restantes votos particulares suscritos por el Grupo de Convergència i Unió, que se corresponden con las enmiendas números 639, 640, 641, 642, 717, 718 y 719.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 92; en contra, 127; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

El señor QUETGLAS ROSANES: Quisiéramos pedir votación separada, que puede ser a su vez conjunta, para las enmiendas números 27, 28 y 29.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por lo tanto, vamos a votar los votos particulares correspondientes a las enmiendas suscritas por el Grupo Parlamentario Popular números 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 153, 154, 155, 501 y la enmienda en la que el Grupo Popular pretende la vuelta al texto del proyecto de ley remitido por el Congreso y que se modificó por la enmienda socialista número 1.246.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 96; en contra, 126; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar agrupadamente los votos particulares correspondientes a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, número 27, 28, y 29.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 91; en contra, 132; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

A continuación, vamos a pasar a votar el dictamen correspondiente al Título I, excepto los artículos números uno, dos, tres, cuatro y once, que se votarán al final del proyecto de ley, y los anexos I, II y VII del texto del dictamen, conjuntamente.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos

emitidos, 224; a favor, 132; en contra, 91; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Pasamos, a continuación, a la votación de las enmiendas correspondientes al Título II y a los Anexos V y VI, comenzando por las que, en forma de votos particulares, fueron suscritas por el Senador don Roc Fuentes Navarro y que se corresponden con los números 815, 816, 817, 818 y 819.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 98; en contra, 127.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, voto particular suscrito por don José María García Royo, del Grupo Popular, correspondiente a la enmienda número 1.177.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 99; en contra, 127.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, votos particulares suscritos por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, correspondiente a sus enmiendas número 930 y 931.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 91; en contra, 127; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

A continuación, vamos a pasar a votar los votos particulares mantenidos por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, correspondientes a sus enmiendas números 530, 531 y 532.

El señor GARCIA SANCHEZ: Con su permiso, señor Presidente, el Grupo parlamentario Socialista propone una enmienda transaccional al Grupo del Centro Democrático y Social con relación a su enmienda 532, de forma que el artículo 17 bis, que luego trasladaré con su nueva redacción a la mesa, diga textualmente lo siguiente: «Los umbrales máximos de renta familiar para poder acceder a las becas y ayudas al estudio en los niveles universitarios y medio, se multiplicarán por 1,5 en los casos en que no exista centro correspondiente a los estudios que se vayan a efectuar en el municipio de residencia del solicitante». Todo ello está en línea, señor Presidente, con lo que ya comenté en el debate correspondiente.

Ruego, en consecuencia, al CDS que manifieste su postura sobre la enmienda 532 y sobre la presente enmienda transaccional del Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Senador García, sabe su señoría

que para suscribir una enmienda transaccional, existiendo voto particular, necesita que ésta sea suscrita por los grupos parlamentarios siempre y cuando constituyan mayoría en la Cámara. De tal manera que la Presidencia decidirá cuando haya escuchado la opinión del Senador Dorrego, que me había pedido la palabra.

El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, aceptamos la enmienda transaccional.

El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo parlamentario Popular tiene la palabra.

El señor BRIS GALLEGO: Queremos que la enmienda 532 se vote aparte.

El señor PRESIDENTE: Sí, por supuesto.

¿Existen grupos parlamentarios dispuestos a suscribir la enmienda transaccional? *(Pausa.)* En ese caso, vamos a dejar este voto particular para el final, y ruego a sus señorías que, por lo menos, manifiesten a la Mesa con algún texto escrito fehaciente que, efectivamente, tiene el respaldo reglamentario.

Vamos a continuar la votación, y sugiero a los portavoces de los grupos interesados que suscriban en un documento la enmienda transaccional. Muchas gracias.

Vamos a pasar a votar las enmiendas números 530 y 531, del Grupo Parlamentario del CDS, que fueron reservadas como votos particulares. Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 92; en contra, 128; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

A continuación, vamos a pasar a votar el voto particular correspondiente a la enmienda número 643, suscrito por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor 96; en contra, 126; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. *(El señor Quetglas Rosanes pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Quetglas.

El señor QUETGLAS ROSANES: Gracias, señor Presidente.

Quisiéramos pedir votación separada, que puede ser también conjunta, de los votos particulares números 32, 33, 34 y 36.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Vamos a pasar a votar los votos particulares correspondientes a las enmiendas suscritas por el Grupo Parlamen-

tario Popular números 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 156.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 91; en contra, 125; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Vamos a pasar a votar agrupadamente, tal y como solicita el portavoz del Grupo del CDS, los votos particulares correspondientes a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 32, 33, 34 y 36.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 96; en contra, 124; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados. *(El señor García Sánchez pide la palabra.)*

El señor García Sánchez tiene la palabra, puesto que se inicia el debate.

El señor GARCIA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

Tengo la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Socialista firmada por los portavoces de los grupos parlamentarios Mixto, Convergència i Unió, PNV y del Centro Democrático y Social. Sin embargo, no está firmada por el portavoz del Grupo Popular. Pregunto a la Presidencia si esta enmienda se puede tramitar en estas condiciones.

El señor PRESIDENTE: Si se puede tramitar en estas condiciones y ruego a su señoría que nos explique brevemente la enmienda para que quede alguna constancia en el «Diario de Sesiones».

Hay un turno en contra y turno de portavoces.

El señor GARCIA SANCHEZ: Señor Presidente, ya en el debate correspondiente manifesté la posición favorable del Grupo Socialista a la enmienda presentada por el CDS, aunque debía de matizarse la cuantía económica. Después de las conversaciones mantenidas y de los análisis efectuados, la nueva redacción del artículo 17 bis, sería...

El señor PRESIDENTE: Perdona que le interrumpa, Senador García. La enmienda la leerá un Secretario de la Mesa. Yo le ruego que la defienda tan sólo.

El señor GARCIA SANCHEZ: Sí, señor Presidente.

En definitiva, se trata de que los umbrales máximos de renta familiar para poder acceder a las becas y ayudas al estudio de los niveles universitario y medio se multipliquen por 1,5 en los casos en que no exista centro. Eso es

lo que propone la enmienda transaccional del Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra? *(Pausa.)* ¿Turno de portavoces? *(Pausa.)* El Senador Dorrego tiene la palabra.

El señor DORREGO GONZALEZ: Señor Presidente, presentamos esta enmienda porque, realmente, con los umbrales que se exigen en este momento de renta mínima para poder acceder a becas en muchos sitios del mundo rural, es imposible acceder a ellas por sobrepasar la renta mínima. Sin embargo, como ésta está en 900.000 pesetas, resulta que si una persona tiene que desplazarse a una universidad desde el mundo rural, desde una ciudad como puede ser Avila, y le cuesta 35.000, 40.000 ó 50.000 pesetas el desplazamiento, resulta que la renta familiar, que estaba en 80.000 pesetas al mes, queda reducida en 45.000 o a 50.000, con lo cual parece bastante razonable que esas personas puedan acceder a la beca. Nosotros proponíamos que eso se consiguiera con el doble, pero como se nos dice que sólo con el 1,5, aceptaremos ese 1,5.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Dorrego.

¿Algún otro grupo parlamentario desea hacer uso de la palabra? *(Pausa.)*

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Bris.

El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo no ha querido firmar la enmienda porque le parece insuficiente esa cantidad del 1,5 por la que se va a multiplicar. *(Rumores.)* Nos parece que el coeficiente 2 que es lo que se había solicitado en la enmienda, es más apropiado. No nos gusta que en Comisión no se apruebe absolutamente nada y que se tenga que aprobar todo en este Pleno. Siendo serios, debería haberse tomado ya una determinación por parte del Gobierno socialista precisamente para esta enmienda que favorece a la gente del medio rural. Yo precisamente soy de una provincia que... *(Rumores. Risas.)* Nosotros no hemos firmado porque no estamos de acuerdo en la forma —a pesar de sus risas— en que se está llevando este Pleno. Sí estamos de acuerdo con el coeficiente por el que hay que multiplicar.

Gracias, señor Presidente. *(Rumores.)*

El señor PRESIDENTE: Entiendo que no se refería a ningún miembro de la Mesa en cuanto a la forma de llevar el Pleno.

Vamos a pasar a votar la enmienda transaccional basada en el voto particular correspondiente a la enmienda número 532, por lo que ruego al señor Secretario proceda a la lectura de la misma.

El señor SECRETARIO (Oliveras i Terradas): El texto del artículo diecisiete bis quedaría redactado de la si-

guiente forma: Los umbrales máximos de renta familiar para poder acceder a las becas y ayudas al estudio de los niveles universitarios y medio se multiplicarán por 1,5 en los casos en que no exista centro correspondiente a los estudios que se vayan a efectuar en el municipio de residencia del solicitante.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario.

Vamos a pasar, pues, a votar la enmienda transaccional.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 225; a favor, 222; en contra, dos; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.

La Presidencia quiere hacer un ruego que, quizá, pueda llegar a ser una advertencia a los grupos parlamentarios.

Ruego a sus señorías que las enmiendas transaccionales lleguen a la mesa antes del comienzo de la discusión del artículo o título en que sus señorías vayan a aproximar posiciones. *(Rumores.)*

Por tanto, vamos a pasar a la votación del dictamen correspondiente al Título II y anexos V y VI del texto del dictamen conjuntamente, en el bien entendido que está ya incorporada la enmienda transaccional.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 126; en contra, 90; abstenciones, siete.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el texto del dictamen.

La sesión plenaria se reanudará mañana a las nueve de la mañana. Se suspende la sesión.

Eran las veintidós horas y diez minutos.

Imprime RIVADENEYRA, S. A. - MADRID

Cuesta de San Vicente, 28 y 36

Teléfono 247-23-00.-28008 Madrid

Depósito legal: M. 12.580 - 1961